

INE/CG816/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA Y SUS CANDIDATOS EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACAN DE OCAMPO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**, integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), el oficio con clave alfanumérica IEM-SE-CE-343/2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual remite copia del Acuerdo dictado dentro del expediente identificado como IEM-CA-24/2021 en cuyo punto Cuarto, determinó escindir y remitir a esta Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por la C. Lorena Elizabeth Gaona Matus, por propio derecho, en contra del Partido del Trabajo y la C. Tania Yunuen Reyes Corral como probable aspirante, precandidata y/o candidata a un cargo de elección popular en el estado de Michoacán de Ocampo postulada por el citado instituto político, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos. (fojas 01 a 51 del expediente digital)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“(…)

Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral de actos de campaña anticipada y de fiscalización de montos de recursos públicos a ser contemplados y disminuidos en su oportunidad de los gastos de campaña en contra de los partidos del Trabajo y Regeneración nacional o PT., y MORENA., con las consecuentes consecuencias de responsabilidad de los difusores de sus imágenes qua también se denuncia en este momento y que son Tania Yunuen Reyes Corral y Rachid González, la primera por el partido del Trabajo y la Segunda por el partido Regeneración nacional.

Lo anterior mediante la tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, en contra de todos los ya mencionados

(…)

Y en materia de fiscalización se encuentran previstas y sancionadas en el Reglamento de Fiscalización de este Instituto Electoral.

(…)

HECHOS

BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL

(…)

SEGUNDO.- *Es de conocimiento público que Tania Yunuen Reyes Corral es la Sindica del Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, es conocido que tiene intención y deseos de participar en el proceso electoral que corre, como Presidente Municipal de ese Municipio, aun y cuando no decide el cargo de elección popular de manera formal, la participación es atreves(sic) de los partidos del Trabajo y MORENA.*

(…)

TERCERO.- *Las denunciadas, Tania Yunuen Reyes Corral, han estado publicitando en bardas su nombre con so pretexto absurdo de ser afiliadora del Instituto Político del Trabajo(...), por eso se encuentran violando la propia constitución y la normatividad electoral, toda vez que con dichos actos realiza de manera flagrante propaganda personalizada de sus nombres, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer intereses particulares; violando en consecuencia el principio de equidad en la contienda que rige en los*

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

procesos electorales constitucionales, como el que se encuentra en curso para la elección del 2021.

CUARTO.- *Las acciones anteriormente denunciadas, han sido visualizadas con sentido simple de la vista, para promover su nombre, actos contrarios a la constitución, a la legalidad y a los principios democráticos; publicaciones que se describen en el siguiente recuadro:*

LIB. IGNACIO ZARAGOZA, A UN COSTADO DE LA PANADERÍA, FRENTE A LA CFE. BARDAS DE
2x5 metros. Aproximadamente

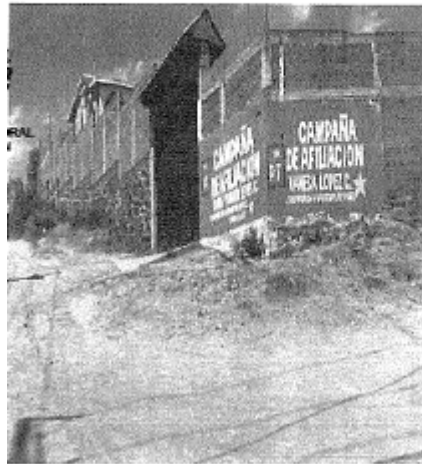
LOCALIZACIÓN: 19.5286268, -101.6127178



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

CALLE IBARRA, LIENZO CHARRO. DOBLE BARRA DE 2x4 METROS C/U. Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19°30'59.1"N 101°37'05.5"W



LIB. IGNACIO ZARAGOZA, PLAZA COMERCIAL CINEPOLIS, A UN COSTADO DE LA LECHERÍA. BARRA DE 2x6 metros. Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19°30'46.1"N 101°37'08.5"W



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

CALLE ANTONO ARIAGA, SUBIDA AL INFONAVIT 2, EN LA TORTILLERÍA. DOBLE BARDA DE 2x4 metros. Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19°30'28.6"N 101°37'06.3"W



AV. JAMUQUEN, ESQUINA CON MARTIN LUIS GUZMÁN. BARDA DE 2x6 metros. Aproximadamente.

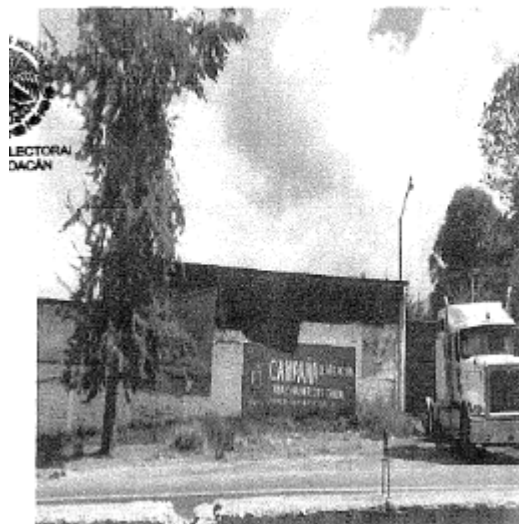
LOCALIZACIÓN: 19°30'19.8"N 101°37'02.0"W



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

CARRETERA SANTA CLARA- PÁTZCUARO BANDA DE 2x5 metros. Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19°29'32.5"N 101°35'17.4"W



AV. LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL NUMERO 96 BANDA DE 2X5 metros.
Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19°31'17.3"N 101°36'26.6"W



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, A UN COSTADO DE LA FISCALÍA. BARRA DE 2x4 metros.
Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19.5103581, -101.6167482



CALLE INDEPENDENCIA CASI ESQUINA CON SALIZ, COL. EMILIANO ZAPATA BARRA DE 2x7 metros.
Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19.5227923, -101.6113888



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

CALLE SALÚZ ESQUINA CON INDEPENDENCIA COL. EMILIANO ZAPATA. BARRA DE 2x5 metros.
Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19.5228940, -101.6114300



CARRETERA FEDERAL, TRAMO HUECURI-URANDEN. BARRA DE 2x3 metros. Aproximadamente.

LOCALIZACIÓN: 19.5378060, -101.6366689



Ubicaciones de 11 Testigos de la Denuncia:

1.	LIB. IGNACIO ZARAGOZA, A UN COSTADO DE LA PANADERÍA, FRENTE A LA CFE. BARRA DE
----	--

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

	2X5 metros. Aproximadamente: LOCALIZACIÓN: 19.5286268, -101.6127178
2.	LIENZO CHARRO. DOBLE BARDA DE 2X4 METROS C/U. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°30'59.1"N 101°37'05.5"W
3.	LIB. IGNACIO ZARAGOZA, PLAZA COMERCIAL CINEPOLIS, A UN COSTADO DE LA LECHERIA, BARDA DE 2x5 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°30'46.1"N 101°37'08.5"W
4.	CALLE ANTONIO ARRIAGA, SUBIDA AL INFONAVIT 2, EN LA TORTILLERÍA. DOBLE BARDA DE 2x4 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°30'28.6"N 101°37'06.3"W
5.	AV. JAMUQUEN, ESQUINA CON MARTIN LUIS GUZMÁN. BARDA DE 2x6 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°30'19.8"N 101°37'02.0"W
6.	CARRETERA SANTA CLARA-PÁTZCUARO BARDA DE 2x5 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°29'32.5"N 101°35'17.4"W
7.	AV. LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL NUMERO 96 BARDA DE 2x5 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19°31'17.3"N 101°36'26.6"W
8.	LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA, A UN COSTADO DE LA FISCALÍA. BARDA DE 2x4 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19.5103581, -101.6167482
9.	CALLE INDEPENDENCIA CASI ESQUINA CON SAUZ, COL. EMILIANO ZAPATA BARDA DE 2x7 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19.5227923, -101.6113888
10.	CALLE SAUZ ESQUINA CON INDEPENDENCIA COL. EMILIANO ZAPATA. BARDA DE 2.5 metros. Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19.5228940, -101.6114300
11.	CARRETERA FEDERAL, TRAMO HUECORIO-URANDEN. BARDA DE 2x3 metros.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

	<i>Aproximadamente. LOCALIZACIÓN: 19.5378060, - 101.6366689</i>
--	---

Los anteriores once testigos fotográficos de pintas de bardas indican el lugar exacto de las mismas en el Municipio y evidencian que la Sindico Municipal Tania Yunuen Reyes Corral.

Propaganda periodística:



Difusión en redes sociales:



<https://www.facebook.com/1506384837/posts/10224846796266316/?d=n>

17/2/2021

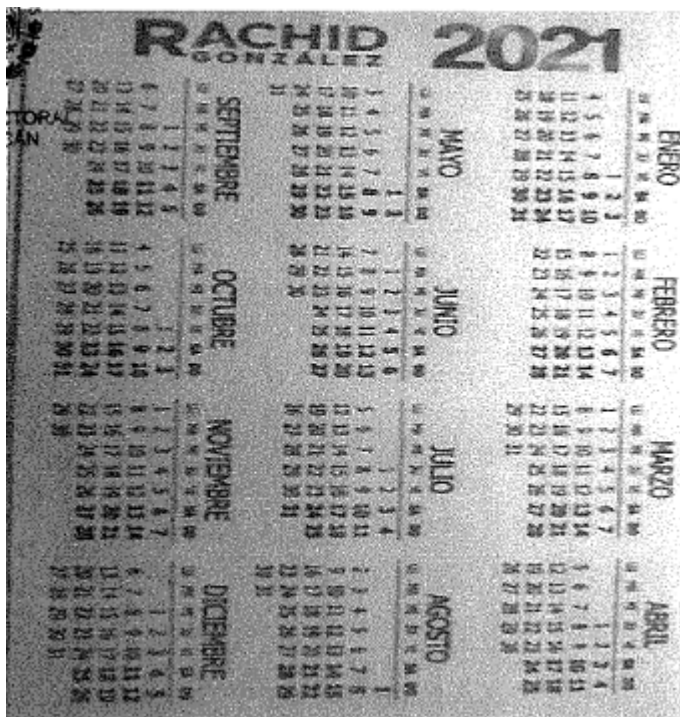
Se solicita inspección a la dirección electrónica anterior.

QUINTO.- propaganda de RACHID GONZALEZ



Se ve la imagen, rostro intención política e identificación de nombre como se le conoce. Rachid

En seguida presento Calendario con difusión política



Se ve la imagen, rostro intención política e identificación de nombre como se le conoce. Rachid



Dictamen consideración legal personal fiscalización, en base a reglamentación vigente:

La elaboración de matriz de precios del costo de las pintas de las bardas lonas y calendarios mas redes sociales ya transcritas que doy por insertas, debe tabularse en un costo económico a precio de costo por precio mercado de costo comercial de renta de bardas, pintura, trabajo de rotulista (...), costo de precio a redes sociales a solicitar voto.

La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la metodología del Reglamento de fiscalización para determinar el quantum, según a cada partido corresponda para deducirlos de los costos de tope de gastos de pre-campaña y campaña en su momento emitir el dictamen de autorización de precio en costos de uso de dineros para la campaña.

La apreciación costo publicidad, marketing, difusión, materiales, ha de ponerse bajos los elementos objetivos, del valor de gastos de pintas de bardas (...) y uso de redes sociales como elementos no reportados por el Partido del Trabajo (...) de sus militantes aspirantes a la precandidata o candidatura a la presidencia Municipal de Pátzcuaro.

La unidad Tecnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar los costos contratos, pagos y facturas a quienes hicieron las pintas, (...) y difusión de redes sociales y los contratos de las rentas de las bardas con base en el Reglamento de Fiscalización de este Instituto que establece que para determinar los costos, la autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de Proveedores o con las camaras o asociaciones del ramo de que

se trate, esto es que si los partidos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a las citadas Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no.

*Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE IEM debe considerar de inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén registradas por los partidos en el Sistema de Información Financiera, correspondientes a las pre-campañas electorales o campañas, en el estado de Michoacán, será adecuado y suficiente para conformar la matriz de precios.
(...)*

Una vez recabada la Información, las operaciones realizadas por los sujetos obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la normativa de fiscalización, de modo que, además de indicarse el bien o servicio al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a partir de procesos formales de valuación, en los cuales se consideren las características y naturaleza del gasto a ser valuado.

Es de destacar que estas normas de fiscalización guían las acciones u operaciones contables; que son las reglas básicas de valuación que han violado partidos y aspirantes denunciado.

(...)

Puedo señalar en este momento el costo por metro cuadrado de pinta de bardas, renta de bardas costo de lonas y costo de redes sociales, pero quedaría desfasada dado el tiempo electoral que corre que es muy avanzado de ello que debe operar a partir de este proceso y no del costo del proceso pasado aun cuando aun no se establezca que son o no los candidatos oficiales, pues la difusión costo económico propaganda existe se ve en las fotos y al consecuencia de sanción al partido es la inegibilidad con independencia de la reducción de dineros al tope de gastos de cada partido

(...)

*Conclusiones de dictamen
de inspección personal visual*

Conclusión general llamado a voto:

Única. Ponderar el elemento verbo – visual de lo escrito en forma de llamar al voto subliminalmente disfrazado a favor del PT y Morena y los denunciados.

Conclusiones específicas costo valor mercado a reserva de reclasificarlo en su facultad investigativa en su facultad investigativa de fiscalización del IEM., a través del área correspondiente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Conclusión 1, omisión de comprobar la renta de bardas. Por \$22,000 mil pesos a consideración de renta mínima a dos mil pesos por barda durante todo el proceso aun exhiban contrato comodato.

Conclusión 2, omisión de reportar el gasto por pintura de pinta de bardas, con un costo de valor pintura de \$2,000. Pesos.

Conclusión 3, omisión de reportar el gasto por la pinta de 11 bardas costo mano de obra \$11,000 pesos.

Conclusión 4, omisión de reportar costos de lonas \$un mil Pesos.

Conclusión 5, omisión de reportar costo imprenta calendario tiraje 10 mil ejemplares \$un mil pesos.

Conclusión 6, omisión de reportar costo de pago de redes sociales a valor de costo de mil pesos por día en difusión llevan mas de sesenta días \$60,000. Pesos. Lo que hace a Rachid Gonzales, por pedir voto.

Conclusión 7, omisión de reportar costo de pago de redes sociales a valor de costo de mil pesos por día en difusión llevan más de sesenta días \$60,000. Pesos. Lo que hace a Reyes Corral por difundirse su imagen que es un llamado a voto.

Conclusión 8, omisión de reportar costo de \$25,000 pesos de difusión periodista primera plana.

Conclusión 9, realizar un prorrateo entre ambos partidos si se van en coalición.

(...)"

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:

1.- PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en:

- ✓ 13 imágenes fotográficas en blanco y negro que el quejoso ofrece como prueba y que corresponden a los eventos denunciados.
- ✓ 1 URLs que corresponden a la red social Facebook, donde se señalan los eventos denunciados.
 - <https://www.facebook.com/1506384837/posts/10224846796266316/?d=n>

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó la admisión del escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar al partido político el inicio del procedimiento y a la C. Tania Yunuen Reyes Corral y publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (foja 52 del expediente digital)

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de queja.

- a) El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 53 y 54 del expediente digital)
- b) El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (foja 55 del expediente digital)

V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11798/2021, la Unidad de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento de queja. (foja 56 del expediente digital)

VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1799/2021, la Unidad de Fiscalización notificó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de mérito. (foja 57 del expediente digital)

VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido del Trabajo

- a) El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11803/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido del Trabajo el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en

un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones. (fojas 58 a 61 del expediente digital)

- b) El dos de abril de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 62 a 85 del expediente digital)

“(…)

Falta de interés jurídico.

En el caso concreto esta autoridad jurisdiccional debe advertir que estamos ante un caso de falta de interés jurídico pues en la especie la ciudadana no resiente un daño personal, sustancial y directo a su esfera de derechos, las presuntas conductas denunciadas no le irrogan ningún perjuicio de ahí que deba desecharse la queja que nos ocupa.

En el caso se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que las presuntas conductas denunciadas no se encuentran relacionadas con el proceso electoral, sino con el despliegue de tareas de afiliación permanente, lo cual se encuentra dentro del marco legal permitido por las siguientes consideraciones:

- 1) Los partidos políticos son entidades de interés público.*
- 2) Entre sus actividades se encuentran las relativas a actividades ordinarias, de campaña y de capacitación de las mujeres.*
- 3) Como parte de las actividades permanentes los partidos políticos deben difundir su ideología y desarrollar campañas de afiliación pues ello resulta acorde a sus fines.*
- 4) En el caso concreto, este instituto político dentro del ámbito legal, desplegó en su momento una campaña de afiliación permanente, misma que resulta legal y acorde a los fines de los partidos.*
- 5) Para facilitar la tarea de afiliación, se instauraron coordinaciones de afiliación, lo que se reitera, resulta acorde al marco legal y constitucional por lo cual no se incurre en vulneración alguna a la normatividad electoral. No obstante, lo anterior, ad cautelam se manifiesta lo siguiente:*

*En el caso concreto no existe vulneración alguna a la normatividad por actos anticipados de precampaña o campaña dado que las presuntas conductas denunciadas **no reúnen los elementos objetivo, subjetivo y temporal.***

Los presuntos actos denunciados no tienen relación con actos de precampaña o campaña ya que además de que no reúnen los elementos objetivo, subjetivo y temporal, este instituto político declaró desierto su proceso interno.

*Aunado a lo anterior, esta autoridad debe advertir que en el caso las afirmaciones del denunciante resultan vagas, genéricas e imprecisas pues no señalan de forma concreta e indubitable condiciones precisas de modo, **tiempo** y lugar, de ahí que se trate de afirmaciones inatendibles.*

No estamos ante un caso de omisión de informes de precampaña o de reporte de ingresos o egresos por lo siguiente:

- 1. Este instituto político en el momento procesal oportuno informó al OPLE que en el caso, durante el periodo de registro de aspirantes a una candidatura en Michoacán, no existieron registros de aspirantes, de ahí que se haya declarado desierto el proceso interno.*
- 2. En el caso concreto la ciudadana denunciada no tiene el carácter de aspirante o precandidata por lo cual no le era exigible presentar un informe de ingresos o egresos por gastos de precampaña*
- 3. Las presuntas conductas denunciadas no tienen relación con el proceso electoral local dado que se trata de una campaña permanente de afiliación al Partido del Trabajo, lo cual en su momento fue debidamente reportado a la autoridad en materia de fiscalización.*
- 4. Todas y cada una de las afirmaciones de la denunciante en el sentido de que se trata de actos de precampaña resultan subjetivos dado que en estricto sentido se trata de una campaña de afiliación permanente (cuyos gastos fueron reportados), cuyo contenido a la fecha ha sido eliminado.*
- 5. Todas y cada una de las afirmaciones de la denunciante en el sentido de que las ciudadanas denunciadas “podrían ser candidatos” no tienen asidero jurídico pues la propia denunciante no tiene certeza alguna, se trata de presunciones hechas por la denunciante sin que se encuentren soportadas en alguna prueba fehaciente por lo cual incumple con la carga procesal de probar su dicho.*
- 6. En el caso no estamos ante un caso de propaganda personalizada habida cuenta de que la ciudadana denunciada no tiene la calidad de servidor público, de lo cual se deriva que tampoco hubo uso indebido de recursos públicos.*
- 7. No existe culpa Invigilando dado que se reitera que los presuntos actos denunciados tienen que ver con actividades permanentes de afiliación del PT por lo cual no se violentó el deber de cuidado ni la posición garante del PT.*
- 8. No pasa inadvertido que la denunciante refiere que debe aplicarse el criterio de Sala Toluca, sin embargo, en la especie no menciona de*

manera cierta a que expediente se refiere. Aunado a lo anterior, la afirmación de la denunciante en el sentido de que se tomarán como actos de precampaña las publicaciones que no admitan una explicación diversa, esta autoridad debe advertir que en el caso no resultan aplicables pues se insiste que las presuntas conductas denunciadas tienen que ver con una campaña de afiliación permanente que se enmarca dentro de lo permitido legal y constitucionalmente además de que se reportaron los gastos de tal actividad ordinaria.

9. *Por cuanto hace a las afirmaciones de la denunciante en el sentido de que las ciudadanas denunciadas “tienen intención” de participar en el proceso electoral, es evidente que se trata de afirmaciones subjetivas o presunciones que no se encuentran respaldadas por prueba alguna por lo cual no existe vulneración al principio de equidad.*
10. *Respecto a todos y cada una de las bardas presuntamente denunciadas, esta autoridad debe tener en cuenta que la denunciante no acredita circunstancias de temporalidad de ahí que **se objete el alcance y valor probatorio de las imágenes que aporta, máxime si se toma en cuenta que se trata de pruebas técnicas que por su naturaleza son imperfectas**, sobre todo si se toma en cuenta que lo que ofrece y aporta la denunciante son “testigos fotográficos”.*
11. *Respecto a todas y cada una de las afirmaciones de la denunciante en el sentido de que existió un presunto uso indebido de recursos públicos, esta autoridad debe advertir que tal afirmación no tiene sustento probatorio alguno.*

OBJECCIÓN A PROBANZAS

Por lo que los medios de prueba ofertados no pueden tener los alcances ni la eficacia probatoria que pretende atentos a la jurisprudencia:

(...)

Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral, por lo que se solicita a este órgano administrativo electoral resolver infundado el presente procedimiento.

(...)

A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:

1. **DOCUMENTAL:** *Que se hace consistir en copia del oficio mediante el cual se informa que no hubo registro de precandidatos, esta prueba se relaciona*

con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes-

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados, se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente.

(...)"

Elementos probatorios adjuntos al escrito de contestación:

1.- DOCUMENTALES. - Consistentes en:

- ✓ Documental privada: consistente en copia del oficio mediante el cual se informa que no hubo registro de precandidatos.
- ✓ Documentales privadas: consistente en las manifestaciones de que el partido del Trabajo no realizara precampaña

VIII. Notificación de inicio de procedimiento a la quejosa.

- a) El veintiuno abril de dos mil veintiuno, mediante acta circunstanciada se notificó, en su carácter de quejosa, el inicio del procedimiento de mérito. (fojas 86 a 93 del expediente digital)

IX. Razones y Constancias

- a) El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización procedió a la búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores del domicilio de la C. Tania Yunuen Reyes Corral. (fojas 94 y 95 del expediente digital)
- b) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización procedió a la búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores del domicilio de la C. Rachid Hassan González Parra (fojas 302 y 304 del expediente digital)
- c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno la Unidad de Fiscalización integró al procedimiento las constancias que obran en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos respecto al Ticket 15399 de fecha 10 de febrero del año en curso, realizado a los sitios de internet, cuyos hallazgos

- benefician al partido Morena y al C. Rachid Hassan González Parra. (fojas 393 y 401 del expediente digital)
- d) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el buscador Google, a fin allegarse de elementos de prueba. Localizando una nota periodística que guarda relación con el procedimiento que ahora se resuelve. (fojas 402 y 404 del expediente digital)
 - e) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en la red social Facebook a fin de localizar indicios que ayuden a esta autoridad a allegarse de mayores elementos a fin de esclarecer los hechos materia del procedimiento que se resuelve (fojas 440 a 442 del expediente digital)
 - f) El tres de julio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda a fin de localizar respecto del partido Morena a la Convocatoria emitida para la elección de Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Michoacán. (fojas 535 a 539 del expediente digital)
 - g) El tres de julio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización a fin de localizar en el apartado “Apoyo Ciudadano y/o Precampaña” de dicho sistema la existencia de alguna contabilidad registrada a nombre de Rachid Hassan González Parra como probable precandidato a la Presidencia Municipal en Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo por parte de Morena.(fojas 540 a 541 del expediente digital)
 - h) El seis de julio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, a fin de consultar a los ciudadanos registrados como precandidatos a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, por parte del Partido Morena. (fojas 561 a 562 del expediente digital)
 - i) El siete de julio de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el Sistema COLABORA del Instituto Nacional Electoral a fin de descargar la información de la matriz de precios utilizada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros en el marco de la revisión de los informes de precampaña y campaña en el marco del Proceso Electoral 2020-2021.(fojas 563 a 564 del expediente digital)

X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a la C. Tania Yunuen Reyes Corral

- a) El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/VS/JD11/MICH/033/2021, mediante el cual se notificó a la C. Tania Yunuen Reyes Corral en su carácter de denunciada, el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo

ofrecieran y exhibiera las pruebas que respalde sus afirmaciones. (fojas 96 a 113 del expediente digital)

- b) El 26 de abril de dos mil veintiuno, la C. Tania Yunuen Reyes Corral dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 114 a 121 del expediente digital)

“(…)

Por lo que respecta a las acusaciones que se me imputan respecto de los probables ingresos y egresos no reportados, así como la probable omisión de presentar informes de precampaña, como aspirante y/o precandidata a un cargo de elección popular en el Estado de Michoacán de Ocampo por el Partido del Trabajo, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021, en Michoacán, debo de manifestar que niego rotundamente de lo que se me acusa, ya que son totalmente falsas dichas imputaciones que se realizan en contra de mi persona, imputaciones de las cuales no existen pruebas que las sustente, ya que mis detractores en aras de una mala praxis política y en una connotada falta de valor moral, están malversando su argumento, sacando de contexto la realidad, con el objetico de sorprender a esta autoridad, siendo menester señalar a la juzgadora, que aun y cuando dentro del procedimiento que nos ocupa emplaza a que la accionada de contestación a los cargos, así como que rinda prueba de mi inocencia, el juzgador debe siempre de tomar en consideración en la ejecución de los procedimientos que se lleven en forma de juicio los principios fundamentales de que el acusado de se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, para lo cual cada acusación debe de tener aparejada las pruebas respectivas; Ahora bien, la de la voz debo de aclarar que en ningún momento realice ningún acto de campaña o precampaña, por lo que refiere al proceso electoral 2020"2021, así pues es importante señalar que la de la voz nunca participo como aspirante, ni me he registrado en procedimiento interno del partido del trabajo, toda vez que el partido político al que pertenezco no realizo proceso de elección alguno o convocatoria alguna para tal fin como precandidata para cargo de elección popular para este proceso electoral 2021, no como indebidamente se señala.

Así pues, lo anterior, por lo que respecta a la omisión de presentar informe de precampaña, como lo he venido diciendo, en ningún momento se realizó ningún tipo de campaña o precampaña para el proceso de elección popular 2021, y, en consecuencia, no hay informes de egresos ni ingresos que reportar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Dentro de la presente contestación vengo a presentar las siguientes pruebas en favor de la suscrita, mismas que se relacionan con todas y cada uno de los puntos de contestación, medios de convicción que se describen a continuación:

DOCUMENTAL PÚBLICA. -Copia Simple de la contestación del oficio IEM-CA-24/2021, por parte del Partido del Trabajo, dirigido a María de Lourdes Becerra Pérez, en el cual claramente señala que no obra documento alguno de que la suscrita este registrada como precandidata para algún cargo de elección popular dentro del proceso electoral 2021.

DOCUMENTAL PÚBLICA. • Consistente en el Oficio número CM/064/2021, signado por el Licenciado Gabino Cipriano Ixta, Contralor Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, en el cual se determina que no existen elementos o evidencia que presuma la comisión de la presunta falta administrativa o desvió de recursos públicos para el pago de propaganda o publicidad o pago de pinta de bardas. Documental que se presenta ante esta autoridad para los efectos legales conducentes;

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a la suscrita esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los argumentos vertidos dentro de la presente contestación.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en el resultado que el juzgador deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Prueba se relaciona con todos y cada una de la contestación de los hechos.

(...)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de contestación:

1.- DOCUMENTALES - Consistentes en:

- ✓ Documental privada: consistente en copia del oficio IEM-CA-24/2021 donde el Partido del Trabajo atiende a la solicitud realizada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán
- ✓ Documental publica: consistente en la copia certificada ante notario público del oficio CM/064/2021 expedida por el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo.

XI. Solicitud de información y documentación a la Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.

- a) El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11804/2021, se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, realizara la certificación del contenido de la dirección de internet aportadas, así como la existencia de 11 bardas señaladas por la quejosa en su escrito de queja. (fojas 122 a 127 del expediente digital)
- b) El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/614/2021, la Directora del Secretariado de este Instituto, informó la admisión de la solicitud mencionada registrada con el número INE/DS/OE/45/2021, remitiendo copia del acuerdo de admisión, así como el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/42/2021, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se practicó la certificación del contenido de las páginas de internet solicitadas, así como el Acta Circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/001/2021 del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, donde se certifica la existencia de 11 bardas denunciadas por la quejosa. (fojas 128 a 152 del expediente digital)

XII. Solicitudes de información, de documentación y vistas al Instituto Electoral de Michoacán

- a) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17057/2021, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán, señalara si el Partido del Trabajo informó de la realización de algún proceso interno de selección de sus candidaturas a los Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y si fue comunicado al Organismo Público Local. (fojas 153 y 154 del expediente digital)
- b) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio IEM-SE-974/2021, la citada autoridad local electoral remitió la información solicitada. (fojas 155 a 160 del expediente digital).
- c) El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17655/2021, se dio vista al Instituto Electoral de Michoacán, respecto a la publicación en la red social Facebook y la posible propaganda periodística como posibles actos anticipados de precampaña a fin de que determinara lo que en derecho corresponda. (fojas 232 a 235 del expediente digital).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- d) El 23 de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31361/2021, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán, informara si inicio algún procedimiento en contra del Partido Político Morena y el C. Rachid Hassan González Parra, y de ser el caso, remitiera las constancias que integran dicho procedimiento junto con la Resolución respectiva. (fojas 436 a 437 del expediente digital).-
- e) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio IEM-SE-CE-2008/2021 la citada autoridad local electoral remitió la información solicitada.(fojas 438 a 439 del expediente digital)
- f) El 01 de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32747/2021, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán, informara el partido Morena informo de la realización de algún proceso interno de selección de sus candidaturas a los Ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo. (fojas 443 a 444 del expediente digital).
- g) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio IEM-SE-CE-2006/2021 la citada autoridad local electoral remitió la información solicitada.(fojas 445 a 534 del expediente digital)

XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

- a) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/277/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara si los hallazgos encontrados por la Oficialía Electoral se encontraban registrados dentro de la contabilidad del Partido del Trabajo dentro de los gastos de precampaña o en lo correspondiente al ejercicio 2021, si el Partido del Trabajo y/o la C. Tania Yunuen Reyes Corral presentaron informes de precampaña, si obraba en la Dirección el método del partido para elegir a sus candidatos en los diversos cargos de elección popular a nivel local en el marco del Proceso Electoral Local en Michoacán de Ocampo, y las aclaraciones adicionales relacionadas con los sujetos incoados que pudiesen servir para dilucidar los hechos materia de investigación. (fojas 161 a 169 del expediente digital)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2157/2021, la citada Dirección remitió la información solicitada. (fojas 170 a 231 del expediente digital)
- c) El cuatro de mayo, veintiocho de mayo y veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficios INE/UTF/DRN/299/2021, INE/UTF/DRN/532/2021 e INE/UTF/DRN/1118/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara respecto de los gastos o ingresos correspondientes a las once bardas denunciadas si se encontraban registradas en la contabilidad del partido del Trabajo a nivel local y/o Federal, y si ya se realizó el prorrateo correspondiente, y en caso contrario hacer del conocimiento al Partido del Trabajo en el informe correspondiente. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración del presente, no se ha recibido respuesta por parte de la citada Dirección. (fojas 258 a 271 y 418 a 426 del expediente digital)
- d) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/1065/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara los costos de conformidad con los precios más altos registrados en la matriz de precios y remita la documentación soporte que acredite los valores proporcionados respecto a una lona de aproximadamente 2.30 x 1.30 mts y calendarios personalizados. (fojas 412 a 417 del expediente digital).
- e) Cabe señalar que aunque no se recibió la respuesta por parte de la citada Dirección, se levantó razón y constancia a fin de descargar de la plataforma COLABORA del Instituto Nacional Electoral la matriz de precios correspondiente al periodo de precampaña y campaña.

XIV Acuerdo de ampliación del objeto investigado

El tres de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que derivado de la sustanciación del procedimiento se advirtió la existencia de elementos de prueba o indicios sobre un objeto diverso al inicialmente investigado, la Unidad de Fiscalización estimó procedente decretar la ampliación del objeto investigado, de conformidad con los artículos 22, numeral 1 y 23, numeral 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (fojas 236 a 237 del expediente digital)

XV. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto investigado

- a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación del objeto investigado del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 238 a 239 del expediente digital)
- b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (foja 240 del expediente digital)

XVI. Notificación y emplazamiento de ampliación del objeto investigado al Partido del Trabajo

- a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17837/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido del Trabajo la ampliación del objeto investigado (fojas 241 a 242 del expediente digital)
- b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11838/2021, se emplazó al Representante Propietario del Partido del Trabajo a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, señalara el informe en que fue registrado el ingreso y/o gasto correspondiente a la pinta de las 11 bardas denunciadas con propaganda genérica del Partido del Trabajo, localizada en el periodo de intercampaña, informe si el prorrateo de los gastos se encuentra debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización señalando el número de póliza donde se realizó el registro, así como el prorrateo correspondiente, así como realizara las aclaraciones que a su derecho corresponda. (fojas 243 a 249 del expediente digital)
- c) El dos de abril de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 250 a 257 del expediente digital)

“(…)

1. Señale el informe de campaña en que fue registrado el ingreso y/o gasto correspondiente a la pinta de las 11 bardas denunciadas que contienen propaganda genérica del partido del trabajo, localizada en el periodo de intercampaña:

Se acredita que se pagó con el título mercantil denominado cheque número 9011 de la institución bancaria de BBVA (Bancomer), no omitiendo que fue pago a proveedor por concepto de pintas a bardas de varios municipios estando el de Pátzcuaro dentro de ello, así mismo que este gasto se erogó de la cuenta bancaria identificada como 00143361748 a nombre del partido del trabajo así como la emisión de la factura.

Se anexa el estado de cuenta que guarda en copia y se estableció que el gasto fue ordinario, tal y como se aclarara en su momento ante la unidad técnica de fiscalización.

El origen del recurso es público y deviene de las prerrogativas públicas que la autoridad electoral otorga a este instituto político, como parte de los derechos establecidos en el artículo 41 apartado C párrafo 1 de la CPEUM.

2. Informe el prorrateo de los gastos correspondientes a las once bardas localizadas por esta autoridad se encuentran debidamente registrado en el sistema integral de fiscalización.

Se contesta en sentido negativo al no ser gasto de campaña en razón de que de acuerdo al procedimiento especial sancionador que se ventila al interior del tribunal electoral del estado de Michoacán con número 031/2021 se viene haciendo las precisiones que anteceden el punto primero de estos requerimientos esto en razón de que esta autoridad emitió ya su resolución definitiva misma que obra en el tribunal electoral del estado de Michoacán.

3. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, mencione el número de póliza en el cual fue se encuentra registrado el ingreso y/o gasto, así como el prorrateo correspondiente a las once bardas con propaganda genérica localizada por la autoridad electoral. Se contesta con la respuesta anterior.

4. Realice las aclaraciones que a su derecho corresponda;

Ahora bien y de tal suerte que esta información donde se encuentran hechos controvertidos para esta unidad técnica de fiscalización de acuerdo al procedimiento especial sancionador con número 031/2021, se dio contestación así la información obra en el propio expediente en el tribunal electoral del estado de Michoacán de Ocampo que en esta actualidad ya ha emitido su resolución y

sancionado al Partido del Trabajo por las infracciones a la norma electoral.

(...)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de contestación:

1.- DOCUMENTALES - Consistentes en:

- ✓ Documental privada: consistente en copia del cheque 67633915 expedido a favor de Gerardo Iraburo Salas.
- ✓ Documental privada: consistente en una hoja de un estado de cuenta expedido por la institución bancaria BBVA
- ✓ Documental privada: consistente en copia de la factura A-1053

XVII Acuerdo de ampliación de los sujetos investigados

El ocho de junio de dos mil veintiuno, toda vez que derivado de la sustanciación del procedimiento se advirtió la probable responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se señalaron como probables responsables, la Unidad de Fiscalización estimó procedente decretar la ampliación de sujetos investigados, de conformidad con los artículos 22, numeral 1; 23, numeral 4, y 41, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (fojas 272 a 273 del expediente digital)

XVIII. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del sujeto investigado.

- c) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación de sujetos investigados del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 274 a 275 del expediente digital)
- d) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (foja 276 del expediente digital)

XIX. Notificación y emplazamiento de ampliación del sujeto investigado al Partido Morena

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27263/2021, se emplazó y notifico al Representante Propietario del Partido del Trabajo a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, a efecto de que contestara lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes, así como informara el método llevado a cabo para la selección interna de sus candidatas a cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo y sobre la propaganda denunciada a favor del C. Rachid Hassan González Parra, el monto de gastos erogados adjuntado la documentación comprobatoria así como la póliza donde se registró el concepto en el Sistema Integral de Fiscalización. (fojas 277 a 281 del expediente digital)
- b) El once de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, se transcribe a continuación: (fojas 282 a 285 del expediente digital)

“(…)

“Primera pregunta:

(…)

*Mi partido **no postuló precandidatos a la presidencia municipal aludida y, por ende, no se llevó a cabo proceso de selección interna para dicha elección.***

Segunda pregunta:

(…)

*Mi partido **no postuló precandidatos a la candidatura de referencia.***

Tercera pregunta:

(…)

*Se reitera, mi partido **no postuló precandidatos al cargo señalado.***

Cuarta pregunta:

(…)

*Se insiste que mi partido **no postuló precandidaturas en el estado de Michoacán.***

Quinta pregunta.

(...)

*Mi partido **no postuló precandidaturas en el estado de Michoacán**, por lo que no existía obligación de presentar el informe correspondiente.*

Sexta pregunta. Relacionada con calendarios, lonas y propaganda en redes sociales.

(...)

Al no ser afirmativa las respuestas anterior, no se emite contestación alguna a dicho cuestionamiento.

Séptima pregunta

(...)

*Se reitera, **no hubo ni hay pólizas** de registro en Sistema Integral de Fiscalización en el periodo de precampaña relacionadas con posibles precandidatos al cargo de referencia*

*De ahí que esa Unidad Técnica de Fiscalización podrá advertir que sobre ese **aspecto el quejoso falta a la verdad y no puede acreditar omisión alguna de mi partido ni del ciudadano denunciado.***

(...)”

- c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del Trabajo dio una segunda contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, se transcribe a continuación: (fojas 286 a 292 del expediente digital)

“(...)

En primer lugar, hago evidente la presentación oportuna del presente escrito de contestación al emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador formulado por esta autoridad, mediante oficio INE/UTF/27263/2021 de fecha 08 de junio del presente año y notificado a esta representación el día 10 siguiente.

I. *En relación con los Hechos SEGUNDO y TERCERO señalados en el escrito de queja que se contesta, los mismos se abordan en conjunto al tratarse de un mismo señalamiento relacionado con supuestos actos de precampaña y la omisión de reportar los gastos correspondientes, negándose que tal supuesto se actualice en virtud de que este instituto*

político no realizó registro de precandidato alguno en los procesos de selección interna para la integración las planillas en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán y que por lo tanto no existieron gastos a reportar en razón de lo siguiente:

ANTECEDENTES RELEVANTES.

Con fecha 12 de enero del año 2021, mediante acuerdo IEM-CG-05/202, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó la solicitud de registro del convenio de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo y Morena, en el cual se estableció una coalición total en lo relativo a las candidaturas para el cargo de diputados y diputadas locales y una coalición parcial para la elección e integración de los ayuntamientos para el Proceso Electoral ordinario constitucional 2020-2021 para el Estado de Michoacán.

Tal y como se desprende del convenio señalado, al Partido del Trabajo le fue asignada la postulación y registro de candidatos de la planilla que contendría por esta coalición dentro del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, destacando que el C. Rachid González, fue registrado como candidato a diverso cargo de elección popular, siendo este, el de suplente a la primera regiduría de ese municipio, candidatura que posteriormente fue aprobada por el Instituto Electoral de Michoacán mediante acuerdo IEM-CG-150/2021, dentro del cual se realizó el análisis de procedencia respectivo, señalando que la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” cumplió a cabalidad con las porciones normativas conducentes así como con los requisitos en materia de fiscalización.

No obstante lo anterior y en razón de tratarse de un ciudadano postulado por la Coalición que represento, se hace del conocimiento de esta autoridad que en el contexto de presente proceso electoral, Morena, haciendo uso del derecho de auto organización y autonomía previsto en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, el cual otorga la libertad a los partidos políticos para decidir sobre los asuntos internos relacionados con los actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, optó por emitir la convocatoria respectiva a las candidaturas locales que le fueron asignadas en el convenio antes señalado, conforme a lo previsto en el artículo 44, inciso a), de los estatutos que a la letra señala:

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.

Supuesto que fue informado de manera oportuna y puntual con fecha 23 de noviembre del año 2020, a la autoridad administrativa competente y en razón de lo cual la calidad de precandidato no le fue otorgada a ningún ciudadano al no haberse realizado precampañas para la elección de las candidaturas locales, lo que conlleva a la inexistencia de erogaciones de recursos económicos para la ejecución de las actividades relacionadas con la difusión de precandidatos que tuvieran como propósito, dar a conocer propuestas u obtener la candidatura a un cargo de elección popular.

Así mismo se destaca que el método de elección interna del partido Morena, encuentra sustento en lo señalado en el artículo 34, punto 1, punto 2, incisos d) y e), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se estipula:

Artículo 34.

1. *Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.*

2. *Son asuntos internos de los partidos políticos:*

d) *Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;*

e) *Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y*

Siendo indiscutible que el principio de autodeterminación de los partidos políticos, implica el derecho de definir la forma de gobierno y organización que consideren adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

Por cuanto hace a el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, se señala que el mismo corresponde al rubro de operación ordinaria, esto en atención a lo previsto por el artículo 72, apartado 2, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 19, punto 2, del Acuerdo INE/CG518/2020 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional electoral, toda vez que este instituto político no registró precandidaturas.

(...)

De la interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, se advierte que, al no actualizarse la figura de precandidatos dentro del proceso de selección interna de este instituto, no es posible reportar ingresos o erogaciones relacionadas actividades de precampaña.

II. En cuanto al hecho QUINTO, relativo a la supuesta propaganda atribuida al C. Rachid González, es de precisarse que en las imágenes adjuntas al escrito de queja, contrario a lo aducido por el denunciante, no se logra advertir la intención política de contender en algún proceso de selección interna por la candidatura que se le atribuye, tampoco es posible aseverar la existencia física de la propaganda electoral señalada ni mucho menos se acreditan las circunstancias de tiempo modo y lugar en que supuestamente se realizaron los actos de precampaña, por lo que se sostiene que las aseveraciones realizadas por el denunciante, se trata de meras conjeturas sin sustento, tal y como se razona a continuación:

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La ciudadana denunciante pretende sustentar sus afirmaciones en 4 imágenes digitales en las cuales no se logra apreciar datos o características que las vinculen con los hechos que narra en su escrito de queja, limitándose a señalar de forma genérica una supuesta intención política omitiendo precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la supuesta propaganda fue difundida o distribuida, incumpliendo con ello la obligación de aportar los elementos mínimos que permitan a esta autoridad vincular dichas imágenes con las faltas atribuidas al ciudadano denunciado, tal y como se establece en el criterio jurisprudencial 36/2014 de la citada Sala Superior, que a la letra dice:

(...)

Así al tratarse de pruebas técnicas, las cuales por su misma naturaleza tiene un carácter imperfecto que atiende a la facilidad de ser confeccionadas o de presentar alteraciones o modificaciones deben estimarse insuficientes para acreditar los hechos narrados por la denunciante en su escrito de queja, esto de conformidad con la jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

(...)

Ello quiere decir que dicho material probatorio sólo podría hacer prueba plena al concatenarse con algún otro elemento de prueba que permitiera

generar convicción sobre la veracidad de los hechos que se pretenden acreditar.

Siendo lo conducente que esta autoridad desestime los medios de pruebas aportadas por el denunciante, al no colmarse la hipótesis de Ley establecida en el artículo 21 del Reglamento de Fiscalización, resultando ineficaces para generar convicción sobre los supuestos hechos materia de la denuncia que se contesta, puesto que para lograr un mayor valor probatorio debieron ser corroboradas con algún otro medio de prueba.

(...)”

- d)** *El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del Trabajo dio una tercera contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, se transcribe a continuación: (fojas 293 a 299 del expediente digital)*

“(...)”

En primer lugar, hago evidente la presentación oportuna del presente escrito de contestación al emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador formulado por esta autoridad, mediante oficio INE/UTF/DRN/27263/2021, de fecha 08 de junio del presente año y notificado a esta representación el día 10 siguiente.

I. En relación con los Hechos SEGUNDO y TERCERO señalados en el escrito de queja que se contesta, los mismos se abordan en conjunto al tratarse de un mismo señalamiento relacionado con supuestos actos de precampaña y la omisión de reportar los gastos correspondientes, negándose que tal supuesto se actualice en virtud de que este instituto político no realizó registro de precandidato alguno en los procesos de selección interna para la integración las planillas en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán y que por lo tanto no existieron gastos a reportar en razón de lo siguiente:

ANTECEDENTES RELEVANTES.

Con fecha 12 de enero del año 2021, mediante acuerdo IEM-CG-05/202, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó la solicitud de registro del convenio de la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, presentado por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo y Morena, en el cual se estableció una coalición total en lo relativo a las candidaturas para el cargo de diputados y diputadas locales y una coalición parcial para la elección e integración

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

de los ayuntamientos para el Proceso Electoral ordinario constitucional 2020-2021 para el Estado de Michoacán.

Tal y como se desprende del convenio señalado, al Partido del Trabajo le fue asignada la postulación y registro de candidatos de la planilla que contendría por esta coalición dentro del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, destacando que el C. Rachid González, fue registrado como candidato a diverso cargo de elección popular, siendo este, el de suplente a la primera regiduría de ese municipio, candidatura que posteriormente fue aprobada por el Instituto Electoral de Michoacán mediante acuerdo IEM-CG-150/2021, dentro del cual se realizó el análisis de procedencia respectivo, señalando que la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” cumplió a cabalidad con las porciones normativas conducentes así como con los requisitos en materia de fiscalización.

No obstante lo anterior y en razón de tratarse de un ciudadano postulado por la Coalición que represento, se hace del conocimiento de esta autoridad que en el contexto de presente proceso electoral, Morena, haciendo uso del derecho de auto organización y autonomía previsto en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, el cual otorga la libertad a los partidos políticos para decidir sobre los asuntos internos relacionados con los actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, optó por emitir la convocatoria respectiva a las candidaturas locales que le fueron asignadas en el convenio antes señalado, conforme a lo previsto en el artículo 44, inciso a), de los estatutos que a la letra señala:

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado.

Supuesto que fue informado de manera oportuna y puntual con fecha 23 de noviembre del año 2020, a la autoridad administrativa competente y en razón de lo cual la calidad de precandidato no le fue otorgada a ningún ciudadano al no haberse realizado precampañas para la elección de las candidaturas locales, lo que conlleva a la inexistencia de erogaciones de recursos económicos para la ejecución de las actividades relacionadas con la difusión de precandidatos que tuvieran como propósito, dar a conocer propuestas u obtener la candidatura a un cargo de elección popular.

Así mismo se destaca que el método de elección interna del partido Morena, encuentra sustento en lo señalado en el artículo 34, punto 1, punto 2, incisos d) y e), de la Ley General de Partidos Políticos, en el que se estipula:

(...)

Siendo indiscutible que el principio de autodeterminación de los partidos políticos, Políticos, así como el artículo 19, punto 2, del Acuerdo INE/CG518/2020 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional electoral, toda vez que este instituto político no registró precandidaturas.

(...)

De la interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, se advierte que, al no actualizarse la figura de precandidatos dentro del proceso de selección interna de este instituto, no es posible reportar ingresos o erogaciones relacionadas actividades de precampaña.

II. *En cuanto al hecho QUINTO, relativo a la supuesta propaganda atribuida al C. Rachid González, es de precisarse que en las imágenes adjuntas al escrito de queja, contrario a lo aducido por el denunciante, no se logra advertir la intención política de contender en algún proceso de selección interna por la candidatura que se le atribuye, tampoco es posible aseverar la existencia física de la propaganda electoral señalada ni mucho menos se acreditan las circunstancias de tiempo modo y lugar en que supuestamente se realizaron los actos de precampaña, por lo que se sostiene que las aseveraciones realizadas por el denunciante, se trata de meras conjeturas sin sustento, tal y como se razona a continuación:*

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La ciudadana denunciante pretende sustentar sus afirmaciones en 4 imágenes digitales en las cuales no se logra apreciar datos o características que las vinculen con los hechos que narra en su escrito de queja, limitándose a señalar de forma genérica una supuesta intención política omitiendo precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la supuesta propaganda fue difundida o distribuida, incumpliendo con ello la obligación de aportar los elementos mínimos que permitan a esta autoridad vincular dichas imágenes con las faltas atribuidas al ciudadano denunciado, tal y como se establece en el criterio jurisprudencial 36/2014 de la citada Sala Superior, que a la letra dice:

(...)

Así al tratarse de pruebas técnicas, las cuales por su misma naturaleza tiene un carácter imperfecto que atiende a la facilidad de ser confeccionadas o de presentar alteraciones o modificaciones deben estimarse insuficientes para acreditar los hechos narrados por la denunciante en su escrito de queja, esto de conformidad con la jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

(...)

Ello quiere decir que dicho material probatorio sólo podría hacer prueba plena al concatenarse con algún otro elemento de prueba que permitiera generar convicción sobre la veracidad de los hechos que se pretenden acreditar.

Siendo lo conducente que esta autoridad desestime los medios de pruebas aportadas por el denunciante, al no colmarse la hipótesis de Ley establecida en el artículo 21 del Reglamento de Fiscalización, resultando ineficaces para generar convicción sobre los supuestos hechos materia de la denuncia que se contesta, puesto que para lograr un mayor valor probatorio debieron ser corroboradas con algún otro medio de prueba.

(...)”

XX. Notificación de ampliación del sujeto investigado al Partido del Trabajo

- a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27264/2021, se notificó al Representante del Partido del Trabajo la ampliación de los sujetos investigados. (fojas 300 a 301 del expediente digital)

XXI. Notificación de ampliación de sujetos de investigación y emplazamiento al C. Rachid Hassan González Parra

- a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/536/2021, mediante el cual se notificó al C. Rachid Hassan González Parra, la ampliación de los sujetos de investigación y emplazándole a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera las pruebas que respalde sus afirmaciones. Así mismo informara el método llevado a cabo para la selección interna de sus candidatos al cargo de Presidente Municipal en Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, donde se llevó a cabo las actividades para la selección de candidatos, si tenían permitido realizar algún gasto y promover su postulación, si participo en el proceso de selección interna, por cuanto hace a la promoción de su imagen en calendarios, lonas, y propaganda en redes sociales señalando los gastos realizados, así mismo proporcionara la documentación (pólizas de registro) que acredite el rubro y concepto bajo el cual se registraron dichos gastos en el Sistema Integral de Fiscalización. (fojas 305 a 319 del expediente digital)
- b) El 20 de junio de dos mil veintiuno, el C. Rachid Hassan González Parra dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo

42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 320 a 331 del expediente digital)

“(…)

Que por medio del presente recurso, vengo a dar respuesta a su oficio de mérito mediante el cual solicita los siguiente:

(…)

1. Por lo que ve al primero de los puntos, se señala que el método de selección interna, según la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 emitida el 30 de enero de 2021, presuntamente se realizó de la siguiente forma:

BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:

a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, el registro para efectos de la presente convocatoria será en línea.

b) El registro en línea se hará a través de la página de internet:

<https://registrocandidatos.Morena.app>

c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 1²

BASE 2. *La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.*

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas:

Cuadro 2

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: <https://morena.si/>

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.

El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente.

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. *Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible táctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o del artículo 44° del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁷ y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de MORENA.*

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercerla competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46° del Estatuto.

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

CABE SEÑALAR QUE ESO SEÑALA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE: SIN EMBARGO. EL SUSCRITO DESCONOCE SI EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ DE ESA FORMA. EN VIRTUD DE QUE NUNCA FUI NOTIFICADO SI SE APROBÓ EL REGISTRO RESPECTIVO NI SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DE MORENA.SI QUIÉNES OBTUVIERON REGISTRADOS.

2. Por lo que ve al segundo de los puntos solicitados, se desconoce por no ser información a la que el suscrito tenga acceso.

3. Por lo que se refiere al tercero de los puntos, se desconoce por no ser información a la que el suscrito tenga acceso.

Cabe señalar que el periodo de precampaña conforme al calendario electoral del Instituto Electoral de Michoacán concluyó el 31 de enero de 2021, por lo que no se realizaron actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere la Convocatoria referida, puesto que la misma fue publicada un día antes.

4. Por lo que ve al cuarto punto, se señala que el suscrito realicé mi solicitud de registro al cargo de candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán el 07 de febrero de 2021.

Sin embargo, desconozco si fue aprobado mi registro y si participé como aspirante a dicho cargo, en virtud de que nunca fui notificado ni se publicaron los registros aprobados en la página de morena.si de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria.

5. En cuanto al quinto de los puntos, se hace mención que toda vez que el periodo de precampaña conforme al calendario electoral concluyó el 31 de enero de 2021, no se realizaron actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere la Convocatoria referida, y por tanto, no se actualizó la obligación de rendir el informe de ingresos y gastos de precampaña ante esa autoridad fiscalizadora.

6. Por lo que se refiere al punto número 6, hago de su conocimiento que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto.

7. Por lo que se refiere al punto número 7, hago de su conocimiento que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto.

8. Por lo que ve al último de los puntos, es necesario precisar que, si bien el suscrito solicité mi registro como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, lo cierto es que, nunca fui notificado ni se publicó la lista de los aspirantes registrados en la página de morena.si, por lo que desconozco si fui aprobado y si participé en el proceso de selección interna respectivo. Aunado a lo anterior, el que suscribe, no realicé actos de precampaña ni erogué gastos, pues por principio de cuentas la convocatoria se

*emitió un día antes al de terminación del período de precampaña, de conformidad con el calendario electoral emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, como ya se señaló anteriormente.
(...)”*

Segundo escrito presentado el 25 de junio de 2021

“(...)”

Al respecto, se señala que el método de selección interna, según la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 emitida el 30 de enero de 2021, presuntamente se realizó de la siguiente forma:

BASE 1. *El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:*

a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, el registro para efectos de la presente convocatoria será en línea

b) El registro en línea se hará a través de la página de internet: <https://registrocandidatos.morena.app>

c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 12.

BASE 2. *La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.*

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas:

Cuadro 2

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: <https://morena.sil>

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.

El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación eje/ registro de la precandidatura correspondiente.

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. *Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o del artículo 44° del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 7 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de MORENA*

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, del Estatuto

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46° del Estatuto. En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

CABE SEÑALAR QUE ESO SEÑALA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE; SIN EMBARGO, EL SUSCRITO DESCONOCE SI EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ DE ESA FORMA, EN VIRTUD DE QUE NUNCA FUI NOTIFICADO SI SE APROBÓ EL REGISTRO RESPECTIVO NI SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DE MORENA.SI QUIÉNES OBTUVIERON EL REGISTRO

CABE SEÑALAR QUE EL PERIODO DE PRECampaña CONFORME AL CALENDARIO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONCLUYÓ EL 31 DE ENERO DE 2021, POR LO QUE NO SE REALIZARON ACTOS DE PRECampañas RESPECTO A LAS CANDIDATURAS A LAS QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA REFERIDA, PUESTO QUE LA MISMA FUE PUBLICADA UN DÍA ANTES.

Aunado a lo anterior, se señala que el suscrito realicé mi solicitud de registro al cargo de candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán el 07 de febrero de 2021. Sin embargo, desconozco si fue aprobado mi registro y si participé como aspirante a dicho cargo, en virtud de que nunca fui notificado ni se publicaron los registros aprobados en la página de morena.si de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria, y por tanto, no se actualizó la obligación de rendir el informe de ingresos y gastos de precampaña ante esa autoridad fiscalizadora.

Cabe señalar que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto, ni se obtuvieron ingresos por ello; por lo que niego lo manifestado por la denunciante, aclarando que desconozco si algún tercero de mala fe o de buena fe, hizo propagando con mi imagen.

(...)”

XXII. Notificación de ampliación del sujeto investigado a la C. Tania Yunuen Reyes Corral

- a)El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/537/2021, se notificó a la C. Tania Yunuen Reyes Corral la ampliación de los sujetos investigados. (fojas 332 a 341 del expediente digital)

XXIII. Notificación de ampliación del sujeto investigado a la quejosa

- a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/533/2021, se notificó a la C. Lorena Elizabeth Gaona Matus la ampliación de los sujetos investigados. (fojas 342 a 352 del expediente digital)

XXIV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo

- a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/854/2021, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, solicitara al Servicio de Administración Tributaria a fin de que informara la actividad empresarial, el domicilio fiscal, y las declaraciones anuales de los años 2018, 2019 y 2020 de los CC. Tania Yunuen Reyes Corral y Rachid Hassan González Parra. (fojas 353 a 356 del expediente digital)
- b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DAOR/2152/2021, la citada Dirección remitió la información solicitada. (fojas 357 a 369 del expediente digital)

XXV. Requerimiento de información y documentación al Propietario y/o Representante Legal de Rótulos, Pintura, Plomería, Electricidad y Construcción en General Gerardo

- a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/1873/2021, se notificó al C. Gerardo Iraburo Salas a fin de que confirmara o rectificara la prestación de servicios señalados en la factura A-1053 expedida a favor del Partido del Trabajo, remitiendo el contrato o instrumento jurídico celebrado por la contratación de los servicios, la fecha en que se llevó a cabo, nombre de la persona física o moral que contrato el servicios, los servicios incluidos, lugares convenidos para pinta de bardas, la documentación legal y contable, así como las aclaraciones que a su derecho conviniesen. (fojas 373 a 356 del expediente digital)
- b) Cabe señalar que el ciudadano no dio respuesta al requerimiento de información.

XXVI. Ampliación del plazo para resolver.

- a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dado el estado procesal que guardaba el procedimiento de cuenta y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar al Consejo General del Instituto el Proyecto de Resolución respectivo.
- b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DRN/30861/2021 e INE/UTF/DRN/30862/2021, dirigidos al Secretario Ejecutivo del Instituto y a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, se les hizo de conocimiento la ampliación del plazo para resolver el expediente de mérito.

XXVII. Requerimiento de información al Partido del Trabajo

- a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31360/2021, se notificó al Partido del Trabajo a fin de que respecto a las once bardas denunciadas, señalara el tipo de informe donde fue registrado el gasto, remitiendo la documentación (pólizas de registro) que acredite el rubro y concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de fiscalización los gastos derivados de la colocación de las bardas y las aclaraciones que a su derecho conviniesen. (fojas 427 a 434 del expediente digital)
- b) Cabe señalar que el partido no dio respuesta al requerimiento de información.

XXVIII. Requerimiento de información al Partido Morena

- a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33145/2021, se notificó al Partido Morena a fin de que describiera el método llevado a cabo para la selección interna de sus candidatos en la que participó Rachid Hassan González Parra al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, informando el lugar y fecha en que se llevaron a cabo las actividades para la selección de candidatos, remitiendo la documentación comprobatoria, si el ciudadano señalado tuvo permitido realizar algún gasto o promocionar su postulación, de ser afirmativa la respuesta, señalara las actividades que realizó, y señalara las pólizas de registro en el Sistema Integral de Fiscalización respecto de las operaciones llevadas a cabo relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos al cargo de Presidente Municipal de

Pátzcuaro Michoacán de Ocampo y si presento informe de precampaña de su aspirante, precandidato y/o candidato al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo por el Partido Morena, el C. Rachid Hassan González Parra. (fojas 542 a 549 del expediente digital)

- b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin numero el partido dio respuesta a la información solicitada. (fojas 550 a 560 del expediente digital)

XXIX Acuerdo de Alegatos.

El nueve de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, en relación con el 41, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas. (fojas 565 a 567 del expediente digital)

XXX. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo.

- a) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33960/2021, se notificó al Representante del Partido del Trabajo, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, el partido no ha presentado escrito de alegatos. (Fojas 568 a 575 del expediente digital)

XXXI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido MORENA

- a) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33961/2021, se notificó al Representante del Partido del Trabajo, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 576 a 583 del expediente digital).
- b) El doce de julio de dos mil veintiuno, el Partido Morena dio respuesta a los alegatos formulados, cuya parte conducente se transcribe a continuación:(foja 584 a 591 del expediente digital)

“(…)

Mediante contestación de dicha Queja, se desvirtuaron las acusaciones por supuestamente constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, toda vez que mi representada en ningún momento ha realizado infracción alguna a la normatividad electoral en materia de financiamiento de partidos, por ende, la violación denunciada resulta inexistente en razón de que, como se desprende del caudal probatorio ofrecido por los quejosos, no existen elementos suficientes para acreditar las infracciones que se imputan.

Máxime que el partido político Morena no estableció lineamientos para la etapa de precampaña de aspirantes a los cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local; por esa razón no hubo lugar a realizar precampañas de dichos aspirantes.

En ese sentido, es totalmente falso que mi representada haya realizado las infracciones que se le imputan, como erróneamente lo pretende hacer valer la

denunciante de manera osada, realizando aseveraciones de las cuales no aporta elementos probatorios, queriendo sorprender a esta autoridad con argumentos vacíos, carentes de elementos mínimos necesarios para tener certeza sobre la existencia de los hechos denunciados.

De lo anterior, es preciso señalar que las aseveraciones vertidas por la quejosa, en su escrito de denuncia, son imprecisas, ya que omiten especificar los elementos que bajo su óptica incurren en dicha vulneración a la normatividad electoral, por lo que no se actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

(…)

*Asimismo, y como se señaló en la oportuna contestación, la parte quejosa no aportó los datos suficientes y certeros, al no lograr especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar u otra que permita establecer si en efecto, existió un hecho que la ley electoral señala como infracción, toda vez que, a pesar de ostentar la carga de la prueba, tal como lo establece la jurisprudencia 12/2010 de rubro **CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE**, la quejosa dejó de cumplir con dicha obligación, pues únicamente se limitó a aportar una serie de fotografías, es decir, pruebas técnicas, de las cuales, no se puede obtener certeza alguna dado que resultan insuficientes para demostrar de manera absoluta los hechos que contienen,*

además, de que estas podrían ser fácilmente alteradas o modificadas por parte de quien las pretende utilizar, sirviendo de apoyo la Jurisprudencia 4/2014 de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. En ese sentido, al no existir algún otro tipo de pruebas que pudieran ser concatenadas con las pruebas técnicas que exhibe la denunciante, a estas no se les debería otorgar un valor probatorio por sí mismas, y, por ende, resultaría imposible imponer sanción alguna en contra de mi representado.

Por lo anterior, debe restarle valor probatorio a las ofrecidas, toda vez que incurre en falsedad respecto de los hechos que se narran en su escrito de queja, es decir, describe un hecho en una forma en la que aparentemente sucedió y las probanzas no atienden el fondo de lo narrado.

Robustece los argumentos vertidos, la jurisprudencia 2001825 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro¹: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”, que refiere que si los agravios parten de premisas falsas resultan inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y su calificación, pues al partir de una suposición que no resulta verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.

En ese tenor, y al no existir una omisión de reportar dichos gastos o aportaciones en especie ante la autoridad correspondiente, ni haberse acreditado alguna infracción a la ley electoral, debe prevalecer en todo momento el derecho fundamental del C. Francisco a la presunción de inocencia, que, además, rige este procedimiento. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 21/2013 de rubro y texto siguientes:

(...)

Por otro, solicito respetuosamente que los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y al debido proceso de los que goza mi representado, sean garantizados y respetados en todo momento, siendo una obligación de la autoridad el observar los principios que rigen el presente procedimiento. En relación con lo anterior, tiene aplicación la tesis XXXII/2015 de rubro y texto siguientes:

(...)

¹ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo tres, página mil trescientos veintiséis.

Finalmente, solicito se tengan por reproducidos los argumentos vertidos al momento de la contestación de la queja y se considere que en el presente asunto, con los elementos de prueba aportados, por la quejosa, no se acredita los hechos y las circunstancias en las que pretende fundamentarla por lo que esta autoridad podrá darse cuenta que la parte quejosa eludió la verdad y que los hechos narrados como violatorios a la legislación de la materia son falsedades, por lo que es procedente que se dicte resolución, en la que se declare la inexistencia de la violación denunciada.

(...)"

XXXII. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Tania Yunuen Reyes Corral

- a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/CD11/MICH/VS/637/2021, se notificó a la C. Tania Yunuen Reyes Corral, en su carácter de incoada, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, la ciudadana no ha presentado escrito de alegatos. (foja 592 a 604 del expediente digital)

XXXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Rachid Hassan González Parra

- a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo, se notificó al C. Rachid Hassan González Parra, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, el ciudadano no ha presentado escrito de alegatos. (foja 592 a 595 del expediente digital)

XXXIV. Notificación de Acuerdo de Alegatos al quejoso.

- a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo se notificó a la C. Lorena Elizabeth Gaona Matus, en su carácter de quejosa, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos

que considerara convenientes. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, la ciudadana no ha presentado escrito de alegatos. (foja 604 a 612 del expediente digital)

XXXV. Cierre de instrucción. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.

XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue resuelto en la Novena Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes integrantes de dicha Comisión: la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, así como por los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y el Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, así como la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el ***fumus boni iuris*** —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del ***periculum in mora*** —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:

La promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse **por la autoridad competente**, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo INE/CG161/2016², aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:

Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el

² Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) estableció que la medida cautelar es una resolución accesorio, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.

procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.

En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la concatenación de la información obtenida por diversas vías.

Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la presencia de los siguientes elementos:

- La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;
- El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama; y
- La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de

derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización.

Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral administrativa.

Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.

Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto que el artículo 16 de la Constitución establece que *“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”*, asimismo el artículo 17 señala que *“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”*; por lo que en el caso específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.

En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en que **no ha lugar a decretar de medidas cautelares** en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, **en consecuencia, la solicitud de la quejosa no es procedente.**

3. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Ahora bien, debe considerarse que el partido político Morena cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que, mediante Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria IEM-CG-08/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 12 de enero de dos mil veintiuno, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Morena	\$49,608,767.81
Total	\$49,608,767.81

En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de la sanción que pudiera determinarse, la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento público local para actividades ordinarias.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	PARTIDO POLÍTICO	RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD	MONTO TOTAL DE LA SANCIÓN	MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE JUNIO DE 2021	MONTOS POR SALDAR	TOTAL
1	MORENA	INE/CG650/2020	\$2,885,305.19	\$2,810,661.70	\$74,643.49	\$2,885,305.19
2	MORENA	TEEM-JDC-085/2021	\$8,962.00	-	\$8,962.00	\$8,962.00

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político tiene la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

4. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2018 **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la Jurisprudencia que señala que *de la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.*

Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En este contexto, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la UMA vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a **\$86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N.)**, lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de precampaña correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.

5. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, una vez analizadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento, el cual consiste en determinar:

a) Si el Partido del Trabajo omitió presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de la C. Tania Yunuen Reyes Corral, en su calidad de aspirante al Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

b) Si el Partido del Trabajo omitió reportar en los informes de campaña correspondientes el gasto correspondiente a la pinta de 11 bardas que contienen propaganda genérica.

c) Si el Partido Morena y el C. Rachid Hassan González Parra omitieron reportar en el informe de campaña gastos por concepto de 1 spot publicitario en Facebook, 1 lona, 1 calendario y 1 banner de publicidad en internet que contenían propaganda de precampaña a su favor.

d) Si el Partido Morena omitió presentar el informe de precampaña del C. Rachid Hassan González Parra en su calidad de aspirante al cargo de Presidente Municipal Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Es decir, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 229, numeral 3, 445, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 numeral 1 inciso i) en relación con el 54, numeral 1, 55 numeral 1, 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1 y , 121, numeral 1, incisos a) y I) 127 y 223, numerales 6 incisos a), b), c) d) y 9 inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que para pronta referencia se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

"Artículo 229.

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley."

"Artículo 445.

*1. Constituyen infracciones de los aspirantes, **precandidatos o candidatos** a cargos de elección popular a la presente Ley; (...)*

c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley; (...)"

Ley General de Partidos Políticos

"Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;"

"Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, **precandidatos** o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero."

"Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas."

"Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

(...)

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán

estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

“Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

j) Las personas morales.

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.

l) Personas no identificadas”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

“Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de:

- a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición.*
- b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña.*
- c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de precampaña y campaña.*
- d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.*

(...)

9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de:

- a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que lleven a cabo.”*

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al marco del Proceso Electoral Federal Local Ordinario 2020-2021, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, tales como son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma de todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la

legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los entes políticos se conduzca en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos, siendo ellos quienes deberán llevar control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”*

Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223 numeral 6, inciso a), al señalar que los precandidatos postulados por partidos son responsables de presentar su informe de gastos de precampaña al partido que los postula.

En conclusión, los partidos políticos y los precandidatos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes de precampaña en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.


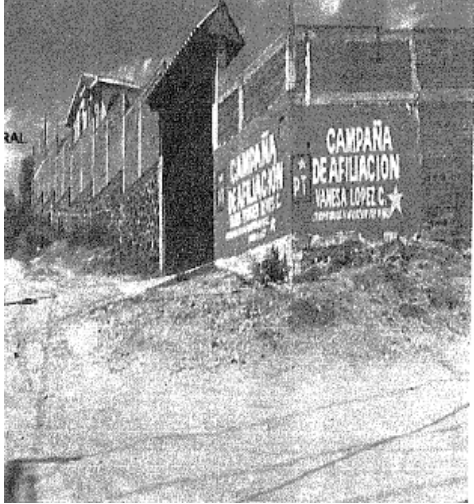
En razón de lo anterior, el análisis de los hechos investigados se realizará en los apartados siguientes:

6. Omisión del Partido del Trabajo de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de la C. Tania Yunuen Reyes Corral, en su calidad de aspirante al Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.



La C. Lorena Elizabeth Gaona Matus, denunció publicidad consistente en once bardas, una publicación en internet, así como una nota periodística como probables ingresos y egresos no reportados por parte del Partido del Trabajo y la C. Tania Yunuen Reyes Corral como probable candidata a un cargo de elección popular en el estado de Michoacán de Ocampo por el Partido del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la referida entidad.

La propaganda denunciada es la siguiente:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Ubicación de la Barda	Muestra
1	Lib. Ignacio Zaragoza, a un costado de la panadería, frente a la CFE. Barda de 2x5 metros. Aproximadamente: Localización: 19.5286268, -101.6127178	
2	Lienzo Charro. Doble barda de 2x4 metros c/u. Aproximadamente. Localización: 19°30'59.1"N 101°37'05.5"W	




CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Ubicación de la Barda	Muestra
3	Lib. Ignacio Zaragoza, Plaza Comercial Cinepolis, a un costado de la lechería, Barda de 2x5 metros. Aproximadamente. Localización: 19°30'46.1"N 101°37'08.5"W	
4	Calle Antonio Arriaga, subida al Infonavit 2, en la tortillería. Doble barda de 2x4 metros. Aproximadamente. Localización: 19°30'28.6"N 101°37'06.3"W	



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Ubicación de la Barda	Muestra
5	Av. Jamuquen, esquina con Martín Luis Guzmán. Barda de 2x6 metros. Aproximadamente. Localización: 19°30'19.8"N 101°37'02.0"W	
6	Carretera Santa Clara-Pátzcuaro Barda de 2x5 metros. Aproximadamente. Localización: 19°29'32.5"N 101°35'17.4"W	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Ubicación de la Barda	Muestra
7	Av. Lázaro Cárdenas a un costado del numero 96 Barda de 2x5 metros. Aproximadamente. Localización: 19°31'17.3"N 101°36'26.6"W	
8	Libramiento Ignacio Zaragoza, a un costado de la Fiscalía. Barda de 2x4 metros. Aproximadamente. Localización: 19.5103581, -1016167482	
9	Calle Independencia casi esquina con Sauz, Col. Emiliano Zapata Barda de 2x7 metros. Aproximadamente. Localización: 19.5227923, -101.6113888	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Ubicación de la Barda	Muestra
10	Calle Sauz esquina con Independencia Col. Emiliano Zapata. Barda de 2.5 metros. Aproximadamente. Localización: 19.5228940, -101-6114300	
11	Carretera Federal, tramo Huecorio-Uranden. Barda de 2x3 metros. Aproximadamente. Localización: 19.5378060, - 101.6366689	



En razón lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a emplazar al Partido del Trabajo a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de los hechos denunciados en cuya respuesta señaló lo siguiente:

- Que las conductas denunciadas no están relacionadas con el proceso electoral, sino en el caso de las bardas, con el despliegue de afiliación permanente, lo cual se encuentra dentro del marco legal permitido.
- Que informó oportunamente al OPLE que en el caso, durante el periodo de registro de aspirantes a una candidatura en Michoacán, no existieron registros de aspirantes, de ahí que se haya declarado desierto el proceso interno y que en el caso concreto la ciudadana denunciada no tuvo el carácter de aspirante o precandidata por lo cual no le era exigible presentar un informe de ingresos o egresos por gastos de precampaña

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- Que en el caso de la pinta con el nombre de la denunciada están relacionadas con actividades permanentes de afiliación del PT por lo cual no se violentó el deber de cuidado ni la posición garante.
- Que los gastos por la pinta de bardas fueron reportados a la autoridad en materia de fiscalización.

Al respecto, adjuntó a su respuesta copia del escrito dirigido a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el cual informó que respecto de los cargos a Gobernador, Diputado Local y Presidencia Municipal (112 municipios) el Partido del Trabajo no realizaría Precampaña.

En el mismo sentido se procedió a emplazar a la C. Tania Yunuen Reyes Corral, quien en su escrito de contestación señaló lo siguiente:

- Que no realizó precampaña
- Que nunca participó como aspirante ni se registró en el procedimiento interno del Partido del Trabajo toda vez que el partido no realizó proceso alguno o convocatoria alguna para tal fin para el proceso electoral 2021.

A su escrito adjuntó copia simple del oficio IEM-CA-24/2021 por parte del Partido del Trabajo dirigido a la C. María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, en el cual señala que no obra documento que la suscrita esté registrada como precandidata para algún cargo de elección popular dentro del proceso 2021 y en el que adicionalmente se menciona que el Partido del Trabajo se encuentra desarrollando la campaña de afiliación en el Municipio de Pátzcuaro y que se designó a Tania Yunuen Reyes Corral como Coordinadora de la afiliación en el citado municipio promoviendo dicha afiliación en pinta de bardas

De este modo, el 26 de marzo de 2021, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto Nacional Electoral realizara la certificación del contenido de la dirección de internet aportadas, así como la existencia de 11 bardas señaladas por la quejosa en su escrito de queja.

Al respecto, mediante oficio INE/DS/614/2021, la Directora del Secretariado de este Instituto, informó la admisión de la solicitud mencionada registrada con el número INE/DS/OE/45/2021, remitiendo copia del acuerdo de admisión, así como el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/42/2021, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se practicó la certificación del contenido de las páginas de internet solicitadas, así como el Acta Circunstanciada

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/001/2021 donde se certifica la existencia de 11 bardas denunciadas por la quejosa sin embargo ya no contenían el nombre de Tania Yunuen Reyes Corral.

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral constituye una prueba documental pública, misma que genera certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medio de convicción a la que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como documental pública expedida por una autoridad, en el ámbito de sus facultades.

Por otro lado, se procedió a requerir al Instituto Electoral de Michoacán, señalara si el Partido del Trabajo con motivo del desarrollo del Proceso Electoral Ordinario en Michoacán informó respecto de la realización de un proceso interno de selección de sus candidaturas a los Ayuntamientos, remitiendo la documentación correspondiente.

En consecuencia, la citada autoridad informó que el 5 de enero de 2021 la Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Electoral de Michoacán informó que una vez transcurrido el plazo de registro de precandidaturas a diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos por ambos principios no hubo registros por lo que el instituto en mención no tuvo precampaña.

En el mismo sentido, se le solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si los gastos por conceptos de bardas, propaganda en internet y la nota periodística se encuentran reportados en la contabilidad del Partido del Trabajo a nivel federal o local, en su caso señalara el informara el informe en el cual se realizó el registro correspondiente; asimismo señalara si Tania Yunuen Reyes Corral presentó el informe de precampaña; si obra información del método de selección llevado a cabo por el Partido del Trabajo para elegir a sus candidatos en el Estado de Michoacán; y, si en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos existe registro a nombre de Tania Yunuen Reyes Corral.

En consecuencia, la citada Dirección informó que los gastos no se encuentran registrados en la contabilidad de precampaña del Partido del Trabajo a nivel local, señalando ni el Partido del Trabajo ni la C. Tania Yunuen Reyes Corral presentaron informe de precampaña; y que el Partido del Trabajo no presentó informe alguno correspondiente a la etapa de precampaña por ningún precandidato en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el Estado de Michoacán; y que la

Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en esa entidad presentó los acuses de “no precampaña” que dicho partido presentó en el SNR, manifestando además que el instituto político no realizaría precampaña para los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales MR (12 distritos locales) Diputados Locales RP y Presidencias Municipales (112 municipios).

Es importante mencionar que mediante oficio INE/UTF/DRN/17655/2021 de 30 de abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento del Instituto Electoral de Michoacán que de los elementos investigados de los que se allegó la autoridad fiscalizadora para corroborar los hechos materia del presente procedimiento, por lo refiere a la publicación realizada en la red social Facebook, así como la posible propaganda periodística relacionadas con Tania Yunuen Reyes Corral se identificó que los hechos denunciados podrían esa detectó la existencia de **posibles actos anticipados de campaña** puesto de que las mismas fueron realizadas el dieciséis de febrero del año en curso día comprendido dentro del periodo de intercampaña, por lo cual, se consideró hacer del conocimiento al Instituto Electoral de Michoacán a fin de que determine si se actualizan o no la conducta señalada.

Sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán TEEM-PES-031-2021

Al respecto es necesario mencionar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán al resolver el expediente TEEM-PES-031-2021 el 9 de mayo de 2021, respecto del Procedimiento Especial Sancionador interpuesto en contra de Tania Yunuen Reyes Corral, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento de Pátzcuaro por la posible comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, utilización, de recursos públicos y promoción personalizada, cuya parte que interesa se cita a continuación

SÉPTIMO. Estudio de fondo

(...)

Hechos acreditados

(...)

- La existencia de once pintas de bardas, con propaganda de afiliación del PT, las cuales fueron detectadas el dieciocho de febrero

- El gasto por concepto de la pinta fue por la cantidad de \$4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

- La erogación realizada por la pinta de las bardas, provino del recurso público que la autoridad local le otorga al PT como prerrogativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos

- Dicha cantidad se contempló dentro de las actividades ordinarias, realizando el pago de la cuenta 00143361748 de la institución crediticia BBVA Bancomer a nombre del PT.

- **La permanencia de la propaganda fue hasta el veintiséis de febrero**

- El reconocimiento del PT del desarrollo de campaña de afiliación en el Municipio de Pátzcuaro, lo cual se realizó a través de la pinta de bardas.

- La campaña permanente de afiliación al PT.

- La designación como coordinadora de afiliación en dicho Municipio de Tania Yunuen Reyes Corral.

- El reconocimiento por parte de la ciudadana denunciada, de haber realizado la publicación de la campaña de afiliación como encomienda de su cargo, al interior del PT como coordinadora de afiliación del PT

- La solicitud de separación del cargo por tiempo indefinido, por parte de la denunciada el veintiséis de febrero

- La reincorporación a laborar como Síndica el diecisiete de abril a desempeñar su cargo, mismo que ejerce en la actualidad

Caso concreto

Como ya fue referido con antelación, los inconformes denunciaron la pinta de bardas en diversos puntos del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, con los que, a su decir, se incurre en promoción personalizada, así como en la utilización de recursos públicos.
(...)

Sin embargo, y no obstante a que no se acreditara la vulneración referida por los denunciados, esta autoridad jurisdiccional **si advierte una distinta infracción a la norma electoral**, consistente en la **promoción indebida** de Tania Yunuen Reyes Corral de manera conjunta con el PT, en favor de la primera, en contravención a lo dispuesto en el numeral 169 párrafo séptimo del Código Electoral, que establece que **ningún ciudadano** por sí, por terceros, por organizaciones de cualquier tipo o por **partidos políticos**, podrá realizar actividades de las previstas **para promocionar su imagen o nombre** con la finalidad de participar en un proceso de selección de candidato u **obtener una candidatura, desde seis meses antes de que inicie el proceso electoral**.

Se considera de ese modo, ya que en autos quedó plenamente acreditado, la existencia de la propaganda denunciada y que el gasto realizado por la pinta de las once bardas, provino del PT y que si bien se trata de recursos públicos, tal como lo manifestó, ese no se trata de recurso que tuviera su origen de la administración pública -del Ayuntamiento de Pátzcuaro en donde ejerce su función la servidora pública municipal-, se puede determinar de ese modo, ya que el Representante Propietario del instituto político informó a este Tribunal, que la cantidad monetaria destinada a la pinta de las bardas

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

proviene de las prerrogativas que la autoridad electoral -Instituto- le otorga como parte de sus derechos.

Del mismo modo, informó que dicho gasto corresponde a las actividades ordinarias que realiza el partido, soportando dicha información con el cheque número 9011 de veinticinco de febrero, del que se observa que la cuenta se encuentra a nombre del “Partido del Trabajo” y que se robustece con el estado de cuenta número 0143361748, ya que ambos contienen la cantidad de \$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.), la cual es coincidente con la factura A-153, expedida por Gerardo Iraburo Salas, por concepto de “trabajo de pintas y rotulación de bardas”, sujeto en favor de quien fue expedido el cheque.

En ese sentido, el partido refirió en escrito de treinta de abril, que el costo de las pintas realizadas en el municipio de Pátzcuaro, con la campaña de afiliación respectiva, tuvo un costo de \$4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que se encuentra comprendida dentro de la referida en el párrafo que antecede, ya que la factura se expidió de manera global por otros trabajos en diversos municipios, misma que no se encuentra controvertida y que al no obrar prueba que demuestre lo contrario, se tienen por ciertas dichas manifestaciones.

*Ahora bien, no pasa desapercibido el hecho de que el partido manifestara que, dichos trabajos fueron realizados derivado de la campaña de afiliación en el Municipio de Pátzcuaro, lo cual se promovió con la pinta de bardas, y designando para tal efecto **como coordinadora a Tania Yunuen Reyes Corral**, anexando el nombramiento respectivo. Situación que fue aceptada por la denunciada, a través de su escrito de veinticuatro de abril, en el que además reconoció que en el desempeño de dicho cargo interno, le fue encomendada única y exclusivamente la publicación de la campaña de afiliación, lo cual realizó, sin que ello implique una contrariedad con el cargo que ostenta. Ahora, si bien anexó los formatos de autorización de pintas de bardas, así como las respectivas credenciales de elector de los dueños de los inmuebles, las fotografías de las bardas, tal como lo establece la normativa electoral, dicha circunstancia **no es suficiente para suponer que la actividad se realizó con estricto apego a la legalidad**, pues en la misma y en el supuesto de que efectivamente se tuviera la intención de promocionar la campaña de afiliación del partido, **no debía contener el nombre de la denunciada**, no obstante que ésta tenga el carácter de coordinadora de afiliación del PT en el Municipio de Pátzcuaro.*

*Pues en todo caso, en las pintas realizadas únicamente **se tendrían que haber limitado a contener el cargo de quien promueve dicha campaña** al interior del partido como “**Coordinadora de afiliación en Pátzcuaro**”, sin que la hiciera plenamente identificable “**Tania Yunuen Reyes Corral**”, ya que si bien se separó de sus labores como servidora pública, por un periodo corto (del veintisiete de febrero al diecisiete de abril, es decir, por un lapso de un mes y veinte días), ésta se reincorporó a ejercer sus actividades el diecisiete de abril y que además en la actualidad se continúa desempeñando en el cargo de Síndica Municipal, entonces al plasmar su nombre y al encontrarse ubicadas las pintas de bardas en distintos puntos del Municipio de Pátzcuaro, es claro que se pretendió realizar una promoción ante la ciudadanía en su favor y no únicamente realizar actividades de la campaña del partido.*

*Por lo que se **tiene por acreditada la vulneración de la norma ante la promoción indebida de Tania Yunuen Reyes Corral.***

Responsabilidad de los partidos políticos del Trabajo y MORENA.

(...)

Responsabilidad del Partido MORENA

(...)

Tomando en consideración que se tuvo por acreditada la falta en estudio, y en atención que mediante oficio INE/UTF/DRN/12476/2021, de veintinueve de marzo, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral informó que admitió a trámite y registró el procedimiento sancionador con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH, en contra del PT y Tania Yunuen Reyes Corral, al ser la autoridad competente para conocer y resolver sobre los hechos relacionados con las posibles violaciones en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos Por lo que, se ordena dar vista a dicha Unidad con la presente determinación, para los efectos legales conducentes, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda.

Actos anticipados de precampaña y campaña

(...)

Caso concreto

Los denunciantes manifestaron que, ante la realización de la pinta de bardas, se constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, por lo que vistas las fechas en las cuales dieron inicio cada una de dichas etapas:

Tipo elección	Periodo Precampaña		Periodo Campaña	
	Inicio	Conclusión	Inicio	Conclusión
Ayuntamiento	02 enero	31 enero	19 abril	02 junio

*Así como de la acreditación de los hechos denunciados –dieciocho al veintiséis de febrero-, se desprende que **la detección de las pintas fue posterior a la conclusión de las precampañas y previo al inicio de las campañas**, consecuentemente el estudio se realizara únicamente a los actos anticipados de campaña.*

Los hechos que originaron el presente consisten, como ya se ha referido en reiteradas ocasiones, en la pinta de once bardas en diferentes puntos del Municipio de Pátzcuaro, con los cuales a consideración de los denunciantes se actualiza la vulneración a la norma, de las cuales quedó plenamente acreditada su existencia, tal como se hizo constar en el acta destacada fuera de protocolo de fe de hechos, con número de certificación 5402,42 así como en el acta circunstanciada de verificación número 01, por la Secretaria del Comité Distrital del lugar referido, en los domicilios que se indican a continuación.

(...)

Por tanto, y al demostrarse su existencia se procede al análisis de los elementos personal, temporal y subjetivo, a efecto de determinar si se acredita o no la vulneración a la legislación electoral.

Elemento personal

Se actualiza el presente ya que, del contenido de las pintas, se observa el nombre de la denunciada, además de existir la aceptación tácita de ésta de haber realizado dicha propaganda en el ejercicio de su cargo como “Coordinadora de Afiliación del Municipio de Pátzcuaro”.

Elemento temporal

También se estima que se cumple este elemento, al haberse realizado los actos en un periodo no permitido, del dieciocho al veintiséis de febrero, es decir, en periodo de intercampaña, esto es después de la etapa de precampaña y previo al inicio formal de las campañas.

Elemento subjetivo

A Juicio de este Órgano Jurisdiccional, no se colma el presente elemento, pues pese a que aún y cuando de las constancias de autos se desprende que la temporalidad en que se constató la existencia de la propaganda denunciada, resulta coincidente con la etapa de intercampaña del proceso que se encuentra en curso, lo cierto es que, de las documentales que fueron allegadas como elementos de prueba, no se puede determinar que Tania Yunuen Reyes Corral, haya sido registrada como precandidata del PT, pues como éste lo informó no llevó a cabo la realización de precampañas

Y si bien, no pasa desapercibido que obra documento con el que se acredita que ésta fue registrada por la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Michoacán” para integrar Ayuntamientos, ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidata a Síndica Propietaria, dicha situación aconteció hasta el dieciocho de abril.

Sin embargo, cabe recordar que para que se colme el presente elemento se requiere la existencia de manifestaciones explícitas o inequívocas, respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, o se publique una plataforma electoral.

Es decir, se debe advertir el uso de expresiones, voces o locuciones como las siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “-X- a -tal cargo-; “vota en contra de”; “rechaza a”, o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.

*O debe observarse, si los actos o hechos realizados contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral expreso, o bien como lo señala la jurisprudencia **4/2018** un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca”.*

Y que tal como lo ha sostenido la Sala Regional Toluca, para determinar si un mensaje posiciona o beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede ser interpretado de manera objetiva como una influencia positiva o negativa para una campaña, es decir, si es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto.

Así pues, **del análisis integral del mensaje contenido en la propaganda difundida, así como del contexto del mensaje de las bardas denunciadas no se observa la existencia de manifestación explícita e inequívoca, abierta y sin ambigüedades en favor de los denunciados, pues de su contenido únicamente se advierten las frases siguientes: en un fondo de color rojo, con letras en color blanco "CAMPAÑA DE AFILIACIÓN", "TANIA YUNUEN REYES C." "COORDINADORA DE AFILIACIÓN EN PÁTZCUARO", en letras amarillas las siglas "PT" y una estrella colocada en la parte superior, así como la estrella distintiva del PT.**

Sin que se desprenda petición alguna de voto u otra forma de expresión que suponga la finalidad de hacerlo, como tampoco se advierten solicitudes de apoyo o rechazo que se encuentren relacionadas a través de elementos implícitos o velados, ni expresiones explícitas o unívocas e inequívocas en ese sentido.

Y que si bien, del mismo se observa que contiene el nombre de la aquí denunciada, dicha circunstancia no es suficiente para determinar que por ese solo hecho, se actualicen los actos anticipados de campaña, -sin que ello implique el desconocimiento de alguna otra vulneración- y, por el contrario, contiene elementos que determinan que se trata de propaganda del partido, que incluye un mensaje genérico referente a la campaña de afiliación del partido, por lo que para una mejor apreciación se inserta una de las imágenes con el contenido, el cual es idéntico en la totalidad de las bardas.



Como se advierte, del contenido de la imagen, es posible arribar a la convicción de que en las pintas de bardas en estudio.

- No contiene un llamado expreso al voto en favor de los denunciados.
- No se hace mención sobre aspiración a un cargo de elección popular.
- No contiene una frase, lema o alguna otra leyenda que haga suponer la existencia de un equivalente funcional al llamado al voto.
- No se posiciona a una persona como una opción política, de cara al proceso electoral que se desarrolla en el estado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Así pues, ni de los elementos observados, ni de su contexto, se advierten frases o expresiones equivalentes que expresamente llamen a la ciudadanía a emitir su voto en algún sentido, o la publicación de alguna plataforma electoral.

*En consecuencia, se concluye **que no es posible tener por actualizados los actos anticipados de campaña**, tomando en consideración además el principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento especial sancionador.*

*Consecuentemente, se **declara la inexistencia de la violación** atribuida a la ciudadana denunciada y a los partidos políticos del Trabajo y MORENA.*

Finalmente, en relación con la presunta propaganda periodística, así como la publicación en la red social de Facebook, la denunciante fue omisa en señalar concretamente qué es lo que pretende acreditar con éstas, así como precisar las circunstancias de modo y tiempo que reproducen las pruebas, insertándolas únicamente de forma genérica, motivo por el cual no serán motivo de análisis y estudio en la presente.

(...)

En razón de lo anterior, Consejo General concluye que el Partido del Trabajo no tenía la obligación de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de la C. Tania Yunuen Reyes Corral en razón de lo siguiente:

- En el marco del proceso de selección interna del Partido del Trabajo no se registró aspirante alguno de ahí que se haya declarado desierto el proceso interno y que en el caso concreto la ciudadana denunciada no tuvo el carácter de aspirante o precandidata por lo cual no le era exigible presentar un informe de ingresos o egresos por gastos de precampaña.
- Si bien es cierto se acreditó la existencia de 11 bardas que contenían su nombre, fue en un periodo en el cual ya había fenecido la etapa de precampaña (2 al 31 de enero).
- En las bardas no se promociona a Tania Yunuen Reyes Corral como precandidata a Presidenta Municipal o a cargo diverso en Pátzcuaro, Michoacán.
- Si bien es cierto que Tania Yunuen Reyes Corral fue registrada por la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Michoacán” para integrar Ayuntamientos, ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidata a Síndica Propietaria, dicha situación aconteció hasta el dieciocho de abril.

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no se acreditan elementos para acreditar que el Partido del Trabajo y la C. Tania Yunuen Reyes

Corral vulneraron lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual los hechos analizados en el presente considerando deben declararse **infundados**.

8. Seguimiento al Informe anual 2021

Una vez acreditado en la Sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán TEEM-PES-031-2021 que el Partido del Trabajo realizó el pago por concepto de pinta de las 11 bardas, de la cuenta 00143361748 de la institución crediticia BBVA Bancomer a nombre del PT, por un monto de \$23,200.00³ (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.), mismo que fue depositado en la cuenta del proveedor el 5 de marzo de 2021, monto que es coincidente con la factura A-153, expedida por Gerardo Iraburo Salas, por concepto de “trabajo de pintas y rotulación de bardas”, y que la permanencia de las bardas fue hasta el veintiséis de febrero⁴, este Consejo General considera instruir a la Unidad Técnica de Fiscalización realice el seguimiento respecto de su reporte en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2021.

Lo anterior considerando que los gastos que se pudieron haber realizado y en su caso, contabilizado corresponden al gasto ordinario y toda vez que el partido no registró precandidaturas, se dará seguimiento a los gastos realizados en la revisión del Informe Anual 2020 o 2021.

7. Marco normativo

Resulta de vital importancia acotar el marco conceptual, para sentar las bases de la determinación respecto a los hechos objetos de investigación que en derecho proceda, en los términos siguientes:

a) Proceso de selección interna.

³ Importe del cual el gasto por concepto de la pinta fue por la cantidad de \$4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.),

⁴ Tres días antes de que iniciara el plazo para el registro de las y los candidatos de la elección de que se trate, en términos de lo establecido en el Artículo 19 del Acuerdo INE/CG518/2020, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña Correspondientes al proceso electoral federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso

El artículo 226, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el plazo legal para que los partidos políticos determinen, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular es de treinta días antes del inicio formal de los procesos internos de selección.

La determinación del procedimiento aplicable para los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular deberá señalar:

- La fecha de inicio del proceso interno;
- El método o métodos que serán utilizados;
- La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
- Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;
- Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y
- La fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.

En virtud de lo anterior, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte de la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los procesos de selección interna de los candidatos que pretendan buscar la postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los actos de selección interna generan que los partidos, militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad (banner de publicidad en internet, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario para ser candidatos y expresar que cuentan con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio ente político; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser postulado.

b) Precampaña.

En términos del artículo 227, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por precampaña al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas,

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

asambleas, marchas y, en general, aquellos eventos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

Asimismo, el numeral 3 del citado precepto normativo, señala que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

Por su parte, el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de las precampañas y de acuerdo con la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña.

Concatenado con lo anterior, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación a los partidos políticos de presentar informes de precampaña para cada uno de los precandidatos a candidatos a un cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

De ahí que, de conformidad con el artículo 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos.

Aunado a lo anterior, se debe considerar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 195 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización se emitió el acuerdo INE/CG518/2020 en cuyos artículos del 18 al 25 el Consejo General señaló los gastos se considerarán como de precampaña y cuales como gastos de procesos de selección de procesos internos de los Partidos Políticos, así como instrumentar la manera en que los partidos y precandidatos deben cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Así, conforme al artículo 18 inciso a), del referido acuerdo, se establecieron como gastos de propaganda, *la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos o precandidatas con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.*

c) Concepto de precandidato.

En términos del artículo 227 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precandidato es *“el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.”*

Por su parte, el artículo 4, numeral 1, inciso pp) del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente:

“Artículo 4.

Glosario

1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

(...)

pp) Precandidato: Ciudadano que conforme a la Ley de Partidos y a los Estatutos de un partido político, **participa en el proceso de selección interna de candidatos** para ser postulado como candidato a cargo de elección popular.”

Y, en este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha definido a los precandidatos, en su glosario de términos⁵, de la siguiente manera:

“Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido para desempeñar un cargo de elección popular.”

En este sentido, es dable señalar que los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como **candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidatos, con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatos.**

⁵ Disponible en la página web: <https://www.te.gob.mx/front/glossary/>

Lo anterior es congruente con lo razonado por la Sala Superior del TEPJF al resolver Recurso de Apelación SUP-RAP-121/2015 y Acumulado cuya parte se transcribe a continuación:

*“A juicio de esta Sala Superior no asiste la razón a los actores porque conforme a lo establecido en el artículo 227, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, **se colige que un precandidato es en términos generales un ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a esta Ley y al Estatuto de un partido político, en el procedimiento de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, sin que tal calidad se constriña, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular como lo aducen los demandantes.** El texto del mencionado precepto legal es al tenor literal siguiente:*

‘Artículo 227. [...]

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.’

Aunado a lo anterior, es importante destacar que, conforme a lo previsto en la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL CARGO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, de manera particular en la Base 7, denominada “DE LAS NORMAS DE PRECAMPAÑA” se estableció:

*7.6 Todos los **contendientes** deberán denominarse públicamente como precandidatos o precandidatas, debiendo utilizar el logotipo, colores y emblemas del Partido, en su propaganda, en la cual además deberán identificar que se trata de una elección interna del Partido.⁶*

En este contexto, se debe destacar que, con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro como precandidatos, lo cierto es que tanto el partido político recurrente como cada uno de los actores del juicio para la protección de los derechos político electorales en sus escritos de demanda aceptan que cada uno de ellos tuvieron el carácter de aspirante a candidato a diputado o a integrante de ayuntamiento, en consecuencia, tal afirmación constituye un reconocimiento expreso, por lo que se trata de un hecho no controvertido en términos

⁶ Es importante señalar que la Base Primera de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de las candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos; para el proceso electoral local 2018 – 2019 en el Estado de Aguascalientes establece en su último párrafo lo siguiente: “(...) *Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física o moral contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la **precandidatura** correspondiente.*”

de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En tal orden de ideas esta Sala Superior considera que **la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, en los Distritos Electorales Locales y Municipios en los que no se reservaron candidaturas o bien en los casos en los que sean designados de un conjunto de aspirantes. [...]**

'Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: [...]

d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;'

(...) lo cierto es que de los preceptos trasuntos, particularmente de lo dispuesto en el artículo, 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se puede colegir que, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En este tenor, tampoco tienen razón los demandantes al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien es cierto que atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.

(...)

Por tanto, no asiste la razón al partido político apelante al aducir que no tenía la obligación de presentar informes.

(...) a juicio de esta Sala Superior, (...) el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracciones II y III, los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña y que los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas.

La interpretación que se hace de tales disposiciones es acorde a la teleología de las normas a partir de las recientes reformas constitucionales y legales en materia electoral, conforme a las cuales se fijó entre los principales objetivos:

- La eficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, dada su relación con la equidad en los procedimientos electorales.*
- Integrar un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.*
- Evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.*

Al efecto se citan los párrafos atinentes de la Exposición de Motivos de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
POLÍTICOS**

*‘[...] En este sentido, la Iniciativa que hoy sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía tiene por objeto, además de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, establecer una legislación que regule de manera eficaz a los partidos políticos existentes en el país, ya sea nacionales o locales, en aspectos tales como su integración, registro, participación política, representación, acceso a la información pública, **así como la fiscalización y el régimen de sanciones por incumplimiento a las disposiciones en materia electoral.***

Incluso en la discusión de la citada reforma constitucional, los aspectos antes mencionados se consideraban como asuntos internos de los partidos políticos, por lo que no era posible realizar una fiscalización efectiva, aun cuando disponen de presupuesto público. Adicionalmente, los mecanismos para definir a los candidatos a cargos de elección popular eran cuestionados tanto al interior del partido como al exterior, con el argumento, por ejemplo, de la permanencia de las mismas estructuras en órganos de gobierno, circunstancia que obstruye la generación de nuevos cuadros políticos y de representación.

Ante este escenario, resulta de vital importancia limitar el espacio discrecional de los partidos políticos, trasladando a la esfera de lo público aquellos aspectos que garanticen por un lado, el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público, por medio del establecimiento de derechos mínimos y obligaciones a cargo de los militantes; así como un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.

Además, se deben establecer condiciones de permanencia y en su caso, de cancelación del registro de partidos políticos, pues también es cuestionable la existencia de partidos políticos sin la suficiente legitimación social, al observarse

desde una matriz de costo beneficio para el país. En congruencia con esto, no es tema menor el establecimiento de mecanismos de participación política, como las coaliciones y fusiones políticas, como paradigmas de fortalecimiento electoral de los partidos políticos.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**

‘Mención particular merecen la regulación que se propone en las materias siguientes:

1. Fiscalización efectiva y oportuna de los recursos que utilicen las asociaciones políticas y candidaturas. Se revoluciona el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final, que en el caso de las informes de gastos de campaña sea, de ser el caso, parte de los elementos de la declaración de validez de las elecciones.

Estableciendo para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas el principio de máxima publicidad con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.’

En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior sería contrario al sentido de la reforma constitucional y legal excluir a determinados sujetos obligados, del cumplimiento de las normas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, máxime que las normas atinentes no vinculan la presentación de los informes al hecho de llevar a cabo o no, actos de precampaña, por tanto es deber de los sujetos obligados conforme a la Ley, con independencia de que no hayan llevado a cabo actos de campaña, presentar los informes de precampaña conforme a lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Es preciso señalar que ese asunto que resolvió el máximo órgano jurisdiccional tuvo como objeto de estudio, entre otras cosas, determinar si diversos ciudadanos que participaron en el proceso de selección adquirieron la calidad de precandidatos y con ello la obligación de presentar los informes de precampañas de ingresos y egresos en el Proceso Electoral 2014-2015, y como se transcribió en líneas anteriores, resolvió que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas

existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En ese sentido determinó que en el referido asunto no le asistía la razón al actor al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien, atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.

De manera análoga, la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados como SM-JRC-71/2016 y SM-JDC-244/2016, realizó razonamientos similares, cuya parte se transcribe a continuación:

*“En principio, es de mencionarse que MORENA y María Soledad Luévano Cantú sí estaban obligados a presentar el referido informe, ya que **el carácter de precandidata de la referida ciudadana quedó acreditado mediante el Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Zacatecas**, de veintinueve de enero del presente año (...)*

Por otra parte, esta Sala Regional ha sostenido que la obligación de los partidos de presentar informes tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos así como el destino de su aplicación, por tanto, es solo a través de su presentación que la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización.

*En ese sentido, **MORENA sí estaba obligado a presentar el informe de precampaña de María Soledad Luévano Cantú, con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede realizar su labor de fiscalización.***

Por otra parte, no se comparte la afirmación del partido promovente en cuanto que la presentación de los informes de precampaña sea solo “una mera formalidad”, esto se debe a que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la LEGIPE, los partidos políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora.

En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión o presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de los

precandidatos y candidatos de los partidos políticos, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Conforme a lo expuesto, se constata el incumplimiento de MORENA en materia de fiscalización al haber omitido presentar el informe de precampaña de María Soledad Luévano Cantú.”

En la resolución transcrita, la Sala Regional Monterrey del TEPJF razonó que los sujetos obligados sí tienen la obligación de presentar el informe de precampaña con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización. También que la presentación de los informes no es una mera formalidad, toda vez que los partidos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, en este caso, los informes de precampaña y ante la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión de los informes, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas.

De lo hasta aquí expuesto, se **puede establecer que las personas que participen en los procesos de selección interna de candidatos y sean registrados de conformidad con los Estatutos**, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser considerados precandidatos (as), **siempre y cuando realicen actos encaminados a publicitar entre los militantes y simpatizantes del partido, así como al público en general sus intenciones de obtener la candidatura a un cargo público, con la finalidad de obtener su respaldo en el desarrollo del proceso interno de selección que efectúe el partido político**, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el proceso, y por ende, tienen la obligación de presentar el informe de gastos de precampaña.

Lo anterior es así, toda vez que, iniciado el Proceso Electoral correspondiente y de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deben de contar con un órgano de decisión colegiada, responsable de la organización de la selección de candidatos a cargos de elección popular,⁷ ante el cual una vez emitida la convocatoria respectiva, la ciudadanía interesada deberá obtener su registro para adquirir la calidad de

⁷ Conforme a lo establecido en el artículo 46, inciso e) de los Estatutos de Morena, corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones **organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas.**

aspirante o precandidato para estar en posibilidad de participar en el Proceso Electoral Local o federal de mérito.

En este contexto, si bien la convocatoria emitida únicamente menciona la calidad de “aspirante”, lo cierto es que **tal calidad debe entenderse atendiendo a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.**

En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiere a la figura de aspirante se entiende que se refiere a un precandidato (a), toda vez que con dichas calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura, ya sea a través de la celebración de la asamblea correspondiente o de la valoración y calificación de perfiles y en su caso la eventual aplicación de una encuesta, como acontece en el presente asunto. Lo anterior pone en evidencia que, con independencia de la denominación, que se le pretende dar por parte de los ciudadanos y el partido, se encuentran sujetos a la fiscalización de los recursos que se utilicen.

En este contexto, si bien la convocatoria que se emita únicamente puede hacer mención a la calidad de “aspirante”, la misma debe entenderse atendiendo a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.

De igual forma, conforme a los artículos 43, numeral 1, inciso c) y 77 de la Ley General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los partidos políticos, se encuentra el órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y generales, así como de la presentación de los informes respectivos de ingresos y egresos, entre los cuales se encuentra la presentación del informe de precampaña.

Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en el artículo 223, numerales 1, 3, inciso b) y 7, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, al señalar que el responsable de finanzas del partido político de que se trate, será el responsable de:

- a) La presentación de los informes, su contenido y su documentación comprobatoria;
- b) Capacitar a los precandidatos en la aplicación del Reglamento de Fiscalización, debiendo contar con constancia escrita de ello; y
- c) Establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar la aplicación estricta del Reglamento referido; cuyo incumplimiento tiene como consecuencia que se

considere una infracción cometida por parte del partido político, en términos del artículo 226, numeral 1 incisos c) y k) del Reglamento de Fiscalización.

Así las cosas, se advierte una obligación específica por parte de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos (as).

En este sentido, la obligación original de rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, toda vez que es el responsable de las finanzas del partido político, el que debe de presentar los informes de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, como sujeto principal de dicha obligación.

De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 44 numeral 1, fracción IX, 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos en relación con los diversos 443 párrafo 1, inciso d) y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, como se advierte del texto de los preceptos que se citan a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones **de los partidos políticos** a la presente Ley:

(...)

d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de **precampaña** o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus Reglamentos;”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones **de los aspirantes, precandidatos** o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

d) **No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;**”

Ley General de Partidos Políticos

Capítulo V.

De los procesos de integración de órganos internos y de selección de candidatos

“Artículo 44

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los Lineamientos básicos siguientes:

(...)

IX. Fechas en las que se **deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña**, en su caso.”

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;”

Asimismo, el Reglamento de Fiscalización aplicable establece:

“Artículo 3.

Sujetos obligados

1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:

- a) Partidos políticos nacionales.
- b) Partidos políticos con registro local.
- c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los Partidos Políticos Nacionales y locales.
- d) Agrupaciones políticas nacionales.
- e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales.
- f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional.
- g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales.**
- h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

2. Los Partidos Políticos Nacionales con acreditación para participar en elecciones locales, tendrán el mismo trato que un partido político local en el ámbito de las elecciones locales y las obligaciones materia de este Reglamento.

3. **Los partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes locales y federales deberán inscribirse en el Sistema de Registro Nacional de Candidatos** de conformidad con los Lineamientos y requisitos que para tal efecto disponga el Instituto. La cuenta de correo electrónico proporcionada en el Registro Nacional de Candidatos será la base para que los sujetos obligados reciban avisos electrónicos, comunicados e información relacionada con los procesos de fiscalización a cargo del Instituto.

Una vez realizada la inscripción en el Sistema antes citado, el Instituto entregará a cada aspirante, precandidato, candidato, y candidato independiente la cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea para la consulta de sus operaciones.”

“Artículo 22.

De los informes

1. Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que establecen la Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden clasificarse de la manera siguiente:

a) Informes del gasto ordinario:

I. Informes trimestrales.

II. Informe anual.

III. Informes mensuales.

b) Informes de Proceso Electoral:

I. Informes de precampaña.

II. Informes de obtención del apoyo ciudadano.

III. Informes de campaña.

c) Informes presupuestales:

I. Programa Anual de Trabajo.

II. Informe de Avance Físico-Financiero.

III. Informe de Situación Presupuestal.”

Así, de los preceptos normativos citados, se advierte que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas, existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña, constituyendo una infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En consecuencia, la ciudadanía que participe en los procesos de selección interna de candidaturas para un cargo de elección popular y sea registrada de conformidad con los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser

considerados precandidatos, y, por ende, deben presentar el informe de precampaña correspondiente.

d) Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR)

Tal como se desprende de la normatividad señalada, son los partidos políticos quienes deben llevar a cabo las acciones necesarias para registrar a sus precandidatos y, en consecuencia, que estos puedan informar sobre sus ingresos y gastos. Lo anterior se logra mediante el registro de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR), así como en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente:

*“(...) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que **el partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el SIF.** Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, en el cual se indica textualmente: (...)*

Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad.

*De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, y **ello obedeció a un acto atribuible al partido**, como fue reconocido por la Unidad de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, **al dejar transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del precandidato en el SNR y el SIF.***
(...)”

[énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones conducentes para registrar a los precandidatos en el SIF y en el SNR para el efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña.

Para robustecer lo antes señalado, debemos atender las reglas que establece el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la operación del SNR, en el cual se establece lo siguiente:

- El partido político es responsable de la operación del Sistema y, entre otras, de las siguientes actividades:
 - Administrar al interior de su partido, las cuentas de los usuarios para la operación del multicitado Sistema.
 - Autorizar y crear la cuenta de un responsable del SNR por entidad, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales con representación local.
 - Aprobar en el SNR la solicitud de registro de las personas que, de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el instituto político, hayan sido aceptadas como precandidatos.
 - Autorizar en el SNR la solicitud de registro de las personas que de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el partido que representan, hayan sido seleccionadas para postularlas a las candidaturas, ante el Instituto o el Organismo Público Local, según el ámbito de elección.
- El partido deberá capturar las fechas en las que se llevará a cabo el registro de precandidaturas y en las que se realizarán las actividades de precampaña.
- Las personas aspirantes a ser precandidatos deberán entregar ante el órgano facultado del partido, el formulario de registro y el informe de capacidad económica impreso con firma autógrafa generado por el sistema, junto con la documentación adicional que al efecto señale el partido político. El llenado del formulario de registro no otorga **la calidad de precandidata o precandidato, ésta se obtiene hasta el momento en que el partido político determine su procedencia, de conformidad con los requisitos establecidos en su convocatoria.**
- La persona que aspira a la precandidatura por el partido político será la responsable de la veracidad de la información contenida en el formulario de registro, de los datos del informe de capacidad económica, de la aceptación para recibir notificaciones electrónicas y de la firma autógrafa de este formulario de registro, así como de proporcionarlo al partido político en los plazos y cumpliendo los requisitos que el mismo haya establecido.

Al respecto, es preciso señalar que con fundamento en los artículos 267, numeral 2; 270, numeral 1 y 281 del Reglamento de Elecciones, los partidos políticos deben realizar el registro de precandidaturas y candidaturas en el SNR implementado por el propio Instituto, tanto en elecciones federales como locales ya sean ordinarias o extraordinarias, toda vez que constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos.

e) Sistema Integral del Fiscalización.

Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en los sistemas de fiscalización a los precandidatos para el efecto de que éstos puedan tener acceso a los mismos y con ello poder reportar los ingresos y gastos que, en su caso, hayan realizado en el periodo de precampaña. En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en la ley, el deber de presentación de los diversos informes es una obligación compartida entre los partidos políticos y los precandidatos, pues por un lado, es deber de los partidos políticos realizar los trámites necesarios para que las personas que adquieran una precandidatura estén en condiciones de informar en tiempo real los ingresos y gastos que tengan con motivo de esa calidad y finalmente presentar ante el partido político correspondiente el informe para que este a su vez, cuente con los insumos necesarios para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora.

Sobre este punto es importante señalar que la obligación de presentar un informe de precampaña de ninguna manera implica la imposición de una carga adicional ni un perjuicio a los sujetos obligados, pues en el caso en que no realizaran ningún gasto, únicamente se deberá presentar el informe correspondiente en ceros. Pues tal como fue señalado con anterioridad, el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos, así como el destino de su aplicación, y solo a través de su presentación la autoridad puede realizar sus tareas de fiscalización.

Al respecto, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG518/2020 por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

En la especie, el artículo 18 del citado Acuerdo define los conceptos que se consideran gastos de precampaña.⁸ Asimismo, el artículo 27 del citado Acuerdo dispone que las y los precandidatos deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, atendiendo a los plazos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral⁹, esto es, existe una responsabilidad compartida entre los y las precandidatas y los partidos políticos, siendo estos los responsables directos ante la Unidad Técnica de Fiscalización los informes correspondientes.

De los razonamientos expuestos anteriormente es posible formular las siguientes conclusiones:

- Los partidos políticos tienen obligación de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.
- Las y los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de la obligación de entregar dichos informes.
- La obligación de los partidos políticos de presentar los informes existe con independencia de que se determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato, el método electivo, ni el nombre con que se designe al precandidato.
- Los partidos son directamente responsables, en materia de fiscalización, de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos

⁸ **Artículo 18.** En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4 y 211, párrafos 1, 2 y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la LGIPE y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: **a)** Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos o precandidatas con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular. **b)** Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares; **c)** Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el partido y precandidata o precandidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; **d)** Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; **e)** Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de campaña; **f)** Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser personas candidatas cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de las y los candidatos.

⁹ Artículo 27. Las y los precandidatos, incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE. Se deberá presentar un informe por precandidato o precandidata.

efectuados, por todos y cada uno de los precandidatos participantes en el proceso de selección interna.

- En el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe el imperativo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, para lo cual es necesario presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

Una vez establecido lo anterior, a fin de dar claridad a las consideraciones y conclusiones vertidas por esta autoridad en párrafos precedentes, se considera pertinente realizar algunas precisiones.

Primeramente, es dable señalar que la manifestación de voluntad es uno de los componentes esenciales del acto jurídico, toda vez que es el origen del mismo, pues de no existir lo que se configura es un hecho jurídico; lo anterior es así, tomando en cuenta que se considera como la manifestación voluntaria mediante el cual una persona expresa o exterioriza la intención de celebrar un acto con pleno conocimiento de las consecuencias que ello le implican.

Por lo anterior, la manifestación de voluntad representa un requisito de validez del acto jurídico, toda vez que es el resultado de todo proceso volitivo¹⁰ de la persona que transcurre de lo subjetivo (voluntad interna) hacia lo objetivo (voluntad externa), y, por tanto, adquiere relevancia jurídica, de ahí que cobre relevancia que exista una correlación entre la real intención del sujeto y lo que éste expresa.

La trascendencia de ello radica en que la manifestación de voluntad proviene de una persona que cuenta con plena capacidad para ello, que tiene como origen una actitud que asumen los individuos de generar determinados efectos jurídicos; por consiguiente, este proceso solamente puede ser el resultado del propósito que tiene ese sujeto para perseguir un fin determinado mediante la celebración de ese acto.

Aunado a lo anterior, para que ésta sea considerada como tal y, por ende, genere efectos jurídicos¹¹, deben actualizarse algunos elementos, mismos que a continuación se señalan:

¹⁰ La Real Academia Española (RAE) señala que la palabra volitivo proviene del latín y su traducción está directamente relacionada con el verbo "querer", de ahí que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta.

¹¹ Cfr. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/7.pdf>;
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4290/20.pdf>.

- Discernimiento. - Esta muestra la capacidad cognoscitiva o intelectual que tiene la persona para apreciar, diferenciar y distinguir racionalmente antes de emitir su voluntad, con pleno conocimiento de las consecuencias que genera con su decisión; en ese sentido, permite evidenciar que la persona comprende la diferencia entre lo “justo y injusto”, “bien y mal”, entre otros y con esa apreciación emitir válidamente su voluntad.
- Intención. - Esta muestra que el individuo tiene el propósito deliberado de querer celebrar el acto con pleno conocimiento de las consecuencias de su realización; en ese sentido, estará encaminada a la obtención de la finalidad prevista por la persona libre de todo engaño o simulación.
- Libertad. - Esta muestra la capacidad que tiene el sujeto de poder elegir de manera libre y transparente la realización o no del acto; siendo éste, este el componente esencial de la manifestación de voluntad, en que medie violencia, intimidación o coacción.

Por otra parte, la Real Academia Española define la **simulación** como el **acto de representar algo, fingiendo o imitando lo que no es**; en ese sentido, la simulación implica un engaño, ya sea de forma total o parcial, para **aparentar como verdadera una mentira o para fingir a los ojos de terceros una verdad diversa a la realidad**. Así pues, el acto simulado, deviene de un conjunto de voluntades en donde, los sujetos participan de forma activa e implícita, buscando que éste se realice a sabiendas de la simulación.

En virtud de lo anterior, se tiene que las características de la simulación son las siguientes:

- Oposición entre la voluntad interna y la voluntad declarada. - esto es, el acto implica una diferencia deliberada entre la voluntad interna y sus manifestaciones, pues no quieren ser reflejo de la primera; esta discrepancia da contenido a la voluntad interna y a su verdadera y real intención.
- La producción del acto simulado. - Para que exista una simulación, es indispensable que éste se produzca, pues de otro modo no puede existir,

<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-voluntad/declaracion-de-voluntad.htm>; RÍOS ÁVALOS, BONIFACIO. Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos. 1996; ROMERO MONTES, Francisco Javier. Curso del Acto Jurídico, Editorial Portocarrero. 2003; BOFFI-BOGGERO. Teoría General del hecho jurídico. 1962.

dicho de otra forma, debe presentarse la común diferencia entre la voluntad interna y la voluntad manifestada.

- Propósito de engañar a los terceros. - La simulación está encaminada a producir un acto aparente, por consiguiente, el propósito de engañar es inherente, dado que éste va dirigido a un tercero.

En ese sentido, el acto puede ser lícito o ilícito, toda vez que no debe confundirse la intención de engañar con el propósito de dañar, porque la simulación en sí misma no es lícita ni ilícita, pudiendo ser el acto que emana de ella ilícito por su finalidad; esto es, si mediante el acto simulado se persigue perjudicar a un tercero u obtener un beneficio indebido.

Aunado a lo anterior, se establece que existen diversas clases de simulación, no obstante, en lo que es materia de este procedimiento, destacan las siguientes:

- Simulación absoluta. - cuando las partes realizan un acto fingido que no corresponde a ningún acto real; es decir, éste no produce efecto alguno entre las partes, ni lo expresado en él, dado los participantes únicamente quieren solamente la declaración, pero no sus efectos, se crea una apariencia carente de consecuencias destinada a engañar a terceros.
- Simulación relativa. - cuando se celebra un acto en apariencia, con el cual se oculta el verdadero; es decir, se realiza un sólo acto con doble carácter: aparente y auténtico, el primero es querido como carente de efectos jurídicos entre las partes como “cubierta” del segundo, que es el que tiene carácter real y produce efectos.
- Simulación lícita e ilícita. - La simulación es lícita o “inocente” cuando no tiene como fin perjudicar a terceros o transgredir normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres; mientras que se considera ilícita, cuando tiene por objeto perjudicar a terceros u ocultar la transgresión de normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y atendiendo al análisis y valoración realizada en los párrafos que anteceden, se puede establecer que Morena llevó a cabo un acto de simulación al no presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de su precandidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro en el estado de Michoacán de Ocampo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; toda vez que dicho ente político expresó no haber tenido precandidaturas ni

gastos de precampaña, pretendiendo así evadir la obligación de presentación de dicho informe.

Se acredita la manifestación de la voluntad del partido, toda vez que expresó la intención de celebrar un acto -no presentar su informe del precandidato- aun conociendo las posibles consecuencias que esto podría generar, pudiendo elegir de manera libre y transparente cumplir con la normatividad electoral.

Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y una vez precisadas las cuestiones normativas previstas en la norma deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

Bajo esa tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento sancionador que por esta vía se resuelve

El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió vía electrónica el escrito de queja suscrito por la C. Lorena Elizabeth Gaona Matus, por propio derecho, en contra del Partido MORENA y el C. **Rachid Hassad González Parra** denunciando la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán

Al respecto, se denunció que **Rachid Hassad González Parra** tenía intenciones de participar como candidato a la Presidencia Municipal, de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, toda vez que se promocionó a través de lonas, banner de publicidad en internet y calendarios con los cuales según su dicho se advertía la realización de actos de precampaña y la existencia de gastos.

Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización con el propósito de recabar mayores elementos de convicción que permitieran a esta autoridad dilucidar los hechos materia de la presente investigación, realizó verificación del contenido del monitoreo realizado en el marco de la revisión de los informes de precampaña del cual advirtió la existencia del ticket 15399 de 10 de febrero de 2021 en el cual se hace constar que de la revisión de diversos sitios de internet de conformidad con el acuerdo CF/019/2020 se detectó la página de internet conocida como Facebook de

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

la cual se desprende la existencia de un spot publicitario a favor de Rachid González como aspirante a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena levantada el día 5 de febrero de 2021

Así también, procedió a levantar razón y constancia de la Convocatoria y/o ajustes en su caso, a los procesos internos de selección de las candidaturas Ayuntamientos del estado de Michoacán, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, con el propósito de obtener información que permitiera esclarecer los hechos objeto de investigación.

De este modo se llevó a cabo la revisión que se realizó en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de verificar la existencia o no del registro de ingresos y/o egresos, así como de la existencia o no de la presentación de informe de ingresos y gastos de Precampaña, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán, por parte de los sujetos obligados, sin que se advirtiera el registro de egresos relacionados con dicho concepto, ni el informe correspondiente, como se muestra a continuación:

The screenshot displays the 'Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos' web application. The browser address bar shows the URL: `candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/modulos/registroPrecandidatos/registroSistema/precandidatos/bandeja?execution=e2s1`. The application header includes the INE logo and a 'Cerrar Sesión' link. A left sidebar contains navigation links: Inicio, Avisos, Registro (highlighted), Apoyo ciudadano, Precampaña, Campaña, Planilla de ayuntamiento, Listado de Ayuntamiento, Aprobación, Gestión, and Reportes. The main content area features search filters: 'Entidad' (MICHOACÁN), 'Tipo de candidatura' (PRESIDENCIA MUNICIPAL), 'Demarcación o municipio' (PATZCUARO), 'Tipo sujeto obligado' (PARTIDO POLÍTICO), and 'Sujeto obligado' (MORENA). A 'Buscar' button is located below the filters. The search results section, titled 'Consulta', contains a table with columns: Acciones, Selecciona, Folio de Registro - Id registro, Fotografía, Nombre del/la precandidato/a, Tipo de candidatura, Entorno geográfico, Sujeto obligado, Estatus, and ¿Se reali: modificac. The table is currently empty, with the text 'Sin registros' displayed. Below the table, a pagination bar shows 'Total de registros 0, Página 1 de 1' and a dropdown menu set to '10'. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 11:37 p.m. on 03/07/2021.

Dichas razones y constancias constituyen documentales públicos que, en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo

prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

En este contexto, se procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito, emplazar y requerir información a Morena y al C. **Rachid Hassad González Parra**.

De las contestaciones se advierte medularmente lo siguiente:

a) Morena:

- Que no postuló precandidatos a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, por lo que no tenía la obligación de presentar el informe de precampaña, en consecuencia, no hubo pólizas de registro en el Sistema Integral de Fiscalización

b) Rachid Hassad González Parra:

- Que desconoce si el método de selección interna se llevó a cabo conforme a la Convocatoria emitida por el Comité Nacional de MORENA en virtud de que nunca fue notificado si se aprobó el proceso respectivo si se publicó en la página de MORENA quienes obtuvieron los registros
- Que el periodo de precampaña concluyó el 31 de enero de 2021 por lo que no se realizaron actos de precampaña respecto a las candidaturas a que se refiere la Convocatoria, puesto que la misma fue publicada un día antes.
- Que realizó su solicitud de registro al cargo de candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán el 7 de febrero de 2021.
- Que desconoce si fue aprobado su registro y que si participó como aspirante a dicho cargo.
- Que no se realizaron actos de precampaña y que por lo tanto no se actualizó la obligación de rendir el informe de ingresos y gastos de precampaña.
- Que, si bien solicitó su registro como candidato a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, nunca fue notificado ni se publicó la lista de los

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

aspirantes registrados en la página de *morena.si* por lo que desconoce si fue aprobado.

- Al respecto, anexo a su escrito, copia de su registro como aspirante al cargo de Presidente Municipal en el Estado de Michoacán.

La información y documentación remitida por el partido Morena y **el C. Rachid Hassad González Parra** constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Continuando con la línea de investigación, se solicitó información al Instituto Electoral de Michoacán si le fue informado por el sujeto obligado, el método de selección interna del partido político Morena en Michoacán para elegir a sus candidatos al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 de la referida entidad, solicitándole en su caso precisara las etapas, periodos y fechas en las que se desarrolló la selección, el nombre de las personas que participaron y la forma en que se llevó a cabo dicho proceso, por lo que en respuesta el Instituto informó principalmente lo siguiente:

- Que el diecisiete de febrero, se recibió escrito, mediante el cual el partido Morena informó que no realizaría precampaña para los cargos de elección popular en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad.
- Que no existe procedimiento sancionador por la realización de actividades contrarias a las disposiciones de la normatividad electoral, en el periodo de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, respecto del **C. Rachid Hassad González Parra**, candidato al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán.
- El Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con un monitoreo oficioso de publicidad en materia de propaganda político-electoral.

Debe decirse que la información y documentación remitida por el Instituto Electoral de Michoacán y la Dirección del Secretariado constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se requirió de información al C. **Rachid Hassad González Parra** a efecto de que confirmara la realización de los gastos denunciados, sin embargo, en su respuesta señaló que al no existir precampaña no realizó gasto alguno.

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización en relación con el acuerdo INE/CG518/2020 en cuyos artículos del 18 al 25 el Consejo General estableció que gastos se considerarán como de precampaña, se procede a analizar, si los gastos detectados durante la investigación de los hechos denunciados, encuadran dentro de los gastos considerados como precampaña, y en consecuencia determinar si los mismos debieron ser reportados en el informe de precampaña.

Así, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito

Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral. Por tal motivo, el estudio se realizará conforme los apartados siguientes:

9. Egresos no reportados

Previo a entrar al desarrollo del presente apartado, resulta fundamental señalar que la pretensión de la quejosa consiste en acreditar la omisión de reportar ingresos y/o egresos, posible aportación de personas no identificadas y/o entes prohibidos, así como la probable omisión de presentar informe de precampaña, lo anterior en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

De esta manera, conviene precisar que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-RAP- 20/2019 estableció que la autoridad fiscalizadora es competente para determinar la naturaleza de los gastos que revisa, así, medularmente en lo que interesa ese Alto Tribunal determinó:

*"El planteamiento del recurrente es infundado, porque **la autoridad fiscalizadora sí es competente para determinar la naturaleza de los gastos que revisa.***

(...)

*En ese mismo sentido, **el argumento es inoperante porque, al carecer de los elementos indispensables para realizar una adecuada verificación, la responsable estuvo imposibilitada para verificar la finalidad, temporalidad y territorialidad de los gastos del evento.***

Más aún, considerando que existen gastos que el legislador ha determinado que son, per se, de campaña, al no tener elementos que le permitieran determinar la naturaleza del acto, es claro que no asiste la razón al recurrente."

Sobre esa base, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización en relación con el acuerdo INE/CG518/2020 en cuyos artículos del 18 al 25 el Consejo General estableció que gastos se considerarán como de precampaña, se procede a analizar, si los gastos detectados durante la investigación de los hechos denunciados, encuadran dentro de los gastos considerados como precampaña, y en consecuencia determinar si los mismos debieron ser reportados en el informe de precampaña.

Así, en primer término, consta de la revisión a la Convocatoria a los procesos internos de candidaturas para miembros de los Ayuntamientos para los procesos electorales 2020-2021 en Michoacán de Morena, la fecha de registro para participar en ella es posterior al periodo de precampaña establecido, como se muestra a continuación:

Cargo	Periodo de Precampaña ¹²	Periodo de registro de aspirantes	Publicación de las solicitudes de registro aprobadas	Validación y calificación de resultados
Presidente Municipal en Michoacán de Ocampo	Del sábado, 2 de enero de 2021 al domingo 31 de enero de 2021.	30 enero de 2021 al 7 de febrero de 2021.	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021

¹² Acuerdo INE/CG519/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el IEM-CG-46-2020 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se establecen los plazos relativos a la fiscalización del periodo de precampaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Por tanto, la autoridad instructora requirió al partido Morena para que proporcionara el método por el cual el C. . **Rachid Hassad González Parra** se inscribió para participar en el proceso de selección interna como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Sin embargo, la respuesta del partido en comentario fue el indicar que el 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo emitió la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para; diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en su caso miembros de las alcaldías y concejalías en los procesos electorales 2020-2021, así como que **el partido político Morena** no estableció lineamientos para la etapa de precampaña de aspirantes a los cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local: por esa razón no hubo lugar a realizar precampañas de dichos aspirantes.

Así mismo que el método o procedimiento realizado para la selección de candidaturas a los diversos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Michoacán" conlleva que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sea la instancia facultada para definir las candidaturas de Morena, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en el proceso electoral aludido, con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el Estatuto del Partido, de conformidad con lo previsto en los numerales 44°, inciso w), y 46°, del Estatuto de Morena. Así mismo señalo que la Convocatoria fue debidamente publicitada en la pagina oficial de Morena en la pagina https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf . Que no realizo aportación, ingreso y/o gasto alguno con motivo del procedimiento de selección interna de candidatos al Proceso Electoral que se informa, por lo cual no hay pólizas de registro.

Por lo anterior y ante la necesidad de contar con los elementos necesarios, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán informara si el partido político Morena con acreditación local ante dicho Instituto, con motivo del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad de referencia, realizó algún proceso interno de selección de sus candidaturas y, si éste fue informado o comunicado a ese Organismo Público Local, señalando específicamente lo siguiente:

“(…)

a) Con fecha 15 de noviembre al 17 de noviembre, mediante acta del Consejo Nacional del Partido Político Morena, se facultó al Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, a través de su Presidente y secretaria General, para acordar, concretar, y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes, o cualquier medio de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, con partidos políticos nacionales y locales afines a la 4 Transformación, así como para la postulación y registro de candidatos; además de acordar, convenir y establecer los términos en que morena participará en dichas coaliciones, candidaturas comunes o alianzas

b) Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que Morena como instituto político NO realizó precampaña para los cargos de elección popular a la gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

c) Convenio de Coalición signado por los Partidos Políticos del Trabajo y Morena.

(…)”

Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones la quejosa señaló la existencia de una lona, un banner de publicidad en internet y un calendario que contenían propaganda a favor de Rachid Hassan González Parra los cuales presuntamente no fueron reportados en el informe de precampaña correspondiente del citado ciudadano.

Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización con el propósito de recabar mayores elementos de convicción que permitieran a esta autoridad dilucidar los hechos materia de la presente investigación, realizó verificación del contenido del monitoreo realizado en el marco de la revisión de los informes de precampaña del cual advirtió la existencia del ticket 15399 de 10 de febrero de 2021 en el cual se hace constar que de la revisión de diversos sitios de internet de conformidad con el acuerdo CF/019/2020 se detectó la página de internet conocida como Facebook de la cual se desprende la existencia de un spot publicitario a favor de Rachid González como aspirante a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena levantada el día 5 de febrero de 2021

En razón de lo anterior, se requirió al Partido Morena y al C **Rachid Hassad González Parra**, a efecto de que proporcionaran la documentación soporte de la cual se advirtiera el reporte en el informe de precampaña de los gastos

denunciados, quienes únicamente se limitaron a manifestar que no efectuaron gasto alguno.

Por lo tanto, de la concatenación con el marco conceptual expuesto en párrafos precedentes y de los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, se obtiene que el ciudadano C. **Rachid Hassad González Parra**, se registró al proceso de selección interna de la candidatura para la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán y cuyo carácter de conformidad con la propia convocatoria y la confirmación del propio partido político MORENA (quien le permitió contender formalmente en el proceso de selección interna) es de aspirante, por los motivos expuestos se entiende le reviste el carácter de un precandidato y por tanto tenía la obligación de presentar su informe de precampaña.

Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las publicaciones denunciadas por los quejosos de modo que se puedan obtener los elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos constituyen o no gastos de precampaña electoral tal como lo establece el artículo 18 inciso a) del acuerdo INE/CG518/2020 por el que el Consejo General en cumplimiento a lo establecido en el artículo 195 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización se señaló los gastos que se considerarían como de precampaña y cuales como gastos de procesos de selección de procesos internos de los Partidos Políticos, así como también a través del cual se instrumentó la manera en que los partidos y precandidatos deben cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, que a la letra señala:

“GASTOS DE PRECAMPAÑA

Artículo 18. *En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4 y 211, párrafos 1, 2 y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la LGIPE y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:*

a) *Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos o precandidatas con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.*”

(Lo subrayado es propio)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Ahora bien, para acreditar la existencia de actos de precampaña, lo procedente es analizar si los elementos obtenidos, cumplen con todos y cada uno de los elementos siguientes:

a) **Un elemento personal:** que los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda.

b) **Un elemento temporal:** que dichos actos o frases se realicen durante la etapa procesal de precampaña.

c) **Un elemento subjetivo:** En este caso, recientemente la Sala Superior estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral.

Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por el artículo 211, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece:

“Artículo 211.

*1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
(...)”*


Dicho lo anterior, se procede a analizar si los elementos referidos se acreditan con las conductas desplegadas por la persona incoada, que para pronta referencia se analizan en términos generales en el cuadro siguiente:

ID	Fecha Razón y constancia	ELEMENTO		
		Personal	Temporal	Subjetivo
1	05/02/2021	Se acredita , ya que en la imagen aparece el C. Rachid Hassad González Parra	Se acredita.- La imagen fue publicada y difundida en redes sociales el 5 de febrero , sin embargo la convocatoria del proceso de selección interna de	Se acredita.- En virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera objetiva su finalidad electoral, la intención del posicionamiento del sujeto; ya que se observa que en una


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Fecha Razón y constancia	ELEMENTO		
		Personal	Temporal	Subjetivo
			<p>MORENA para elegir a sus aspirantes a candidatos se prorrogó hasta el 8 de abril para el cargo de Ayuntamiento por lo que Rachid Hassad González Parra tuvo el carácter de precandidato.</p>	<p>de las imágenes, se encuentra al lado de un niño y en otra aparece su imagen un costado de un acueducto acompañado de la leyenda RACHID GONZALEZ X PATZCUARO JUNTOS HAREMOS HISTORIA, es decir su intención de participar como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido MORENA pues acompaña la leyenda "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" ya que el lema de la Coalición en que participó el citado instituto político precisamente se identifica con la leyenda "Juntos Haremos Historia"</p>
2	18/06/21	<p>Se acredita, ya que en la imagen aparece el C. Rachid Hassad González Parra</p> 	<p>Se acredita.- La nota da cuenta que el 14 de febrero de 2021, Rachid Hassad González Parra se registró como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, siendo importante menciona que si bien es cierto el periodo de precampaña en dicha entidad ya había fenecido, dicha publicación corresponde al periodo en el que morena llevó a cabo su proceso de selección interna en el cual Rachid Hassad González Parra participó como aspirante.</p>	<p>Se acredita.- Del análisis realizado al texto de la publicación se da cuenta de que Rachid Hassad González Parra se perfila como el aspirante con mayor experiencia a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Fecha Razón y constancia	ELEMENTO		
		Personal	Temporal	Subjetivo
	CALENDARIO	<p>Ensayado presento Calendario con difusión política</p>  <p>50</p>	<p>Se acredita.- Si bien se tuvo conocimiento de la existencia de la propaganda hasta el 12 de marzo de 2021 (fecha en que se presentó el escrito de queja ante el OPLE de Michoacán) y que si bien es cierto el periodo de precampaña en dicha entidad ya había fenecido (2 al 31 de enero), la propaganda fue localizada en el periodo en el que Morena llevó a cabo su proceso de selección interna en el cual Rachid Hassad González Parra participó como aspirante.</p>	<p>Se acredita: La propaganda contiene la leyenda RACHID GONZALEZ X PATZCUARO JUNTOS HAREMOS HISTORIA, PATZCUARO 2021, Si te llega la encuesta, Rachid es la respuesta.</p> <p>En razón de lo anterior claramente se advierte la intención de Rachid González de aspirar a ser elegido como candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena, ya que el lema de la Coalición en que participó el citado instituto político precisamente se identifica con la leyenda “Juntos Haremos Historia”</p>
	LONA	<p>Se ve la imagen, rostro intención política e identificación de nombre como se le conoce Rachid.</p>  <p>Dictamen consideración legal personal fiscalización, en base a reglamentación vigente:</p> <p>La elaboración de matriz de precios del costo de las pintas de las bardas lonas y calendarios mas redes sociales ya trascritas que doy por insertas, debe laborarse en un costo económico a precio de costo por precio mercado de costo comercial de renta de bardas, pintura, trabajo de rotulista, costo de lonas, colocación, costo imprenta calendarios en 10</p> <p>51</p>	<p>Se acredita.- Si bien se tuvo conocimiento de la existencia de la propaganda hasta el 12 de marzo de 2021 (fecha en que se presentó el escrito de queja ante el OPLE de Michoacán) y que si bien es cierto el periodo de precampaña en dicha entidad ya había fenecido (2 al 31 de enero), la propaganda fue localizada en el periodo en el que Morena llevó a cabo su proceso de selección interna en el cual Rachid Hassad González Parra participó como aspirante.</p>	<p>Se acredita: La propaganda contiene la leyenda BIENVENIDO AL JUEGO RACHID GONZALEZ X PATZCUARO JUNTOS HAREMOS HISTORIA, PATZCUARO 2021, Si te llega la encuesta, Rachid es la respuesta.</p> <p>En razón de lo anterior claramente se advierte la intención de Rachid González de aspirar a ser elegido como candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena, ya que el lema de la Coalición en que participó el citado instituto político precisamente se identifica con la leyenda “Juntos Haremos Historia”</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

ID	Fecha Razón y constancia	ELEMENTO		
		Personal	Temporal	Subjetivo
	banner de publicidad en internet	<p>QUINTO.- propaganda de RACHID GONZÁLEZ.</p>  <p>Se ve la imagen, rostro intención política e identificación de nombre como se le conoce Rachid.</p>	<p>Se acredita.- Si bien se tuvo conocimiento de la existencia de la propaganda hasta el 12 de marzo de 2021 (fecha en que se presentó el escrito de queja ante el OPLE de Michoacán) y que si bien es cierto el periodo de precampaña en dicha entidad ya había fenecido (2 al 31 de enero), la propaganda fue localizada en el periodo en el que Morena llevó a cabo su proceso de selección interna en el cual Rachid Hassad González Parra participó como aspirante.</p>	<p>Se acredita: El banner publicitario en internet contiene la leyenda Si te visitan o tu teléfono suena, Rachid es la respuesta. EL BUENO ES #RACHID, PATZCUARO. En razón de lo anterior claramente se advierte la intención de Rachid González de aspirar a ser elegido como candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro.</p>

De las precisiones efectuadas en la tabla anterior a cada concepto de propaganda que obran en el expediente, esta autoridad estima que se tienen acreditados los 3 elementos, como en seguida se expone:

Respecto al elemento personal se advierte en todas las publicaciones la imagen plenamente identificable del sujeto obligado, esto es, el C. **Rachid Hassan González Parra**, ello puesto que la conducta reprochada es atribuible a su persona como sujeto obligado.

Por cuanto hace al segundo de los elementos (temporal), es importante mencionar que en todos los casos los hallazgos de esta autoridad si bien no se verificaron durante los periodos establecidos por el Instituto Electoral de Michoacán, para el desarrollo de las precampañas, también lo es que corresponden al periodo en que el Partido Morena llevó a cabo su proceso de selección interna su proceso de selección interna y, por ende toda vez que **Rachid Hassan González Parra** participó como aspirante y realizó gastos que lo beneficiaron tenía la obligación de entregar el informe de precampaña correspondiente.

En este sentido, de los hallazgos detectados y analizados en párrafos anteriores, se advierte que las conductas desplegadas por la persona incoada sí cumplen con el elemento de temporalidad pues todas se realizaron en el ámbito temporal

establecido en la convocatoria del Partido Morena en el cual llevó a cabo su proceso de selección interna para el actual proceso electoral ordinario en el estado de Michoacán.

Finalmente, por cuanto hace al elemento subjetivo, se acredita la existencia de manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de la reiterada búsqueda de apoyo a una opción electoral con la realización de diversas actividades por parte del sujeto incoado como a continuación se expone.

En efecto, tal como se ha mencionado, la Sala Superior ha determinado que, para tener por acreditado el elemento subjetivo se debe actualizar lo siguiente:

- La realización de manifestaciones **unívocas de apoyo** o rechazo a una opción electoral,
- Dichas manifestaciones deben **trascender al conocimiento de la ciudadanía**, y
- Que afecten la equidad en la contienda electoral.

A consideración de este consejo General, el elemento subjetivo se acredita por la existencia de los siguientes elementos:

Así, se identificó que en la totalidad de la propaganda analizadas se advierte claramente el propósito de **Rachid Hassan González Parra** para ser candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena.

En conclusión, existen suficientes elementos para afirmar que de la propaganda analizada si se acreditan los 3 elementos para considerar que con las actividades realizadas por el C. **Rachid Hassan González Parra**, si se acreditó que realizó actos de precampaña, independientemente que no haya existido un registro formal del partido político en el que se le haya denominado expresamente con tal carácter; además se advierte que el aspirante manifestó su intención de contender por la candidatura, a un cargo de elección popular incluso antes del inicio de la precampaña correspondiente.

Ahora bien, una vez que se han analizado los elementos obtenidos por la autoridad instructora durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, en el marco de los elementos mínimos que se deben considerar para precisar que un acto es de precampaña, es importante definir la conducta o conductas que se acreditan con los actos realizados por el postulante tendentes a obtener el apoyo hacia el interior del partido político Morena para convertirse en su candidato.

Ahora bien, como se ha dicho, en el escrito de queja presentado por la quejosa denunció la existencia de propaganda consistente en una, lona, un calendario y un banner de publicidad en internet que considera contiene los actos de precampaña que acreditaban omisiones en origen, monto y aplicación de recursos, realizados durante el periodo de precampaña, por lo que, la autoridad fiscalizadora, tal como se han mencionado en párrafos anteriores, acreditó que contenían propaganda electoral a favor del C, **Rachid Hassan González Parra**; asimismo acreditó la existencia de un spot publicitario en el marco de la revisión de los informes de precampaña correspondientes al Proceso Ordinario Local 2020-2021.

De igual manera, con la intención de verificar sobre la existencia o no de registro de ingresos y/o egresos, por parte de los sujetos obligados respecto del objeto de investigación, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán, se levantó Razón y Constancia en el Sistema Integral de Fiscalización, constatándose la falta de registro de egresos relacionados con dichos conceptos.

En tal sentido, con el propósito de estar en posibilidad de determinar el origen de los recursos relacionados con este apartado considerando que los gastos consistentes en **1 spot publicitario en Facebook , 1 lona, 1 calendario y 1 banner de publicidad en internet** de cuyo estudio se acreditó que constituye gastos de precampaña a favor del precandidato incoado que en su caso debe ser cuantificada y, en su caso, sancionada.

Por lo que, la autoridad fiscalizadora mediante diversos oficios requirió tanto al partido político Morena, como a su precandidato denunciado con la finalidad de corroborar si dichos gastos fueron realizados y reportados para que, en su caso, remitiera la documentación soporte con que contara, de cuyas respuestas se advierte que señalan que no existieron precampañas razón por la cual no hicieron gasto, y, por ende que no tenían obligación de entregar el informe de precampaña.

Por lo anterior, al valorar las pruebas en conjunto respecto de los hechos materia del presente apartado, es viable concluir lo siguiente:

- Se demostró la existencia de la propaganda denunciada a favor de **Rachid Hassan González Parra como aspirante a candidato al cargo de presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán.**

- En los registros del Sistema Integral de Fiscalización, no se encuentra reportado gasto alguno relacionado con los gastos **1 spot publicitario, 1 lona, 1 calendario y 1 banner de publicidad en internet** , detectados.

Al haberse acreditado la existencia de gastos susceptibles de reportarse es existente la existencia de egresos no reportados en beneficio de los sujetos incoados por la realización de actividades que posicionaron y beneficiaron la aspiración del C. **Rachid Hassan González Parra**, a candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo .

Determinación del monto que representa el beneficio generado a la campaña.

Derivado del apartado anterior, toda vez que, se acreditó la conducta reprochada al partido político Morena y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, C. **Rachid Hassan González Parra**, al omitir reportar egresos efectuados durante el periodo de precampaña, consistente en gastos **1 spot publicitario en facebook, 1 lona, 1 calendario y 1 banner de publicidad en internet** , dadas las circunstancias particulares que rodearon los hechos que se investigan, de manera específica, en cuanto al monto total de los egresos que se efectuaron en beneficio de los sujetos incoados, resulta necesario y objetivo determinar el monto involucrado para la determinación de la sanción que corresponda y su debida cuantificación.

Al respecto, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, no pasa desapercibido, que en el caso en concreto se trata de un egreso no reportado; por lo que es viable que la determinación del valor de los egresos no reportados se sujete a los criterios siguientes¹³:

- a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

¹³ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016

- c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

De esta forma, se procedió a consultar la matriz de precios con motivo de la revisión de los informes de precampaña correspondientes al Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, en los términos siguientes:

<i>Crterios de Valuación</i>				
<i>Renglón Matriz de Precios</i>	<i>Concepto</i>	<i>Valor unitario (Sin IVA)</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Total</i>
1194	1 spot publicitario en Facebook	2100	3	\$6,300.00
186	1 lona	77.61	2.99 mt2	\$194.92
3928	1 calendario	901.32	1	\$901.32
1194	1 banner de publicidad en internet	2100	1	\$2,100.00
<i>Total</i>				<i>\$9,496.24</i>

Dicha información constituye una documental pública que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los hechos que se investigan, de manera específica el monto de los egresos no reportados es que esta autoridad considera que resulta razonable y objetivo considerar el monto de **\$9,496.24 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis 24/100 M.N.)** como el involucrado en la infracción acreditada.

Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una

consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos.

Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se justifica el monto determinado.

Responsabilidad de los sujetos incoados.

Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos incoados** en la consecución de la conducta infractora determinada en el presente apartado de este Considerando.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus precandidaturas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que estos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, en el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.

- c) Informes mensuales.
- 2) Informes de proceso electoral:
 - a) Informes de precampaña.**
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

Ahora bien, por lo que hace a las precandidaturas, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que: *“Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;”*.

De lo anterior se desprende, que, no obstante que el instituto político haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de las personas que participaron en el periodo de precampaña en búsqueda de una candidatura en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo son las precandidaturas de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que las personas que participan en las precandidaturas son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un

beneficio de ello, consecuentemente los y las precandidatas son responsables solidarios respecto de las conductas materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre precandidaturas, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, los y las precandidatas están obligadas a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y este a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las personas postuladas en los periodos de precampaña, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidaturas; a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s); y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los y las precandidatas obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que, el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el partido político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria de las y los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar la falta señalada o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria respecto de las personas que participaron en el proceso de precampaña para obtener una candidatura a puestos de elección popular.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las precandidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando estos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los precandidatos, conociendo estos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado, al determinar que *los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los candidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización¹⁴. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 17/2010 **RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS**

¹⁴ **Artículo 212. Deslinde de gastos.** 1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el siguiente procedimiento: 2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica. 3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica. 4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones. 5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. 6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el proyecto de dictamen consolidado."

POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE¹⁵.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de la conducta que se estima infractora de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al sujeto obligado pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

Individualización de la sanción respecto de los egresos no reportados

Una vez que se ha precisado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, determinada en el presente apartado, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

¹⁵ Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **Considerando 2 denominado “capacidad económica”** de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de correspondiente a este apartado, la falta corresponde a una **omisión**¹⁶ de reportar gastos realizados, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

¹⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El partido Político Morena, cometió una irregularidad al omitir reportar egresos consistentes en los gastos efectuados por concepto de **1 spot publicitario en Facebook, 1 calendario, 1 lona y 1 banner de publicidad en internet**, atentando contra lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco del periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados por concepto de **1 spot publicitario en Facebook, 1 calendario, 1 lona y 1 banner de publicidad en internet**; se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los

valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En el apartado que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹⁷; y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁸.

De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, en tanto es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición

¹⁷ "Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (...)"

¹⁸ "Artículo 127.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad;

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento"

de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y

atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.¹⁹

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **Considerando 2 denominado “capacidad económica”** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en razón de que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, del informe objeto de revisión.

¹⁹ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$9,496.24 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis 24/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²⁰

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo en comento, consistente en una **reducción de la ministración** mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

²⁰ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado, a saber **\$9,496.24 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis 24/100 M.N.)** lo que da como resultado total la cantidad de **\$14,244.36(catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$14,244.36(catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

10. Omisión de presentar el informe de precampaña

En relación a este apartado, en primer lugar, hay que tener claridad en la diferencia que existe entre los procedimientos internos de selección de candidatos de la definición de una precampaña. Para ello y con la finalidad de poder determinar las diferencias existentes entre uno y otro, así como los efectos que producen hay que retomar los conceptos ya expresados en la presente Resolución de manera individual. La discrepancia entre los conceptos señalados es una interpretación sistemática y gramatical de lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que reconoce la existencia de estos.

En efecto, de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los procesos internos para la selección de candidatos son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. Por su parte, el artículo 227 define a las precampañas como el conjunto de actos que realizan los partidos políticos,

sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargo de elección popular debidamente registrados por cada partido.

Dicho lo anterior, se puede inferir que los procesos internos de selección de candidatos pueden ser considerados como el “género” y las precampañas la “especie”. Del mismo modo, se destaca que en los procesos internos de selección de candidatos refieren a actividades en las que participan partidos políticos y quienes aspiren a ocupar esos cargos, mientras que en las precampañas se refieren a actos en los que participan partidos, militantes y precandidatos; razón por la cual es importante considerar que, si nos encontramos frente a una precampaña, resultaría indispensable que existieran actividades que difundan la existencia de las precandidaturas entre la militancia, porque ésta adquiere un papel fundamental en la realización de tales actos; hasta cierto punto, es claro que debemos dividir los conceptos con énfasis en la finalidad e intención de cada uno y no de manera conjunta.

Por tal circunstancia, resulta congruente que los numerales 2 y 3 del artículo 227 señalen que los actos de precampaña se dirigen a afiliados, simpatizantes o al electorado en general, y que la propaganda electoral busca la difusión de las propuestas de precandidaturas existentes.

Como se ha venido señalando, para obtener la calidad de precandidato(a) debe entenderse atendiendo a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato(a) a un cargo de elección popular.

Precisado lo anterior, consta en actuaciones que la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y constancia de la Convocatoria al proceso interno de selección de la candidatura a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, con el propósito de obtener información que permitiera esclarecer los hechos objeto de investigación.

Así, en primer término, consta de la revisión a la Convocatoria a los procesos internos de candidaturas para miembros de los Ayuntamientos para los procesos electorales 2020-2021 en Michoacán de Morena, la fecha de registro para participar en ella es posterior al periodo de precampaña establecido, como se muestra a continuación:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Cargo	Período de Precampaña ²¹	Periodo de registro de aspirantes	Publicación de las solicitudes de registro aprobadas	Validación y calificación de resultados
Presidente Municipal en Michoacán de Ocampo	Del sábado, 2 de enero de 2021 al domingo 31 de enero de 2021.	30 enero de 2021 al 7 de febrero de 2021.	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021

Por tanto, la autoridad instructora requirió al partido Morena para que informara el mecanismo bajo el cual **Rachid Hassan González Parra** obtuvo su registro como aspirante a Presidente Municipal de Pátzcuaro en el proceso de selección interna, en el estado de Michoacán en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Sin embargo, la respuesta del partido en comento fue el indicar que el 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo emitió la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para; diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en su caso miembros de las alcaldías y concejalías en los procesos electorales 2020-2021, así como que el partido político Morena no estableció lineamientos para la etapa de precampaña de aspirantes a los cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local: por esa razón no hubo lugar a realizar precampañas de dichos aspirantes. Que de conformidad

Así mismo que el método o procedimiento realizado para la selección de candidaturas a los diversos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Michoacán" conlleva que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sea la instancia facultada para definir las candidaturas de Morena, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en el proceso electoral aludido, con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el Estatuto del Partido, de conformidad con lo previsto en los numerales 44°, inciso w), y 46°, del Estatuto de Morena. Así mismo señalo que la Convocatoria fue debidamente publicitada en la pagina oficial de Morena en la pagina https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf . Que no realizo aportación, ingreso y/o gasto alguno con motivo del procedimiento de selección

²¹ Acuerdo INE/CG519/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el IEM-CG-46-2020 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se establecen los plazos relativos a la fiscalización del periodo de precampaña.

interna de candidatos al Proceso Electoral que se informa, por lo cual no hay pólizas de registro.

Por lo anterior y ante la necesidad de contar con los elementos necesarios, se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán informara si el partido político Morena con acreditación local ante dicho Instituto, con motivo del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad de referencia, realizó algún proceso interno de selección de sus candidaturas y, si éste fue informado o comunicado a ese Organismo Público Local, señalando específicamente lo siguiente:

“(…)

a) Con fecha 15 de noviembre al 17 de noviembre, mediante acta del Consejo Nacional del Partido Político Morena, se facultó al Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, a través de su Presidente y secretaria General, para acordar, concretar, y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes, o cualquier medio de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, con partidos políticos nacionales y locales afines a la 4 Transformación, así como para la postulación y registro de candidatos; además de acordar, convenir y establecer los términos en que morena participará en dichas coaliciones, candidaturas comunes o alianzas

b) Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que Morena como instituto político NO realizó precampaña para los cargos de elección popular a la gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

c) Convenio de Coalición signado por los Partidos Políticos del Trabajo y Morena.

(…)”

Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones la quejosa denunció la existencia de 1 lonas, 1 calendario y **1 banner de publicidad en internet**, hechos con los cuales se acreditaban actividades y/o eventos realizados por el C. **Rachid Hassad González Parra** y en particular, los gastos no reportados.

Por otro lado, la autoridad fiscalizadora procedió a agregar al expediente la razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización en el marco en el marco de la revisión de los informes de precampaña de donde se advierte el ticket

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

15399 de 10 de febrero de 2021 en el cual se hace constar que de la revisión de diversos sitios de internet de conformidad con el acuerdo CF/019/2020 se detectó la página de internet conocida como Facebook de la cual se desprende la existencia de un spot publicitario a favor de Rachid González como aspirante a Presidente Municipal de Pátzcuaro por el Partido Morena levantada el día 5 de febrero de 2021

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

Por su parte la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar Razón y Constancia de los resultados obtenidos en la dirección <https://www.acontecerdemichoacan.com/en-morena-rachid-gonzalez-se-perfila-como-el-aspirante-con-mayor-la-presidencia-municipal-de-patzcuaro/perteneciente-a-Acontecer-de-Michoacan> informar es nuestro deber, como se muestra a continuación:



De lo anterior se advierte que en la nota se da cuenta de que **Rachid Hassad González Parra** se perfila como el aspirante con mayor experiencia a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, y en cuya imagen se observa al citado ciudadano sosteniendo el documento que avala su registro a dicho cargo, en la que además se informa que competirá para ser el próximo candidato en el proceso electoral que se avecina, informando que será respetuoso de los tiempos y formas del proceso

de selección interna y que apelará por la unidad con los demás aspirantes pues el objetivo principal es asentar la Cuarta Transformación en el municipio.

Así mismo, esta autoridad realizó una búsqueda en la red social Facebook a fin de localizar indicios que ayudaran a esta autoridad a allegarse de mayores elementos a fin de esclarecer los hechos materia del procedimiento que ahora se resuelve, localizándose lo siguiente en el perfil de la persona denominada Rachid G. González Parra:



Tal y como puede observarse, se logra apreciar un banner que claramente busca posicionar la imagen del ciudadano incoado, promoviendo incluso la utilización del hashtag #EsRachid , el cual demuestra la intención del ciudadano de posicionarse utilizando colores similares a los usados por el partido MORENA.

Así mismo, dicha publicación fue realizada el día 12 de febrero del año en curso, periodo, periodo en el que los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular por parte del partido Morena aun buscaban ser candidatos de algún cargo de elección popular por el partido en mención.

También es preciso señalar que el banner localizado por esta autoridad guarda similitud con la que presento la quejosa en su escrito inicial, tal y como se muestra a continuación:



Dichos hallazgos fueron detectados por la Unidad Técnica en el despliegue de su facultad investigadora a través de la verificación efectuada durante el monitoreo en el marco de la revisión de los informes de precampaña y en la sustanciación del presente procedimiento, cuyos resultados fueron asentados en razones y constancias,

Asimismo, la autoridad fiscalizadora, el cuatro de julio de la presente anualidad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar el reporte de los gastos detectados del instituto político, así como del entonces candidato incoado, recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiéndole la falta de reporte en el referido sistema.

En razón de lo anterior, se requirió al Partido Morena y al C. **Rachid Hassad González Parra**, a efecto de que proporcionaran la documentación soporte de la cual se advirtiera el reporte en el informe de precampaña de los gastos denunciados, quienes únicamente se limitaron a manifestar que no efectuaron gasto alguno.

Por lo tanto, de la concatenación con el marco conceptual expuesto en párrafos precedentes y de los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, se obtiene que el ciudadano C. **Rachid Hassad González Parra**, se registró al proceso de selección interna de la candidatura para la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán y cuyo carácter de conformidad con la propia convocatoria y la confirmación del propio partido político MORENA (quien le permitió contender formalmente en el proceso de selección interna) es de aspirante, por los motivos expuestos se entiende le reviste el carácter de un precandidato y por tanto tenía la obligación de presentar su informe de precampaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

En conclusión, existen suficientes elementos para afirmar que de las razones y constancias se acreditan los 3 elementos para considerar que con las actividades realizadas por el C. **Rachid Hassad González Parra**, se acreditó que realizó actos de precampaña, independientemente que no haya existido un registro formal del partido político en el que se le haya denominado expresamente con tal carácter; además se advierte que el aspirante manifestó su intención de contender por la candidatura, a un cargo de elección popular incluso antes del inicio de la precampaña correspondiente.

Ahora bien, una vez que se han analizado los elementos obtenidos por la autoridad instructora durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, en el marco de los elementos mínimos que se deben considerar para precisar que un acto es de precampaña, es importante definir la conducta o conductas que se acreditan con los actos realizados por el postulante tendentes a obtener el apoyo hacia el interior del partido político Morena para convertirse en su candidato.

Precisado lo anterior, consta en actuaciones que la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y constancia de la Convocatoria al proceso interno de selección de la candidatura a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, con el propósito de obtener información que permitiera esclarecer los hechos objeto de investigación.

Así, de la revisión a las convocatorias citadas en el párrafo que antecede, se destaca lo siguiente:

No.	Documento	Transcripción
1	<p>“Convocatoria</p> <p>A los procesos internos para la selección de candidaturas para:</p> <p>Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los</p>	<p>“(...) A los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional¹; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas</p> <p>BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:</p> <p>(...)</p> <p>c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 1.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

No.	Documento	Transcripción																																	
	<p>Procesos Electorales 2020-2021”</p> <p>30 de enero de 2021</p>	<table><tr><th>Entidad federativa</th><th>Presidencias municipales/ Alcalde/sa</th><th>Diputaciones locales</th><th>Sindicaturas, Regidurías y Concejalías</th><th>Presidencias de Comunidad y Juntas Municipales</th></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>Michoacán</td><td>07-feb</td><td>21-feb</td><td>28-feb</td><td>N/A</td></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td><td>(...)</td></tr></table>	Entidad federativa	Presidencias municipales/ Alcalde/sa	Diputaciones locales	Sindicaturas, Regidurías y Concejalías	Presidencias de Comunidad y Juntas Municipales	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	Michoacán	07-feb	21-feb	28-feb	N/A	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	<p>BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.2</p> <p>La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas:</p> <p>Cuadro 2.</p> <table><tr><th>Entidad federativa</th><th>Fechas*</th></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>Michoacán</td><td>25 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 8 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 25 de marzo para miembros de los ayuntamientos</td></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr></table> <p><i>*Todas las fechas son del año 2021.</i></p> <p>Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: https://morena.si/ Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo. El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente. BASE 3. Los/as protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para alguno de los cargos materia de la presente convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos, según sean el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos:</p> <p>(...)</p> <p>2.2. Para las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos, cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la normatividad local.</p> <p>(...)</p>					Entidad federativa	Fechas*	(...)	(...)	Michoacán	25 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 8 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 25 de marzo para miembros de los ayuntamientos	(...)	(...)
Entidad federativa	Presidencias municipales/ Alcalde/sa	Diputaciones locales	Sindicaturas, Regidurías y Concejalías	Presidencias de Comunidad y Juntas Municipales																															
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)																															
Michoacán	07-feb	21-feb	28-feb	N/A																															
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)																															
Entidad federativa	Fechas*																																		
(...)	(...)																																		
Michoacán	25 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 8 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 25 de marzo para miembros de los ayuntamientos																																		
(...)	(...)																																		

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

No.	Documento	Transcripción								
		<p>Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.</p> <p>BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS</p> <p>6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44° del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁷ y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de MORENA.</p> <p>En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46° del Estatuto.</p> <p>En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.</p> <p>BASE 7. La Comisión Nacional de Elecciones ejercerá la facultad a que se refiere el inciso f. del artículo 46° del Estatuto con relación a los procesos internos respectivos, a más tardar en las siguientes fechas:</p> <p>Cuadro 3.</p> <table><tr><th>Entidad federativa</th><th>Fechas</th></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>Michoacán</td><td>26 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 9 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 26 de marzo para miembros de los ayuntamientos</td></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr></table> <p>(...)</p> <p>BASE 9. Las precampañas se llevarán a cabo conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones. En caso de que se haya agotado el periodo de precampaña conforme el calendario electoral local, no habrá lugar a llevar a cabo actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere esta convocatoria en el proceso interno respectivo. Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro podrá ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.”</p>	Entidad federativa	Fechas	(...)	(...)	Michoacán	26 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 9 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 26 de marzo para miembros de los ayuntamientos	(...)	(...)
Entidad federativa	Fechas									
(...)	(...)									
Michoacán	26 de marzo para diputaciones de Mayoría Relativa; 9 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 26 de marzo para miembros de los ayuntamientos									
(...)	(...)									
2	“AJUSTE a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN	“(…) AJUSTE								

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

No.	Documento	Transcripción																
	<p>DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS. (...) ”</p> <p>25 de marzo de 2021</p>	<p>PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para quedar como sigue: (...)</p> <p>Cuadro 2.</p> <table><tr><th>Entidad federativa</th><th>Fechas*</th></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>Michoacán</td><td>8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos</td></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr></table> <p>*Todas las fechas son del año 2021.</p> <p>SEGUNDO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria, para quedar de la siguiente manera:</p> <p>Cuadro 3.</p> <table><tr><th>Entidad federativa</th><th>Fechas</th></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr><tr><td>Michoacán</td><td>8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos</td></tr><tr><td>(...)</td><td>(...)</td></tr></table> <p>(...)”</p>	Entidad federativa	Fechas*	(...)	(...)	Michoacán	8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos	(...)	(...)	Entidad federativa	Fechas	(...)	(...)	Michoacán	8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos	(...)	(...)
Entidad federativa	Fechas*																	
(...)	(...)																	
Michoacán	8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos																	
(...)	(...)																	
Entidad federativa	Fechas																	
(...)	(...)																	
Michoacán	8 de abril para diputaciones de Mayoría Relativa; 22 de abril para diputaciones de Representación Proporcional y 8 de abril para miembros de los ayuntamientos																	
(...)	(...)																	

De los documentos anteriores, se advierte que el partido político incoado emitió una convocatoria con la finalidad de seleccionar a las personas que postularía para los cargos de elección popular en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Michoacán, de ahí tanto la convocatoria como el ajuste correspondiente prevén lo siguiente:

- Una fecha para el registro de los aspirantes (7 de febrero).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- Señalan que, de aprobarse más de un registro, los aspirantes se someterán a una encuesta y/o estudio de opinión realizada por la Comisión de Encuestas.
- Asimismo, señalan que la metodología y resultados de la encuesta se harán de conocimiento de los registros aprobados, la cual será reservada.
- Establecen la fecha en que se publicarán los resultados plazo que fue modificado una sola ocasión.
- Señala que las **precampañas** se realizarán de acuerdo con las características y tiempos que publique la Comisión Nacional de Elecciones y **para el caso de que se haya agotado el periodo de precampaña conforme al calendario local, no habrá lugar a llevar actos de precampaña**, asimismo conmina a los aspirantes a **evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de precampaña o campaña**.

En este sentido, la información obtenida por esta autoridad mediante razones y constancias constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

Por lo anterior, se requirió a Morena para que proporcionara la metodología del proceso de selección en el proceso de selección interna de **Rachid Hassad González Parra** en que se registró para el cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en Michoacán de Ocampo, el partido refirió que respecto del citado cargo hubo un único precandidato registrado, aduciendo que no fue necesario hacer actos de precampaña, por lo que no efectuó registro de aspirantes al periodo de precampaña en el SNR.

De esa manera, se tomó conocimiento que, **Rachid Hassad González Parra** se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que obtuvo la calidad de precandidato al manifestar su voluntad de participar en el proceso interno de selección referido con el único objetivo de ser postulado por el ente político como candidato al cargo de Presidente Municipal en Pátzcuaro y desarrollar diversos actos a través de los cuales buscaron difundir su imagen entre los simpatizantes y militantes del instituto político en el municipio de Pátzcuaro en el estado de Michoacán de Ocampo.

Al respecto, resulta relevante señalar que, la Unidad Técnica de Fiscalización del cúmulo de diligencias tendientes a investigar los hechos denunciados, constató que el citado ciudadano inició actos con la finalidad de posicionarse frente a militantes o

simpatizantes de Morena, así como del electorado en general, durante el mes de febrero de 2021.

Ahora bien, al revisar la temporalidad en la cual se desarrollaron los hechos denunciados, esta autoridad se percató que la fecha en la cual se le reconoció la calidad de “aspirante” se dio fuera de los tiempos procesales establecidos en la normatividad electoral, correspondiente a la precampaña debido a que, el periodo de precampaña corrió del 02 al 31 de enero de 2021; circunstancia que no puede ser atribuida al ciudadano investigado; sin embargo se evidencia, conforme al dicho del propio **Rachid Hassad González Parra** que, con fecha 14 de febrero de 2021 se registró al proceso de selección interna (conforme a las fechas indicadas en la convocatoria), no obstante de haber manifestado no haber realizado actividades con el fin de promover postulación alguna.

Por lo anterior y, de la concatenación con el marco conceptual expuesto en los párrafos anteriores y los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, se concluye que el ciudadano **Rachid Hassad González Parra**, se registró al proceso de selección interna de la candidatura para la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, y cuyo carácter de conformidad con la propia convocatoria, es de aspirante; que por los motivos expuestos previamente se entiende que se **refiere a una precandidatura**, tenía la obligación de presentar su informe de precampaña, toda vez que fue el propio partido quien le permitió contender formalmente en el proceso de selección interna.

Asimismo, se evidenció que el ciudadano incoado realizó actos cuya finalidad fue la de posicionar su imagen ante los simpatizantes y/o la militancia de Morena, en el marco de una contienda interna para el cargo a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro; actividades que fueron denunciadas y corroboradas por la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que tenía la obligación de presentar el informe de precampaña, toda vez que contrario a lo aducido por los sujetos obligados se acreditaron ingresos y/o egresos que en la presente resolución se cuantifican debido a que fueron todos erogados previo a que se designara al candidato, derivado del proceso interno de selección.

De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna. Por tanto, es evidente

que el partido Morena **tenía la obligación de registrar a su precandidato contendiente en el proceso de selección interna** a efecto que fuera sujeto a los procedimientos de fiscalización, pues sólo así es posible garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos, asimismo se advierte que dicha obligación se comparte con los precandidatos, pues estos también se encargan de informar en un primer momento al partido político y posteriormente estos a la autoridad fiscalizadora

En este tenor, no es válido suponer que, por el hecho de no haber sido registrado con la denominación específica de precandidato por el partido político, no tenga la obligación de presentar el informe correspondiente, pues la ley exige su presentación sin hacer distinción alguna.

No pasa desapercibido para esta autoridad, lo señalado por Morena y el ciudadano incoado respecto a que no realizaron precampaña para el cargo de elección popular a la presidencia municipal de Pátzcuaro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el estado Michoacán de Ocampo, y, por consiguiente, no se erogaron recursos económicos del partido político no obstante, derivado del cúmulo de diligencias de los elementos de prueba que obran en el expediente de investigación esta autoridad puede sostener lo siguiente:

- a) Morena realizó un ajuste a su Convocatoria para el proceso interno de selección para el cargo de Ayuntamiento en Michoacán.
- b) La realización de actos de proselitismo llevados a cabo por el ciudadano **Rachid Hassad González Parra**.
- c) Se detectaron egresos no reportados por parte del partido incoado y del **Rachid Hassad González Parra** a lo largo del procedimiento de mérito, gastos vinculados a actividades de proselitismo realizados considerados como de precampaña que debieron reportarse a la autoridad fiscalizadora.
- d) Se evidenció que los actos de proselitismo realizados por el ciudadano incoado tuvieron como propósito posicionar y promocionar frente a simpatizantes, militantes y al electorado en general al C. **Rachid Hassad González Parra** a efecto de obtener la candidatura al cargo de presidente municipal de Pátzcuaro, lo que se traduce en actos de precampaña, no obstante que al momento de obtener la calidad de precandidato, el periodo establecido para llevar a cabo actos de precampaña había concluido
- e) Existe la obligación a cargo de las personas incoadas de reportar las erogaciones realizadas en su precampaña y en su caso rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Es relevante señalar que el partido Morena no objetó ni impidió por ningún medio público la realización de actividades de precampaña de su precandidato, por lo tanto, el propio partido permitió la realización de manifestaciones, gastos, actos de precampaña y propaganda electoral por parte de su aspirante

Derivado de lo anterior, durante la sustanciación del procedimiento se acreditó, la realización de una serie de actos de precampaña, que necesariamente implicaron el flujo de recursos para su realización, por lo que como se ha señalado previamente, si un precandidato realiza una erogación que se considere gasto de precampaña, deberá reportarlo en el informe de precampaña correspondiente, situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, pues al no encontrarse registrado en el **SNR**, no se generó ninguna cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea y, en consecuencia, el precandidato estaba impedido para realizar reporte alguno en el Sistema Integral de Fiscalización (**SIF**).

En consecuencia, en el caso en concreto, se desprende que el partido Morena omitió registrar como precandidato al ciudadano **Rachid Hassad González Parra** que participó en el proceso de selección interna para contender al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro en el Proceso Electoral Ordinario local 2020-2021 en el estado de Michoacán, aduciendo que al no haber realizado precampaña no hubo gastos y, en su consideración, no se generó la obligación de presentar el informe de precampaña que nos ocupa.

Pues, como se expuso en párrafos precedentes, la obligación de presentar los informes de precampaña se genera, no obstante la denominación que el partido político otorgue a las personas que participan en su proceso interno de selección a cargos de elección popular. Esto es, no es óbice que el partido Morena aduzca que su aspirante nunca obtuvo el carácter de precandidato, ya que como se ha sostenido en la presente Resolución, tal calidad atiende a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.

De lo anterior se sigue que la autoridad fiscalizadora tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos. Lo anterior, aun y cuando se afirme que no se llevaron actos de precampaña toda vez que existe el deber de reportar que no hubo ingresos

y/o gastos, para lo cual es menester presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

Sobre el particular, no escapa a esta autoridad, que el ciudadano **Rachid Hassad González Parra**, en su contestación al emplazamiento, manifestó que no realizó precampaña; ni gasto alguno razón por la cual no tenía la obligación de presentar el informe de precampaña correspondiente.

De este modo, ante dicha omisión **hizo imposible que la Unidad Técnica de Fiscalización desplegara sus facultades de verificación y comprobación respecto de los recursos recibidos y erogados por los sujetos incoados**, con la finalidad de verificar que el origen, monto, destino y aplicación de los mismos se haya hecho conforme a las disposiciones normativas de la materia.

Debe recordarse que conforme al criterio de la Sala Superior²² se entiende *por no presentado el informe* una vez que se haga inviable la revisión de los informes dentro de los tiempos establecidos en la ley para el adecuado y eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad, tal y como acontece en el caso concreto.

En ese mismo sentido, al omitir informar a esta autoridad de la precandidatura en comento, el partido político impidió que se desplegaran las facultades de fiscalización, así como que se ordenaran procedimientos o la aplicación de diversos mecanismos para el control y vigilancia del origen, monto, destino y aplicación de todos los recursos con que cuentan los partidos políticos.

Así, en el caso en concreto, una vez que el sujeto incoado presentó ante el partido su solicitud para participar como precandidato, éste valoró y calificó el perfil del aspirante con base en sus atribuciones estatutarias.

Ahora bien, en este orden de ideas resulta inconcuso que, el registro por parte del aspirante generó, además de una manifestación expresa de sus intenciones de contender por un cargo de elección popular, y en consecuencia el carácter de precandidato; la obligación del partido político de llevar a cabo las acciones necesarias para registrar a su precandidatos y, en consecuencia, que este pudiera informar sobre sus ingresos y gastos, lo anterior se logra mediante el registro de los ciudadanos en el SNR, así como en el SIF, máxime que tuvo conocimiento de los actos de precampaña desplegados por su precandidato.

²² Criterio sostenido en las sentencias de los expedientes SUP-RAP-197/2016, SUP -JDC1521/2016 y la Opinión 03/2016.

En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente:

*“(...) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que **el partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el SIF.** Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, en el cual se indica textualmente: (...)*

Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad.

*De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, y **ello obedeció a un acto atribuible al partido**, como fue reconocido por la Unidad de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, al **dejar transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del precandidato en el SNR y el SIF.***
(...)”

[énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones conducentes para registrar a sus precandidatos en el SIF y en el SNR para el efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña.

Así, una vez registrado como aspirante, el partido político **debió** informar al Instituto Electoral de Michoacán, la acreditación de ello y, lo siguiente: **I.** Relación de los aspirantes o precandidatos acreditados y cargo por el que compiten; **II.** Fecha de Inicio y conclusión de actividades de precampaña; y **III.** Calendario de actividades oficiales de precampaña.

En este sentido, el Organismo Público Local estaría en posibilidades de dar al partido político la cuenta de usuario y contraseña²³ del SNR, con la finalidad de que éste llevara a cabo el registro de la información de sus precandidatos.²⁴

Esto es, que una vez que el precandidato fuera registrado por el partido político y que como tal fuera validado en el SNR, se iniciaría con la contabilidad en el SIF, toda vez que se enviaría la responsiva del usuario y contraseña de este último, así como su acceso al sistema de notificaciones electrónicas.

Lo anterior, para que el partido político estuviera en posibilidad de generar y presentar los informes de precampaña en el SIF en los cuales debía incluir **la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de sus precandidatos**, desde que éstos son registrados como tales hasta la postulación del candidato ganador correspondiente y en los casos de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta la postulación.

Aún y cuando se ostenten como aspirantes o nieguen haber tenido el carácter de precandidatos, se subrogaron a todo el procedimiento de precampaña establecido en la normatividad de la materia, adquiriendo los derechos y obligaciones que ello conlleva.

Por otro lado, no pasa desapercibido para esta autoridad que en nueve estados del país donde se emitieron Convocatorias por el partido Morena, este registro en el SNR a sus precandidatos y también presentó sus informes de ingresos y gastos de precampaña correspondientes a dichos precandidatos, por lo que, en el caso en concreto no hay razones para suponer que, siendo convocados de manera idéntica, no debiera de ocurrir de igual manera, esto es, no existe elemento alguno en las Convocatorias que permita determinar en qué entidades sí realizaría precampaña y cuales no; o en su caso, que “aspirantes” sí serían registrados en el SNR y en consecuencia en el SIF, para estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Robustece la interpretación anterior lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-74/2021, SUP-JDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, ACUMULADOS, así como los Juicios para la protección de los derechos político- electorales del

²³ Artículo 270, numeral 4 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

²⁴ Artículo 267 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

ciudadano de SUP-JDC-416/2021, Y ACUMULADOS, en los cuales razonó lo siguiente:

- Es obligación de los partidos de registrar a las y los precandidatos en el sistema en línea es determinante para que, posteriormente, la autoridad pueda requerir a los sujetos obligados de presentar su informe de gastos en el procedimiento de revisión de informes.
- El responsable directo de subir al SIF los informes de ingresos y gastos de precampaña es el partido político; por su parte, los precandidatos tienen la obligación solidaria de cumplir con esta obligación, esto es, el régimen solidario de responsabilidad conlleva al partido político a ser el puente de comunicación entre la autoridad fiscalizadora y las personas precandidatas.
- La obligación se cumple una vez que el precandidato presenta el informe ante el partido político en el plazo en el que debe hacerlo y éste a su vez a la autoridad administrativa, con el fin de no retrasar la labor de la autoridad fiscalizadora y cumplir con los tiempos previstos en la ley.
- Los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como candidata o candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidatos(as), con independencia de que obtengan del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura.
- Un precandidato o precandidata es, en términos generales, una persona que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a la ley y a la candidatura de un partido político, en el procedimiento de selección interna de precandidatura a cargos de elección popular, sin que tal calidad se limite, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular.
- Para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, resulta irrelevante si se les denomina expresamente como precandidatos, aspirantes o participantes.
- Respecto de que no existió una etapa de precampaña denominada así por el partido de acuerdo con su procedimiento interno y, por lo tanto, desde la óptica de los promoventes, no tuvieron que reportar gastos, la Sala ha precisado que la facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos; lo que implica que incluso en el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña existe el imperativo no solo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, ya que conlleva el deber de reportarle que no hubo

ingresos y/o gastos, para lo cual es menester presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

- Los aspirantes, precandidatos y candidatos son sujetos de derechos y obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña, campaña y de cualquier acción que realicen dirigida a la promoción de su postulación.
- El cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los aspirantes, precandidatos y candidatos, son responsables solidarios respecto de la presentación de sus informes y del cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización.
- En la hipótesis no concedida de que no hubo una etapa de precampañas, los aspirantes o precandidatos no se encontraban exentos de presentar el informe de precampaña, porque, aun cuando no hubiesen tenido ingresos y egresos, tenían el deber de reportar a la autoridad fiscalizadora en ceros.
- La presentación de informe hecha una vez concluido los plazos para la revisión de los Informes y su documentación comprobatoria, lo que a todas luces hacía imposible su fiscalización, se entiende por no presentado el informe una vez que se haga inviable la revisión de los informes dentro de los tiempos establecidos en la ley para el adecuado y eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad.
- La omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización

Por otro lado, teniendo en cuenta la prescripción normativa que contextualiza el caso en concreto, esta autoridad considera que no obstante las manifestaciones de Morena, en el sentido de haber tenido solo un registro y que por ello no fue necesario realizar actos de precampaña y por tanto no estaba obligado a presentar el informe de mérito, lo cierto es que, como ha quedado **evidenciado a partir del momento en el que las y los ciudadanos manifiestan su voluntad para contender y cumplen con los requisitos establecidos por el partido para postularse a un cargo de elección popular y se sujetan a un proceso de selección interna, durante el periodo de precampaña es dable considerarlos como precandidatos (as) y en consecuencia se actualiza el presupuesto previsto en la norma para la presentación de informes de precampaña.**

Derivado de ello, resulta necesario realizar las precisiones siguientes:

La obligación de los partidos políticos consiste en presentar los informes de ingresos y gastos de precampaña dentro de los plazos que la propia norma establece, es decir, a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las

precampañas (de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la LGPP).

La naturaleza de la obligación de reportar y presentar la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y gastos efectuados durante el periodo de precampaña, genera que la omisión en el cumplimiento per se no sea una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no presenta la documentación dentro de los plazos específicos, queda configurada la infracción.

Resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos, a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de certeza al ejercicio de la autoridad fiscalizadora.

En esas circunstancias, la infracción cometida debe considerarse que el partido y su precandidato no presentaron los informes a los que estaban obligados.

En efecto, la línea jurisprudencial que ha establecido la Sala Superior en los asuntos SUP-JDC152/2016, SUP-REC-103/2016 y SUP-RAP-197/2016 y su acumulado SUP-JDC-1520/2016, es enfática en establecer que la interpretación de equiparar las consecuencias jurídicas de la conducta atinente a la omisión de presentar los informes de precampañas respecto de su presentación extemporánea, requiere del ejercicio de una *hermenéutica diferenciada* y que garantice la protección del bien jurídico tutelado por la norma.

Así, la omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización.

En tanto, la presentación extemporánea de tales informes, que también constituyen una infracción a la normativa electoral, debe ser sancionada en la medida en que retarda el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

Ello, sin dejar de observar que la temporalidad en que se rinde no haga inviable la revisión de los informes dentro de los tiempos establecidos en la ley para el adecuado y eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad, una vez realizados los requerimientos necesarios que la ley permite, en garantía del derecho al debido proceso.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, permite conocer qué partidos políticos y personas aspirantes a una candidatura se ajustaron a las disposiciones relativas al ingreso y gasto en materia electoral y, en su caso, las violaciones que hubieran cometido, dotando así el Proceso Electoral de legalidad, legitimidad y equidad en la contienda, valores fundamentales del estado constitucional democrático.

Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y su administración, se concluye que el partido Morena, omitió presentar los informes de precampaña relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán del ciudadano **Rachid Hassad González Parra**.

En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta autoridad electoral concluye que existen elementos que configuran una conducta infractora de lo establecido en 79, numeral 1, inciso a) fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos, por lo que el procedimiento de mérito debe declararse **fundado** respecto de los hechos analizados en el presente apartado.

Responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados, previo a la individualización de las sanciones correspondientes.

Al respecto, se precisa que obran en autos la contestación del precandidato que participó en el proceso interno de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por Morena, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; de la cual se advierte que admite haberse registrado para participar en dicho proceso interno.

No obstante, para esta autoridad no debe pasar desapercibido el grado de responsabilidad del sujeto incoado.

Primeramente, esta autoridad debe pronunciarse de la cadena de corresponsabilidad que tienen los precandidatos y el partido político con la obligación de presentar los informes de ingresos y gastos correspondientes en el periodo de precampaña.

De la lectura a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende lo siguiente:

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;”

Podemos advertir que los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña, pues deben presentar ante el partido sus respectivos informes.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo *“DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”*, capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo *“DE LA CONTABILIDAD”* del Reglamento de Fiscalización, los partidos

políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.**
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

De lo anterior se desprende que, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; sino que ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que las y los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las y los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional

Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad en materia de fiscalización, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y precandidatos a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos; cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos, lo anterior ya que estos deben presentar en un primer momento su informe de ingresos y gastos ante el partido político, para que este tenga la información y documentación idónea para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se presenten diversas irregularidades por parte de los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante las obligaciones a las que se encuentran sujetos en materia de fiscalización, y se enfrenten a la situación de no contar con la documentación que se encuentran obligados a presentar, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del TEPJF, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la

realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Cuarta Época:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.— Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes.

Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados. —Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue la idónea, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Ahora bien, por lo que hace a la responsabilidad de los precandidatos, estos deben acreditar el cumplimiento de su obligación consistente en presentar el informe respectivo ante el órgano interno del partido por el que pretenden ser postulados, de conformidad con el artículo 229, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en caso de que esto se acredite la responsabilidad únicamente sería atribuible al partido político y no a las personas que pretenden obtener una candidatura.

Lo anterior, ha sido un criterio sostenido por el TEPJF con la emisión de la tesis LIX/2015, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

“Tesis LIX/2015

INFORMES DE PRECAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL PARTIDO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD A PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracciones I a III, de la Ley General de Partidos Políticos; 229, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 235, 238, 239, 240 y 242 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se desprende el deber de los institutos políticos de presentar informes de precampaña de los ingresos y gastos de cada uno de sus precandidatas y precandidatos a cargos de elección popular, así como su responsabilidad solidaria en el cumplimiento de esa obligación. En este orden de ideas, cuando se acredita que éstos últimos presentaron en tiempo y forma el informe de gastos de precampaña correspondiente, ante el órgano competente del partido político en el cual militan y, no obstante ello, éste omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora mediante el sistema de contabilidad en línea, o bien, lo hace de manera extemporánea, la infracción a las normas que regulan dicha obligación, es atribuible sólo al partido político y no a quien ostenta una precandidatura, al actualizarse una excluyente de responsabilidad para tales personas obligadas, al ser producto de una omisión imputable exclusivamente al instituto político.”

No obstante, es menester precisar que debe acreditarse un auténtico cumplimiento por parte del sujeto incoado, frente a la obligación de presentar informes, dado que en dicho informe se desconocen y niegan los ingresos y/o gastos efectuados de precampaña; es decir, tal como se expuso en el marco conceptual, debe acreditarse la intención auténtica del individuo de querer celebrar el acto con pleno conocimiento de las consecuencias de su realización; libre de todo engaño o simulación.

Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador concluye que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, tanto al partido político Morena como al ciudadano **Rachid Hassad González Parra**, pues no presentaron los informes de precampaña correspondientes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, como lo establece la normatividad electoral.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a individualizar la sanción correspondiente.

Individualización de la sanción y determinación de la sanción, respecto de la omisión de presentar el Informe de Ingresos y Egresos de Precampaña.

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita analizada en el presente documento, violatoria del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan y atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad que deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Federal.

De conformidad con lo antes referido, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad los criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF dentro de las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con número de expediente SUP-RAP-05/2010, SUP-RAP-74/2021 y ACUMULADOS, así como el SUP-JDC-416/2021 y ACUMULADOS.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Por tanto, se advierte que la autoridad debe considerar las circunstancias particulares del caso e individualizar la sanción, tomando en cuenta diferentes parámetros con el fin de imponer una sanción proporcional.

En este orden de ideas y atendiendo al principio de interpretación conforme²⁵, aplicar sanciones máximas implica valorar las circunstancias particulares del caso, así como las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso particular.

²⁵ La interpretación conforme es una obligación de los juzgadores, aplicable en los casos en que se esté en la presencia de una norma que resulte sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros del control de constitucional y convencionalidad.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

Por tanto, y atendiendo a una interpretación conforme, la Sala Superior tal como lo sostuvo en el SUP-RAP-74/2021 y acumulados, considera que esta autoridad electoral, tiene a su disposición el catálogo de sanciones que ofrece el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracciones I, II y III, en relación con lo dispuesto en los artículos 445, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto permite y obliga a analizar y valorar todos los elementos y circunstancias en las que se cometió la infracción, de forma que, si esta autoridad decide aplicar la sanción máxima, esto acontecerá bajo los más altos estándares de justificación y legitimación.

Aunado a lo anterior, como el Órgano Jurisdiccional ha sostenido la calificación de las faltas debe realizarse tomando en cuenta tomando las agravantes y atenuantes, esto es, no puede realizarse de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto de comisión u omisión específico suceden, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en los que se sustenta.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia salvaguardando la función fiscalizadora.

En este sentido, el régimen de responsabilidad que se establece en el sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones, precandidatos y precandidatos, obliga a este Instituto, a que frente a cada irregularidad encontrada, determine al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas por cada uno de acuerdo a las circunstancias objetivas y subjetivas que irradian en la comisión de la irregularidad y, en consecuencia, individualizar las sanciones que correspondan a cada sujeto.

Así pues, la Sala Superior sostiene que dentro de las circunstancias subjetivas debe considerarse la actitud procesal que el ciudadano muestren durante el procedimiento administrativo sancionador y valorar las oportunidades que tuvo para que, en respuesta a distintos requerimientos como son el emplazamiento, los alegatos o cualquier otro requerimiento de información, la presentación del informe omitido.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

En consideración a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, por cuestión de metodología se analizará la infracción en la que incurrieron cada uno de los sujetos obligados atendiendo las características especiales de cada uno de ellos, para el ciudadano Rachid Hassad González Parra precandidato el apartado **A**, y por lo que hace al partido Morena en el apartado **B**

A. Por lo que hace a la imposición de la sanción a la precandidatura.

El precandidato referido en el cuadro siguiente omitió presentar su informe de precampaña respectivo:

Nombre	Cargo	Estado/ Municipio/ Distrito
Rachid Hassad González Parra	Presidencia Municipal	Pátzcuaro

Visto lo anterior, derivado de la queja interpuesta en contra del sujeto incoado y después haber realizado a todas y cada una de las diligencias que se encuentran en el expediente respectivo, existen suficientes elementos para afirmar que el C. **Rachid Hassad González Parra** tuvo el carácter de precandidato a la presidencia municipal de Pátzcuaro, Michoacán, con independencia de si se le denominó expresamente con tal carácter; además se advierte que el aspirante realizó diversos actos que hicieron patente su intención de contender por la candidatura, no obstante al comparecer al procedimiento que nos ocupa sostuvo firmemente que no existieron, sin embargo, como se ha venido señalando a lo largo de la presente resolución, se acreditó la existencia de egresos no reportados consistentes en un spot publicitario, derivado de la realización de actividades y expresiones que acreditan fehacientemente y de forma inequívoca sobre su aspiración a obtener una candidatura y posicionarse frente a la ciudadanía. En tal sentido, el sujeto obligado tenía el deber y responsabilidad de informar a la autoridad fiscalizadora, resultando omiso en dar cumplimiento a la obligación de presentar su informe de gastos de precampaña.

Es importante hacer énfasis en que, tanto el partido como el precandidato eran responsables de la presentación de sus informes respectivos, y que al tener la calidad con la que se ostentó y al haber realizado actividades de precampaña, nos permite sostener que era sabedor de sus derechos y obligaciones.

En este sentido, el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las personas aspirantes, las precandidaturas y candidaturas,

como lo precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables solidarias respecto de la conducta en análisis.²⁶

Ahora bien, como se expuso en párrafos precedentes, la obligación de presentar los informes de precampaña se genera entre los partidos políticos y las personas precandidatas, pues, por ley, ambos comparten la obligación; con independencia de que obtuvieran algún tipo de registro o se les asignara la denominación de precandidaturas por parte del partido; la obligación de presentar los informes de gastos de precampaña **existía sin importar la previsión expresa de esta etapa en su convocatoria de selección; toda vez que los actos tuvieron una intención electoral en el territorio en que fue aspirante**, por lo tanto, no es válido que el partido aduzca que el aspirante no obtuvo el carácter de precandidato, ya que como se ha sostenido en la presente Resolución, tal calidad atiende a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato(a) a un cargo de elección popular.

Por lo anterior, y considerando como antecedente la resolución de la Sala Superior, recaída al expediente SUP-JDC-416/2021 y ACUMULADOS, se procede a valorar la gravedad de las irregularidades cometidas por el precandidato, considerando los aspectos siguientes:

- i. Voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral;
- ii. El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora;
- iii. La naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan;
- iv. Las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción.
- v. Si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución, valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación;
- vi. El monto económico o beneficio involucrado; y
- vii. Su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

En un segundo momento, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con

²⁶ Criterio sostenido en las sentencias de los medios de impugnación SUP-RAP-74/2021, SUP-JDC-424/2021 y SUP-JDC-425/2021, Y ACUMULADOS

el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP05/2010.

Finalmente, se analizarán de forma concatenada los elementos para individualizar la sanción. Para el efecto de graduar la sanción, se valorará, el tipo de gravedad de la violación atribuida a la precandidatura a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo; es decir, si esta fue ordinaria, especial o mayor, considerando los efectos de la gravedad en los bienes jurídicos tutelados como son la rendición de cuentas, la transparencia y la certeza en el ejercicio del gasto y la aplicación de los recursos durante el periodo de precampañas, así como en la equidad en la contienda electoral.

Es importante señalar que el análisis de proporcionalidad supone determinar si las sanciones se tratan de forma coherente, teniendo en consideración un orden o escala que garantice que los sujetos sean sancionados por faltas similares reciban sanciones de gravedad comparable y que las personas sancionadas por falta de distinta gravedad reciban sanciones acordes con la propia graduación del marco legal, así como que las sanciones que se apliquen estén en función de la gravedad de las infracciones.

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la conminación de privación o restricción de bienes del autor de la infracción, formulada para la prevención general, y determinada cualitativamente por la clase del bien jurídico tutelado y cuantitativamente por la magnitud y lesión a este.

Consecuentemente, es necesario desde la dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la necesidad y legitimidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio pasivo, de conformidad con los artículos 1º y 35, fracción II, de la Constitución Federal, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, razonables y, por tanto, proporcionales.

En este orden de ideas, resulta necesario apartarse de una interpretación de las disposiciones legales en estudio que dé como resultado una lectura desproporcionada y, en cambio, tomar una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo frente a las obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de los partidos y de los precandidatos de rendir cuentas.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Cabe señalar que estas obligaciones derivan del mandato constitucional de vigilar el origen y el destino de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos.

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando 8 de la presente Resolución, violatoria del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

i. Voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral.

Previo al análisis de la voluntad de la precandidata para la comisión de la infracción, resulta necesario destacar que en la sesión ordinaria celebrada por este Consejo General el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG519/2020, por el que se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021, del cual se desprende que los plazos para la fiscalización de mérito en el estado de Michoacán corrieron en las fechas que se detallan a continuación:

Entidad	Cargo	Periodo de precampaña		Fecha límite para entrega de los informes
		Inicio	Fin	
Michoacán	Presidente Municipal	Sábado, 02 de enero de 2021	Domingo, 31 de enero de 2021	Miércoles 03 de febrero

Conforme con el calendario de fiscalización aprobado por el Consejo General, los sujetos obligados tenían la obligación legal de presentar sus informes el tres de febrero de dos mil veintiuno, sin embargo, el partido Morena no presentó informe del precandidato incoado, siendo que derivado de la queja interpuesta en contra del ciudadano **Rachid Hassad González Parra** y del análisis de las actuaciones en el expediente, se detectaron hallazgos de actos tendientes a promover la imagen del precandidato, lo que involucro también erogación de recursos.

Por lo anterior, el día dieciocho de junio se le notificó al ciudadano **Rachid Hassad González Parra** el inicio del procedimiento sancionador de mérito, se le emplazó

con los elementos de prueba que integraban en ese momento el expediente en su contra y se le requirió información.

El veinte de junio dos mil veintiuno, el ciudadano respondió el emplazamiento y atendió el requerimiento de información, en donde señaló entre otras manifestaciones, que solicitó su registro como precandidato en el proceso interno de selección a la candidatura a Presidente Municipal del partido Morena; y que no realizó actos de precampaña, por lo que presentó al partido político su informe de gastos de precampaña en ceros.

Asimismo, el xxxx de julio se le notificó el acuerdo de alegatos, sin que a la fecha de la elaboración de la presente se haya recibido respuesta alguna, del referido ciudadano.

En este sentido, de las constancias que obran en el expediente de mérito, se advierte que aun cuando el sujeto incoado tuvo la oportunidad, en el marco de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, de transparentar su situación en relación con sus ingresos y gastos durante el periodo de precampaña, no obstante que era notorio que lo hubiera hecho fuera del plazo establecido por la normativa, se limitó a negar haber realizado actos de precampaña, y justificar mediante la entrega de un informe en ceros, que no realizó ninguna erogación, sin que de sus argumentos se advierta la voluntad de cumplir con su obligación de rendición de cuentas.

Esto es, que no hizo del conocimiento de esta autoridad los ingresos y egresos realizados en el periodo de precampaña, sino que únicamente, insistió en que no había realizado actos de precampaña.

Si se toma en cuenta que en un caso presentado por el propio partido Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el años 2016 (SUP-JDC.1521/2016), la Sala Superior había definido con claridad que acorde con la interpretación de los artículos 41, Base I, párrafo segundo; Base II, párrafos primero y penúltimo; Base IV; Base V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 2; 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g); 35; 42, numerales 2 y 6; 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso b); 192, numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos b), c) y e); 394, numeral 1, inciso n); 428, numeral 1, inciso a); 430, y 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 25, numeral 1; 59; 60; 79, y 80 de la Ley General de Partidos Políticos:

- a) **Los partidos políticos son directamente responsables en materia de fiscalización**, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen de éste es público o privado ya que tienen la obligación de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados, **por todos y cada uno de los precandidatos y candidatos, resulten o no ganadores en la contienda electiva, e incluso, cuando determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato, el método electivo ni el nombre con que se designe al precandidato y el tiempo en que se lleva su designación;**
- b) **Las personas precandidatas son obligadas solidarias con los partidos políticos o coaliciones de presentar los informes de gastos de precampaña.**
- c) La facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos.
- d) Tal deber significa que **incluso en el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña existe el imperativo no sólo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora**, ya que conlleva el deber de reportarle que no hubo ingresos y/o gastos, para lo cual es menester presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.
- e) Corresponde al partido político conforme a la normativa en materia de fiscalización, presentar el informe y comprobación atinente, ya que es el sujeto que conoce los gastos reportados.

Resulta claro que en el caso no hubo la intención de cumplir con la normativa electoral, puesto que el informe de gastos de precampaña.

En el expediente se acredita que el sujeto obligado se ostentó con calidad de precandidato y que su defensa la dirigió a señalar que no realizó precampaña y que no ordenó ni financió actos de precampaña, por lo que cumplió con su obligación al rendir su informe en ceros ante el partido político.

En este orden de ideas, queda acreditada la falta de voluntad o disponibilidad de Rachid Hassad González Parra para presentar el informe de precampaña el 03 de febrero de 2021, plazo establecido por la Legislación Electoral.

ii. El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora

Se destaca, el ciudadano **Rachid Hassad González Parra** omitió presentar su informe de precampaña por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización no contó con elementos para ejercer sus facultades de verificación y comprobación respecto de los recursos recibidos y erogados por los sujetos incoados, con la finalidad de verificar que el origen, monto, destino y aplicación de los mismos se haya hecho conforme a las disposiciones normativas de la materia.

iii. La naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan;

En este tenor, ante la acreditación de una infracción en materia de fiscalización resulta necesario analizar si en la especie se está ante una puesta en peligro o una afectación real, a lo bienes jurídicos tutelados; en el caso en concreto los principios de rendición de cuentas, transparencia en el uso de los recursos y equidad en la contienda electoral.

Al respecto, como quedó señalado en la exposición de motivos²⁷ de la aprobación de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el decreto promulgado el 10 de febrero de 2014 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se suma a la larga lista de reformas en materia político-electoral de gran calado.

Éste, a su vez, respondió a nuevas dificultades en materia de fiscalización, pero sobre todo, a las complicaciones derivadas de la heterogeneidad en el ejercicio de derechos políticos entre los ciudadanos mexicanos. Se encontró que el goce de estos derechos humanos está en función de la entidad en la que se reside; que la democratización a nivel local ha sido desigual; que, a nivel subnacional, permanecen arraigados varios enclaves autoritarios que nos impiden afirmar que la transición democrática es cosa del pasado.

Así, parte de las modificaciones realizadas en 2014 por el Constituyente Permanente, tuvieron como objetivo en materia de fiscalización, **fomentar una**

²⁷ Consultable en el link siguiente: https://www.te.gob.mx/normativa_fiscalizacion/media/files/cce051f391b43a5.pdf

mayor rendición de cuentas de los legisladores hacia sus representados; generar condiciones de equidad entre las diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales. En otras palabras, se buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un esquema institucional que asegure que todos los mexicanos, independientemente de la entidad en la que habiten, gocen de una democracia de calidad, en la que existan mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo que se estimó imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, a fin de abonar a la rendición de cuentas.

Por otro lado, se continúa señalando en dicha exposición de motivos, respecto a la finalidad de la reforma en materia de fiscalización, que la **equidad en los procesos electorales** es uno de los más grandes y añejos reclamos que han sido formulados en el sistema político de nuestro país, por lo que al hablar de equidad se hace referencia a un piso parejo para todos los actores políticos que compiten por ocupar cargos de elección popular; a comicios justos en los que se compita de uno a uno, en los que la balanza no se incline a favor de una u otra fuerza.

La fiscalización electoral conlleva un conjunto de tareas por medio de las cuales la autoridad electoral supervisa el origen y el destino de los recursos de los que hacen uso los diferentes actores u organizaciones electorales²⁸. Con esto, se persiguen dos objetivos: **(i) que los recursos que ingresan a la competencia política no provengan de fuentes prohibidas o ilícitas; (ii) constatar que se destinan, exclusivamente, a los fines previstos por la normatividad.**

Una adecuada fiscalización permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas opacas que violentan la normatividad y los principios de transparencia y rendición de cuentas que son rectores en una democracia constitucional. **La fiscalización comprende actividades preventivas, normativas, de investigación y de operación que contribuyen al resguardo de los principios ejes de las funciones electorales administrativas.**

Por lo que, para dar celeridad a la fiscalización, se realizaron modificaciones, en primer lugar, a los plazos para la presentación de los informes ante la autoridad electoral y, en segundo lugar, se prevén instrumentos que facilitan la coordinación entre los órganos electorales y los órganos de inteligencia financiera para detectar

²⁸ Instituto Federal Electoral. «El ABC de la fiscalización (a partidos políticos).» mayo de 2013. <http://www.ife.org.mx/docs/IFEv2/CNCS/CNCS-IFE-Responde/2013/05%20Mayo/abcfisc/abc.pdf>

movimientos irregulares, que puedan significar usos indebidos electorales de los recursos públicos de la administración pública federal, estatal o municipal.

En el caso en concreto, se advierte que no sólo se puso en peligro, sino que se afectó directamente la rendición y revisión de cuentas efectiva, misma que genera consecuencias reales en la contienda electoral, dotándola así de una correcta equidad entre los actores políticos e impidiendo que agentes prohibidos tengan injerencia en la vida política del país. Condición que fue uno de los pilares que dieron origen a la última reforma trascendental en materia política-electoral.

En consecuencia, la conducta desplegada por el ciudadano infractor lesionó gravemente la rendición de cuentas, transparencia en los recursos y equidad en la contienda, al omitir presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña, pues no sólo no lo presentó, sino que inclusive intentó engañar a la autoridad fiscalizadora negando la realización de actos de precampaña y presentando un informe en ceros.

Bajo este modelo de fiscalización, se considera que los precandidatos son responsables solidarios y éstos pueden ser sancionados por incumplir con las obligaciones o cargas que se les imponen, que en el caso que nos ocupa consiste en la omisión de presentación de los informes de precampaña correspondientes, ello con independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, quienes también pueden ser sujetos de sanciones por incumplir con sus obligaciones.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el SUP-JDC-1521/2016, en el que determinó que la omisión de rendir informes de **precampaña** atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización.

iv. Las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción.

Las disposiciones normativas y reglamentarias rectoras del caso se encuentran vigentes desde el año 2014 y la interpretación respecto a las que al caso interesan ha quedado determinada por la máxima autoridad jurisdiccional por lo menos, desde el año 2016. Por tal motivo, ningún sujeto obligado puede invocar desconocimiento de la normativa electoral vigente en materia de fiscalización, ni respecto a las obligaciones y consecuencias que ésta les impone y tampoco con relación al sentido de la norma. En el caso, el sujeto incoado tenía conocimiento de la obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normativa, no solo por la vigencia de la normativa, sino porque la autoridad fiscalizadora fundó en dicha

normativa los requerimientos que le formuló y la relacionó con los hallazgos encontrados.

No obstante, a pesar de ser sabedor de la obligación que impone la normativa electoral vigente respecto a la entrega de informes de precampaña, el sujeto obligado manifestó no haber realizado precampaña, y por ello presentó su informe en ceros ante el instituto político.

Al respecto debe señalarse que el ciudadano **Rachid Hassad González Parra** solicitó su registro como precandidata en el proceso interno de selección de candidatura a Presidente Municipal de Pátzcuaro; no obstante, al contestar el emplazamiento, el ciudadano negó haber realizado precampaña.

Ahora bien, como ya quedó determinado el ciudadano **Rachid Hassad González Parra** incumplió con la obligación de presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña en los plazos establecidos por la ley, en concreto no medió voluntad por parte del sujeto infractor de cumplir con la normatividad en materia de fiscalización, ya sea dentro del plazo que prevé la propia norma (3 días posteriores a la conclusión de las precampañas), circunstancia que será considerada al determinar la sanción correspondiente.

v. Si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución, valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación;

En este tenor, al momento de graduar la sanción, se debe tomar en cuenta si fue una infracción culposa, ya que no puede ser igual o cercana la sanción a la de aquél que con intención cometió la falta.

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que **Rachid Hassad González Parra**, sí conocía el resultado de su actuar, pues inclusive reconoció presentar su solicitud al proceso de selección interna como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro el catorce de febrero de dos mil veintiuno.

Continuando con la línea argumentativa, es claro que al haber obtenido el registro como precandidato el ciudadano infractor, conocía su obligación de reportar los recursos obtenidos y/o erogados con motivo de los actos proselitistas de precampaña, es decir, tenía conocimiento de su obligación.

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues al conocer previamente la obligación de entregar el informe de precampaña, resulta indubitable que el sujeto obligado omitió presentar su informe de precampaña

En conclusión, el ciudadano **Rachid Hassad González Parra** sabía que al haber manifestado su intención para obtener la candidatura al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, adquiriría obligaciones en materia electoral, en su calidad de precandidato, por lo que deliberadamente decidió no informar a la autoridad fiscalizadora los recursos empleados en su precampaña.

vi. El monto económico o beneficio involucrado.

Ahora bien, en las infracciones en materia de fiscalización resulta válido analizar el monto o beneficio involucrado, de ahí que resulte importante señalar que la autoridad fiscalizadora se allegó en el marco de la sustanciación del procedimiento de mérito, se advirtieron ingresos y gastos que debieron haber sido fiscalizados por la autoridad electoral, hallazgos de los cuales se hicieron un total de \$9,496.24 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis 24/100 M.N.)

ID	Precandidata beneficiada por la publicidad	Importe de los gastos
1	Rachid Hassad González Parra	\$9,496.24 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis 24/100 M.N.)

Los recursos que no fueron reportados por el partido ni por el precandidato infractor, debieron haber sido fiscalizados por la autoridad electoral; sin embargo, la propia conducta desplegada por el incoado impidió que la Unidad Técnica de Fiscalización tuviera certeza del flujo de recursos empleados en la precampaña del precandidato.

Es importante mencionar que el monto determinado se obtuvo a partir de *hallazgos en la investigación* de los hechos materia de la queja, es decir, durante la investigación de los posible actos ilícitos se encuentran una serie de gastos no reportados, frente a la actitud del ente obligado de engañar y evadir los alcances en la rendición de cuentas. Por ese motivo, el monto involucrado solo puede corresponder a los eventos detectados por la autoridad, sin tener la posibilidad real de determinar el monto total involucrado, sino sólo una fracción del mismo.

El monto detectado mediante las investigaciones realizadas, no puede servir de base para determinar la afectación a los bienes jurídicamente tutelados derivada de la omisión de presentar informes, toda vez que, precisamente, la omisión es la que

impide a la autoridad llevar a cabo una revisión exhaustiva del origen y destino de los recursos empleados durante esa etapa, esto es, le impide conocer y determinar la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, lesionando con ello de forma grave los principios rectores del modelo de fiscalización: transparencia, rendición de cuentas, la equidad en dicha contienda electoral, ya que, la actitud omisiva del sujeto incoado evade los alcances de la fiscalización.

El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apega a la licitud y a la legalidad. Es decir, por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida comprobación.

Por ello, es claro que la omisión de presentar el informe de gastos evita que se lleven a cabo de forma integral los alcances de la fiscalización, violando la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, así como la transparencia en la rendición de cuentas, lo cual trae aparejado un daño mayor al reflejado en el monto económico de los hallazgos detectados por la autoridad fiscalizadora a partir de los indicios aportados por el quejoso; pues desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por la ciudadanía.

La transparencia no sólo involucra a la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos independientes, quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña electoral.

Por lo anterior se puede concluir que, el sancionar sólo con base en el monto de los hallazgos encontrados, abre la puerta a que en lo sucesivo los actores políticos apuesten al engaño y a la evasión, para así omitir presentar sus informes por encontrar más benéfico solo hacerse cargo de una sanción económica, con base en los montos determinados a partir de los hallazgos que detecte la autoridad electoral, que reportar el total de sus operaciones y ser sujetos a un procedimiento de fiscalización integral.

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que la sanción tiene como fin último disuadir de la realización de la conducta, y por lo tanto tiene que ser ejemplar en relación al bien jurídico infringido.

Por ende, la omisión en que incurrió el sujeto infractor afecta gravemente la rendición de cuentas que debe regir la contienda electoral, pues impidió que se verificaran circunstancias como que los recursos públicos o privados provinieran de fuentes autorizadas, que se hubieran respetado los límites establecidos en la norma respecto a los recursos, o bien que se hubieran empleado los mecanismos previstos en la norma para la recepción o aplicación de los recursos, entre muchas cuestiones más.

En suma, el monto del beneficio no es únicamente el determinado por la autoridad respecto del hallazgo referido en párrafos anteriores, pues el beneficio obtenido por el sujeto infractor va más allá de un monto involucrado, esto es, sería soslayar que el beneficio más importante y que constituye la verdadera pretensión de los incoados es participar en una contienda electoral sin haber cumplido la totalidad de requisitos legales para ello, en detrimento de la equidad de la contienda, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que resulta de suma importancia, imponer la sanción que corresponda para inhibir conductas como la que nos ocupan y cumplir con la función inhibitoria de la potestad sancionadora de este Instituto.

vii. Su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

Al resolver el juicio identificado con la clave SUP-JDC-1521/2016, la Sala Superior ha sostenido como mandatos constitucionales derivados de lo previsto en los artículos 41, Base I, párrafo segundo; Base II, párrafos primero y penúltimo; Base IV; Base V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas a la Ley Fundamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, los siguientes:

- El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo al que compete la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos tanto para los Procesos Electorales Federales como locales.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- La ley desarrollará las atribuciones del Consejo General para la fiscalización, así como la definición de los órganos técnicos responsables de llevar a cabo las revisiones e instruir los procedimientos respectivos.
- Por tanto, la atribución de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos tanto estatales como nacionales, sólo compete al Instituto Nacional Electoral, por lo que al tratarse de un régimen nacional debe aplicar la Ley General que rige el nuevo sistema de fiscalización, a saber: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Asimismo, de lo dispuesto por el invocado artículo 41 constitucional también se desprende que en la ley se ordenarán procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y en ella se establecerán las consecuencias y sanciones a imponer por el incumplimiento a esas disposiciones, señalando que esta última previsión es una medida eficaz que contribuye a que el Instituto Nacional Electoral pueda ejercer adecuadamente su atribución constitucional de supervisar lo concerniente al origen y destino de los recursos de los partidos políticos, permitiendo que desarrolle apropiadamente su labor de fiscalización.

Ahora bien, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deben presentar informes de precampaña, señalando que los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de tales informes.

En correlación con la disposición legal invocada, el artículo 223, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral reitera que los partidos políticos son responsables, entre otras cuestiones, de presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus precandidatos y candidatos; respetar el tope de gastos de precampaña y campaña; así como presentar la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.

En efecto, de los preceptos invocados, se colige que los partidos políticos son directamente responsables en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen de los primeros es público o privado ya que tienen la obligación de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados, por todos y cada uno de los precandidatos y candidatos, resulten o no ganadores en la contienda electiva, e incluso, cuando determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato, el método

electivo ni el nombre con que se designe al precandidato y el tiempo en que se lleva su designación.

En esa línea, el numeral 9, del citado precepto reglamentario prevé que los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos son responsables de reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña ejercidos, los recursos recibidos y destinados a su precampaña o campaña; así como entregar la documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido o coalición.

De lo anterior, se advierte que la **facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo**, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos.

Así, tal como lo ha sostenido la autoridad jurisdiccional, la omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización, a diferencia de la presentación extemporánea de tales informes, que también constituye una infracción a la normativa electoral, sin embargo, ésta sólo tiene como efecto retardar el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

De ese modo, al omitir cumplir con su obligación de presentación del informe de precampañas, el ciudadano **Rachid Hassad González Parra** afectó de forma grave el actual modelo de fiscalización y, en consecuencia, la rendición de cuentas que debieron regir su actuar como precandidato al cargo de Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo.

Así, una vez que han quedado analizados los aspectos referidos por el órgano jurisdiccional, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, de conformidad con lo siguiente:

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, la falta corresponde a una **omisión**²⁹ de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: Rachid Hassad González Parra omitió presentar el informe del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al precandidato surgió derivado de la presentación del escrito de queja de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual denuncian hechos que consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del periodo de precampaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

²⁹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Acorde con las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos³⁰ y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.³¹

La conducta infractora actualiza una falta sustantiva se presenta un **daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados y al modelo de fiscalización**, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, **se vulnera sustancialmente la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y a la equidad en la contienda electoral**, porque la omisión impidió que la autoridad desplegara sus atribuciones fiscalizadoras, restando eficacia a los alcances de la auditoría, con lo cual se afecta gravemente el sistema de fiscalización.

En efecto, en el artículo 40 de la Constitución se encuentra establecido el principio democrático, como principio de legitimidad del sistema, esto es, como el núcleo de comprensión de la propia Constitución y como directriz del ordenamiento en su conjunto.

Este principio se proyecta en su dimensión material (derechos humanos) y en su dimensión estructural (división de poderes, estructura y atribuciones de éstos y elección de órganos representativos y de gobierno), sin que ambas dimensiones puedan disociarse, dado que el principio democrático opera como principio de legitimación del Estado y del Derecho.

Por la naturaleza intrínseca que el Poder Constituyente concedió al principio democrático, su eficacia interpretativa irradia a todo el ordenamiento, pues dicho principio funge como núcleo armonizador de la unidad sistémica.

³⁰ "Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas; (...)."

³¹ "Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas. (...) 6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de: a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición. (...)."

En el **sistema electoral mexicano**, las elecciones tienen como **eje rector la transparencia**, lo que supone el cumplimiento de diversos supuestos que hacen posible que el resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores han decidido. La transparencia de los resultados no es consecuencia de un solo suceso, sino de una secuencia de actos que tendrán como resultado la generación de confianza en la sociedad, que abarca desde los actos de organización electoral hasta la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, que informan a la ciudadanía, con la intermediación de la autoridad electoral, la manera como utilizan sus recursos para acceder a una candidatura y, eventualmente, al ejercicio de un cargo público.

Desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. La transparencia no sólo involucra a la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus precandidatos y candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos independientes, **quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña electoral.**

Es decir, en el sistema electoral, la transparencia tiene dos posibles efectos: visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos y candidatos- y, a su vez, generar información socialmente útil, que permite que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los partidos y candidatos, tanto para su operación ordinaria, como aquéllos que aplican para los procesos internos de selección, obtención de apoyo ciudadano o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral.

Constitucionalmente se han fijado una serie de principios que rigen la materia electoral para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados en el ámbito electoral. De este modo, el artículo 41 de la Constitución Federal establece principios rectores que permiten el equilibrio del sistema, al favorecer la autenticidad de las elecciones, la igualdad de condiciones entre los contendientes, la transparencia en el uso de recursos y la operación de medios de control y vigilancia para el ejercicio del gasto, entre los que se encuentran los siguientes:

1. **Equidad de medios materiales.** De acuerdo con este principio, la ley garantizará que los partidos cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas a que se sujeta el financiamiento público y el que destinen a las campañas electorales.
2. **Prevalencia del recurso público.** Acorde con este principio, la ley debe fijar las reglas del financiamiento de los partidos y de sus campañas, de modo que el financiamiento público tenga preeminencia sobre el privado.
3. **Suficiencia de recursos para el cumplimiento de fines.** Conforme con este principio, el financiamiento público que reciban los partidos políticos en términos de ley, debe ser suficiente para el sostenimiento de sus actividades permanentes y aquellas que desplieguen para obtener el voto ciudadano
4. **Medidas de austeridad para el ejercicio del gasto.** Este principio se refiere a que los gastos que realicen quienes participan en una contienda electoral (en procesos internos de selección, periodos de obtención de apoyo ciudadano y de campañas electorales) deben ser racionales y sujeto al escrutinio público e institucional.
5. **Medios efectivos de control y vigilancia.** Conforme a este principio, el sistema de fiscalización electoral cuenta con los mecanismos de control y vigilancia a que se someten los sujetos obligados a la comprobación del origen, uso y destino de sus recursos.
6. **Potestad fiscalizadora del Consejo General del INE.** Acorde con este principio, el órgano máximo de dirección tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y candidatos, así como de sus campañas, por lo que se puede valer de órganos técnicos para realizar esta función e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones, trascendiendo, para ello, los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contando con el apoyo de las autoridades federales y locales.

A partir de estos principios, legalmente se han establecido las reglas tendentes a garantizar la transparencia y publicidad de los recursos utilizados en el ámbito electoral, entre las que se encuentran:

- **Prohibición de aportaciones finalistas**, se refiere a que se proscribe que determinados sujetos realicen aportaciones, para evitar que sean entregadas a condición de que se cumpla con una tarea u objetivo ulterior.

- **Existencia de controles internos eficientes**, o sea, de mecanismos que den garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables. Por lo que hay un órgano del sujeto obligado encargado de la administración de los recursos, que tendrá como parte de sus obligaciones presentar informes de ingresos y egresos, y
- **Existencia de controles institucionales que garanticen la transparencia de los recursos y su debida comprobación**, se refiere a que, para la vigilancia del manejo de los recursos, existe una Comisión de Fiscalización, de carácter permanente, encargada de vigilar las finanzas de los sujetos obligados y de revisar los informes de gastos que presenten, con auxilio de un órgano técnico.
- **La conjugación de estos principios y reglas hace posible el funcionamiento del sistema de fiscalización**, pues permite que la autoridad fiscalizadora cuente con atribuciones suficientes para llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia; que los sujetos obligados (partidos políticos, precandidatas/os, candidatos/as, así como aspirantes a una candidatura independiente) **transparenten y rindan cuentas, y que la ciudadanía conozca, de primera mano, el modo en que dichos sujetos emplean los recursos con que cuentan, lo que al final no sólo genera un efecto informativo positivo, sino que permite que el electorado emita un voto libre y razonado**, derivado del cúmulo de información que recibe de modo previo a que acuda a las urnas y vote en favor de una opción determinada.

Reglas previstas para el procedimiento de fiscalización

El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apega a la licitud y a la legalidad.

Por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida comprobación.

Este procedimiento se desahoga en varias etapas. Para el caso en estudio cabe destacar la presentación de los informes.

De acuerdo al artículo 431, numeral 3 de la LGIPE el procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

Una de esas reglas está relacionada con el deber de generar y conservar los documentos en los que se sustenta cada una de las operaciones de ingresos y egresos que realizan durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano y campañas electorales, con independencia de que, por regla, esos elementos de respaldo se tengan que registrar en el SIF.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la LGPP, la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

En términos de lo estipulado en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III y V, de la LGPP, los partidos políticos deberán presentar **informes de precampaña** en los plazos establecidos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. El artículo 80 de la LGPP establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos respecto de los informes de precampaña.

Naturaleza y objeto de los informes.

Los informes constituyen el acto jurídico que da inicio al procedimiento de auditoría de los mismos, indispensable para concluir el procedimiento de fiscalización. La presentación de los informes por parte de los sujetos obligados (partidos políticos, aspirantes a candidaturas independientes, candidatos/as independientes, precandidatas/os y candidatas/os de partidos políticos) **no solo tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que se emplean, su finalidad también es garantizar**

el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, así como dar continuidad a las subsiguientes etapas del procedimiento de fiscalización, pues en dicho acto se concentra la información contable que revisará la autoridad fiscalizadora, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización durante los procesos electorales.

Como se señaló, el procedimiento de fiscalización es el conjunto sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto Nacional Electoral (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados (partidos políticos, nacionales y locales, coaliciones, precandidatos/as, aspirantes a candidatos independientes, candidatos/as) y los sujetos indirectamente responsables, (diversos proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados).

Su finalidad es generar certeza y seguridad a la ciudadanía respecto del origen y aplicación de los recursos que ejercen los sujetos obligados para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal, así como permitir a la autoridad fiscalizadora dilucidar si en la contienda electoral se observaron los principios de equidad en la aplicación de los recursos económicos por parte de los actores políticos y el de la licitud en origen y aplicación de los recursos.

Acorde con lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la LGPP, se pueden distinguir dos tipos de procedimientos en materia de fiscalización, a saber:

A. El procedimiento que tiene por objeto verificar el origen y aplicación de los recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del financiamiento para actividades ordinarias y específicas.

B. El procedimiento que tiene por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos obligados en el contexto de las diversas etapas del Proceso Electoral.

La fiscalización de los recursos aplicados por los sujetos obligados al llevar a cabo los actos vinculados con las precampañas, etapa de obtención de apoyo el ciudadano y campañas electorales (B) **tiene por objeto que se verifique en tiempo real, de manera integral y consolidada, los ingresos, públicos y privados, así como los gastos que ejercen los sujetos obligados durante los**

respectivos comicios electorales. Lo anterior, a efecto de lograr una revisión eficaz, oportuna y útil, que contribuya a tutelar los principios de transparencia y rendición de cuentas y, en particular en el caso de la revisión de los ingresos y gastos ejercidos durante **precampaña**, obtención de apoyo ciudadano y campañas, con la sustanciación y resolución de tales procedimientos se pretende hacer vigente del principio de equidad e igualdad en los procesos electorales, al tiempo de dar funcionalidad al sistema de nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI, de la CPEUM, dado a que a partir de la reforma político-electoral de 2014 se establece como causa constitucional que impide el reconocer la validez a determinada elección, el rebase del límite del gasto de campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello se acredite de manera objetiva, material y sea determinante.

Obligaciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos en materia de fiscalización.

Los mecanismos de fiscalización avalan la legitimidad del proceso democrático representativo, ya que a través de estos se asegura que los contendientes actúen conforme a reglas preestablecidas, con medios económicos que garantizarán la equidad de la contienda.

Asimismo, garantizan la libertad de sufragio y de los derechos político-electorales, al momento que evitan que los partidos y las personas que aspiren a un cargo de elección popular cedan ante presiones o intereses particulares que pongan en riesgo la voluntad del elector, haciendo de una oferta política una máscara de actos ilegales o de intereses particulares ajenos a la contienda electoral.

La fiscalización, como medio institucional, verifica que los recursos utilizados tengan un origen lícito, que esos recursos sean utilizados sólo para solventar actividades que reflejen un fin electoral o partidista, y da certeza respecto a que todos los contendientes que buscan acceder a un cargo de elección popular tengan las condiciones mínimas necesarias para competir en circunstancias igualmente ventajosas, sin que exista la posibilidad de que alguno de ellos tenga un capital político superior sustentado en la ilicitud.

Por esta razón, de acuerdo con la normativa electoral federal, las y los aspirantes a una candidatura independiente, los partidos políticos, sus precandidatos/as y candidatos/as, así como las y los candidatos por la vía independiente, tienen el deber de presentar los respectivos informes (de ejercicio ordinario, de apoyo ciudadano, de precampaña y campaña) en los cuales rindan cuentas de manera clara y transparente

de los ingresos obtenidos y egresos realizados, con la finalidad de que la autoridad esté en aptitud de revisar que los ingresos y egresos reportados efectivamente se apegan a la ley y a lo informado.

La presentación de dichos informes tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que rigen los sistemas democráticos, así como garantizar el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado.

Las reglas y procedimientos para la presentación y revisión de los informes de permiten la comprobación de los ingresos y egresos generados por quienes aspiran a obtener un cargo de elección popular, que debe ser fortalecida por reglas que, hagan posible la eficacia comprobatoria de los ingresos y egresos derivados de su aspiración.

Consecuencia del incumplimiento de la obligación de presentar informes de ingresos y egresos por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la LGIPE, es obligación de los sujetos obligados presentar ante la autoridad los informes de ingresos y gastos. La legislación regula las consecuencias que derivan del incumplimiento de esta obligación.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, párrafo 3, de la LGIPE, si un precandidato/a incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo legalmente establecido y hubiera obtenido la mayoría de votos en el proceso de selección interna de su partido, no podrá ser registrada/o legalmente como candidata/o, mientras que los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de la propia ley.

Finalmente, de acuerdo con los artículos 445, inciso d) y 446 inciso g) de la LGIPE, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la omisión de presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano, gastos de precampaña o campaña.

Como se puede apreciar, son dos las consecuencias previstas en la normativa, para el incumplimiento de la obligación de presentar los informes. La primera está relacionada con el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (derecho a ser votado) y la

segunda con la infracción por la conducta omisiva, que atenta contra los principios y bienes jurídicos tutelados en el procedimiento de fiscalización.

A partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 35, fracciones I y II; 41, párrafo segundo, Bases I, II, III y IV, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos j), y k), en relación con el 36, fracción III; 39; 40; 54; 56; 115, primer párrafo, Bases I y VIII; 122, apartado A, Bases II, III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior ha estimado válidas y razonables las disposiciones legales que prevén dichas consecuencias. Parte de la base de que el derecho político electoral de voto pasivo no es absoluto, por lo que está sujeto a diversos límites y restricciones establecidos en la propia Norma Fundamental o en las leyes generales de la materia.

Bajo esas premisas, el citado órgano jurisdiccional ha estimado válido y razonable que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular observen, entre otras normas, las que regulan las obligaciones en materia de fiscalización de los ingresos y gastos, porque de esta manera se hacen vigentes y efectivos los principios rectores de las elecciones, entre otros, la certeza, seguridad jurídica, transparencia y equidad en el origen y aplicación de los recursos económicos y, en consecuencia, ha considerado que lo previsto en los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la LGIPE, constituye un requisito razonable y necesario para obtener el registro como candidato/a un cargo de elección popular (federal o local) el que se presenten, en tiempo y forma, ante la autoridad administrativa electoral nacional, los respectivos informes de ingresos y gastos ejercidos durante las precampañas o en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, respectivamente, los cuales además deben permitir a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general dilucidar con certeza la aplicación de esos recursos, así como determinar si se observaron los límites de gastos en esa etapas de la elección.

En ese orden de ideas, esta autoridad reitera que aun cuando el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos (a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de fiscalización y a los precandidatos como sujetos obligados solidarios) lo cierto es que la responsabilidad es correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido, tan es así, que la propia legislación estipula una consecuencia jurídica directa para el precandidato, cuando incumple con sus obligaciones, así como las sanciones que ambos pueden soportar por realizar conductas infractoras.

Conforme con lo anterior, es claro que la conducta infractora trasgrede valores, principio y reglas de gran relevancia en el sistema electoral, porque la omisión en la presentación de los informes trastoca directamente el sistema de fiscalización y, por ende, los principio, reglas y controles establecidos para la concreción del principio democrático.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, así como la transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por el precandidato incoado.

En ese sentido, en el presente caso la conducta acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una falta de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los precandidatos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta materia de estudio.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica del sujeto obligado para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad con el fin de allegarse del mayor número de elementos que le dieran certeza respecto a que en efecto el C. Rachid Hassad González Parra, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir, en su caso, con la sanción que se le imponga, mediante oficio INE/UTF/DAOR/2086/2021 se solicitó el Servicio de Administración Tributaria, la actividad empresarial registrada, así como las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020.

En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria a través del oficio número 103-05-2021-0796, recibido el 18 de junio de 2021, remitió las declaraciones anuales de los años 2018 y 2019 presentados por el sujeto obligado, informando lo siguiente:

AÑO	INGRESOS
2018	\$ 407,656
2019	\$ 399,686

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por el Servicio de Administración Tributaria son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el sujeto obligado referido tiene la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de sus actividades, pues aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Finalmente, una vez realizado el análisis de los elementos para individualizar la sanción, lo procedente es realizar la calificación de la falta al tenor de las consideraciones siguientes:

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL.

A) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar el informe de precampaña respectivo, conducta desplegada con dolo directo.
- Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, del presente considerando en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral correspondiente.
- Que se acreditó la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Rachid Hassad González Parra para presentar ante esta autoridad el informe de precampaña dentro del plazo establecido por la Legislación Electoral.
- Que el momento en que se presentó el informe de ingresos y gastos de precampaña al Partido Morena no fue adecuado y eficaz para el cumplimiento de la facultad fiscalizadora de esta autoridad.
- Que se trató de una conducta culposa en la conducta cometida por el sujeto obligado.
- El sujeto obligado siempre negó haber realizado precampaña.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que se cumple, se procede a individualizar la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, valorando las circunstancias del caso con base en la perspectiva de derechos humanos y la finalidad punitiva de dicha sanción.

Los supuestos normativos previstos en el artículo citado se detallan a continuación:

“(…)

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y

III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en

*contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.
(...)"*

Al respecto, dado que una de las sanciones precisadas - la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato- constituye una limitación del derecho humano fundamental a ser votado, previamente a la determinación de sancionar a imponer a Rachid Hassad González Parra, resulta necesario que esta autoridad realice un ejercicio de ponderación entre el derecho humano en comento y los bienes jurídicos afectados con su conducta desplegada.

Una vez precisado lo anterior, es de resaltarse que el Estado mexicano a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, entró en un cambio de paradigma sobre la conceptualización de los derechos humanos –fundamentales-, las reglas, y los principios que inherentemente giran en torno a ellos, como lo es, el de dignidad humana, lo anterior obligó a realizar desde una perspectiva filosófica la diferencia entre los grados de satisfacción de los derechos, libertades, reglas, principios y valores, reconocidos a nivel constitucional y también convencional.

Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano según ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existen derechos humanos absolutos, esto es, todo derecho humano puede ser restringido de manera justificada y proporcional, de ahí que se estima que los derechos humanos pueden ser considerados como relativos u optimizables, lo cual se realiza a través de un ejercicio de ponderación.

Resulta aplicable, el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 1a. CCXV/2013 (10a.), que a la letra establece:

“DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos

en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).

Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.”

Así, para saber si en el caso en concreto se reúnen los requisitos para restringir válidamente el derecho a ser votado de Rachid Hassad González Parra, resulta importante tomar en consideración lo siguiente:

El derecho al voto, es una precondition de la democracia, ya que no podría haber elecciones sin su existencia. Esta facultad se puede ejercer mediante dos modalidades: el voto activo y el pasivo. La primera implica el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes; la segunda, el de ser electo.³²

En el orden jurídico mexicano, este derecho se encuentra previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como un derecho del ciudadano el “poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Ahora bien, el derecho a ser votado no solo es un derecho subjetivo de los ciudadanos, sino que confiere una calidad de obligados a las personas titulares de tal prerrogativa; al igual que las obligaciones a que alude el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no son solamente facultades, sino deberes. **En este sentido debemos atender que el derecho al voto se reconoce para su goce y al mismo tiempo para cumplir deberes que conlleva.**

En este caso el derecho a ser votado, se refiere al derecho de cualquier persona ciudadana a participar como candidata a algún puesto de elección popular; cuyo deber contraído al ejercer dicho derecho es el **satisfacer los requisitos y apegarse**

³² Figueroa Salmoral, Gabriela (2014). *Tutela del derecho a ser votado* en los mecanismos de representación proporcional. Temas selectos de Derecho Electoral No. 41. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pág 19

a los supuestos normativos que se establecen en la Constitución y las Leyes reglamentarias.

Respecto a las sanciones, debe señalarse que por su propia naturaleza implican la privación o restricción de un bien o derecho que pertenece a la persona responsable de la infracción, la cual se encuentra justificada por la finalidad que éstas persiguen: la protección del ordenamiento jurídico (intangibilidad y coercitividad del Derecho) para lograr los fines previstos en las normas y la protección de los bienes jurídicos que tutelan.

El régimen sancionador previsto en la materia electoral supone un orden eficaz para garantizar que los sujetos responsables de las infracciones reciban sanciones acordes a la gravedad de la conducta infractora, en la medida que la conminación o restricción de los derechos o bienes del sujeto infractor se corresponda con la magnitud de la lesión a los bienes jurídicamente tutelados. Por ello, los principios de razonabilidad y proporcionalidad implican que al aplicarse a cada caso concreto una sanción debe procederse de forma previa a realizar un escrutinio o test mediante el cual se busque establecer que los resultados producidos sean acordes a las finalidades constitucionalmente legítimas para las cuales están establecidas las normas y las sanciones. Esto es, que las sanciones sean adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin perseguido, que tengan las consecuencias suficientes para lograr la finalidad perseguida por la sanción de forma tal que no resulten una carga desmedida o injustificada, pero tampoco que resulte insuficiente para inhibir conductas que lesionen los bienes jurídicos tutelados.

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor la sanción ponderando las circunstancias particulares del caso, así como la afectación del bien o bienes jurídicos protegidos, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para alcanzar los fines previstos por las normas y la protección de los bienes jurídicos que tutelan.

Precisado lo anterior, debe recordarse que 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación sustancial para los partidos políticos y precandidatos de presentar los informes de precampaña respecto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de los procesos internos de selección de sus candidatos, de manera individual por cada uno de los precandidatos y para cada precandidatura, para lo cual, deberán de acompañar la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Como antes se analizó, la no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación del recurso, así como la transparencia en la rendición de cuentas, ya que impide que la autoridad fiscalice los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y precandidatos en la competencia interna para designación de sus candidatos a un cargo de elección popular. Así es necesario que los informes de ingresos y gastos de precampaña se presenten en los plazos establecidos por la ley con el fin de que la autoridad pueda llevar a cabo sus funciones de fiscalización.

Esta función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación. Sus principales objetivos son los de asegurar: a) la transparencia y rendición de cuentas, como principios que permiten visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos, personas precandidatas y candidatas– y, a su vez, generar información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los referidos sujetos, tanto para su operación ordinaria, como aquellos que aplican para los procesos internos de selección o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral, y b) la equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos y demás sujetos obligados para la realización de sus fines. Por ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio que legitima y fortalece la competencia democrática en el sistema de partidos³³

En el modelo actual de fiscalización los precandidatos son responsables solidarios y pueden ser sancionados por incumplir con las obligaciones o cargas que se les imponen –en este caso por la falta de presentación de los informes de precampaña– con independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, a quienes también se les puede sancionar por incumplir con sus obligaciones.

³³ Woldenberg, José (2002), La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, pág. 337

Precisado lo anterior, se procede a verificar si en la especie se cumplen con los requisitos necesarios para restringir el derecho a ser votado, de conformidad con los incisos siguientes:

A) Se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales).

Al respecto, como ya quedó precisado en los artículos 229 numeral 3 y la citada fracción III del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral, es la autoridad competente para determinar que ante la omisión de presentar el Informe de precampaña es dable sancionar a los precandidatos con la pérdida o cancelación del registro a ser candidato, esto es, a ser votado.

La anterior, previsión legal tienen como sustento que se lleve a cabo una adecuada fiscalización en materia electoral, lo cual permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad, así se acredita un interés general superior al de un solo ciudadano.

En consecuencia, en el caso en concreto el primer requisito ha quedado acreditado, es decir, existe una previsión normativa que prevé restringir el derecho a ser votado en aras de proteger la equidad en la contienda electoral como interés superior de la sociedad mexicana.

B) Que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática.

Del marco legal en materia de fiscalización y de manera particular de la obligación de presentar los informes de precampaña y las consecuencias jurídicas en caso de no presentarlos en los plazos establecidos, se advierte que el legislador buscó proteger bienes jurídicos de la mayor relevancia como son la facultad fiscalizadora de la autoridad administrativa, para la salvaguarda del interés general de dotar todo el Proceso Electoral de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, para con ello brindar de una adecuada equidad la vida democrática mexicana.

En esa medida, lo procedente ahora es realizar el ejercicio de ponderación respecto a la sanción prevista en la fracción III del citado precepto legal, porque dicha

sanción implica una limitación al derecho de ser votado, por lo que debe revisarse si resulta acorde a la gravedad de la conducta infractora, y si se corresponde con la magnitud de la lesión a los bienes jurídicamente tutelados, entendiendo por ponderación el método interpretativo para la solución de conflictos entre derechos (principios o reglas), que operan como mandatos de optimización, es decir aquellos que son concebidos como relativos o cuya realización no protege en toda su extensión a un supuesto de hecho, por lo que admiten restricciones siempre y cuando estas superen el tamiz constitucional, persiguiendo un fin de esanaturaleza.

Robert Alexy³⁴, en su obra *Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad*³⁵, refiere que la “Ley de ponderación”, dicta “Como alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia de la realización del otro”, continúa señalando que la ley de ponderación expresa que optimizar en relación con un principio colisionante no consiste en otra cosa que ponderar. La ley de ponderación muestra que ésta puede descomponerse en tres pasos. En el primero debe constatar el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio. A él debe seguir en un segundo paso la comprobación de la importancia de la realización del principio contrario. En un tercer paso finalmente debe averiguarse si la importancia de la realización del principio contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del otro.

En razón de lo anterior, se aprecia una colisión entre la omisión de presentar el informe de precampaña por parte de Rachid Hassad González Parra y la posible imposición de la sanción de pérdida o cancelación del registro del mismo como candidato a Presidente Municipal del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, pues con ello se restringiría el derecho humano del ciudadano a ser votado.

Sobre el particular es necesario mencionar que el C. Rachid Hassad González Parra al contestar la demanda manifestó a esta autoridad lo que en seguida se transcribe para su pronta referencia:

Primer escrito

“(…)

³⁴ Alexy, Robert. “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad.” En *El canon neoconstitucional*, pp. 106-116. Trotta, 2010.

³⁵ Originalmente publicado como “*Grundrechte, Abwägung und Rationalität*”.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH**

Que por medio del presente recurso, vengo a dar respuesta a su oficio de merito mediante el cual solicita lo siguiente:

(...)

1. *Por lo que ve al primero de los puntos, se señala que el método de selección interna, según la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 emitida el 30 de enero de 2021, presuntamente se realizó de la siguiente forma:*

BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:

a) *Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, el registro para efectos de la presente convocatoria será en línea.*

b) *El registro en línea se hará a través de la página de internet:*

<https://registrocandidatos.Morena.app>

c) *El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 1²*

BASE 2. *La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.*

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas:

Cuadro 2

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: <https://morena.si/>

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.

El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente.

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. *Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible táctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o del artículo 44° del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁷ y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de MORENA.*

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercerla competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46° del Estatuto.

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

CABE SEÑALAR QUE ESO SEÑALA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE: SIN EMBARGO. EL SUSCRITO DESCONOCE SI EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ DE ESA FORMA. EN VIRTUD DE QUE NUNCA FUI NOTIFICADO SI SE APROBÓ EL REGISTRO RESPECTIVO NI SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DE MORENA.SI QUIÉNES OBTUVIERON REGISTRADOS.

2. Por lo que ve al segundo de los puntos solicitados, se desconoce por no ser información a la que el suscrito tenga acceso.

3. Por lo que se refiere al tercero de los puntos, se desconoce por no ser información a la que el suscrito tenga acceso.

Cabe señalar que el periodo de precampaña conforme al calendario electoral del Instituto Electoral de Michoacán concluyó el 31 de enero de 2021, por lo que no se realizaron actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere la Convocatoria referida, puesto que la misma fue publicada un día antes.

4. Por lo que ve al cuarto punto, se señala que el suscrito realicé mi solicitud de registro al cargo de candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán el 07 de febrero de 2021.

Sin embargo, desconozco si fue aprobado mi registro y si participé como aspirante a dicho cargo, en virtud de que nunca fui notificado ni se publicaron los registros aprobados en la página de morena.si de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria.

5. En cuanto al quinto de los puntos, se hace mención que toda vez que el periodo de precampaña conforme al calendario electoral concluyó el 31 de enero de 2021, no se realizaron actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere la Convocatoria referida, y por tanto, no se actualizó la obligación de rendir el informe de ingresos y gastos de precampaña ante esa autoridad fiscalizadora.

6. Por lo que se refiere al punto número 6, hago de su conocimiento que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto.

7. Por lo que se refiere al punto número 7, hago de su conocimiento que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto.

8. Por lo que ve al último de los puntos, es necesario precisar que, si bien el suscrito solicité mi registro como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, lo cierto es que, nunca fui notificado ni se publicó la lista de los aspirantes registrados en la página de morena.si, por lo que desconozco si fui aprobado y si participé en el proceso de selección interna respectivo. Aunado a lo anterior, el que suscribe, no realicé actos de precampaña ni erogué gastos, pues por principio de cuentas la convocatoria se emitió un día antes al de terminación del periodo de precampaña, de conformidad con el calendario electoral emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, como ya se señaló anteriormente.

(...)”

Segunda Respuesta

“(...)”

Al respecto, se señala que el método de selección interna, según la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 emitida el 30 de enero de 2021, presuntamente se realizó de la siguiente forma:

BASE 1. *El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:*

a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, el registro para efectos de la presente convocatoria será en línea

b) El registro en línea se hará a través de la página de internet: <https://registrocandidatos.morena.app>

c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 12.

BASE 2. *La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.*

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas:

Cuadro 2

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: <https://morena.si>

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.

El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación eje/ registro de la precandidatura correspondiente.

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANO/DA TURAS

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. *Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o del artículo 44° del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 7 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de MORENA*

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46° del Estatuto.

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

CABE SEÑALAR QUE ESO SEÑALA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE; SIN EMBARGO, EL SUSCRITO DESCONOCE SI EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ DE ESA FORMA, EN VIRTUD DE QUE NUNCA FUI NOTIFICADO SI SE APROBÓ EL REGISTRO RESPECTIVO NI SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DE MORENA.SI QUIÉNES OBTUVIERON EL REGISTRO

CABE SEÑALAR QUE EL PERIODO DE PRECampaña CONFORME AL CALENDARIO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN CONCLUYÓ EL 31 DE ENERO DE 2021, POR LO QUE NO SE REALIZARON ACTOS DE PRECampañas RESPECTO A LAS CANDIDATURAS A LAS QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA REFERIDA, PUESTO QUE LA MISMA FUE PUBLICADA UN DÍA ANTES.

Aunado a lo anterior, se señala que el suscrito realicé mi solicitud de registro al cargo de candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro, Michoacán el 07 de febrero de 2021. Sin embargo, desconozco si fue aprobado mi registro y si participé como aspirante a dicho cargo, en virtud de que nunca fui notificado ni se publicaron los registros aprobados en la página de morena.si de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria, y por tanto, no se actualizó la obligación de rendir el informe de ingresos y gastos de precampaña ante esa autoridad fiscalizadora.

*Cabe señalar que no se realizaron gastos de precampaña por ningún concepto, ni se obtuvieron ingresos por ello; por lo que niego lo manifestado por la denunciante, aclarando que desconozco si algún tercero de mala fe o de buena fe, hizo propagando con mi imagen.
(...)”*

Al respecto, cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1.^a CCCXI/2014 (10.^a) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro **PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO**³⁶.

³⁶ Registro digital 2007343.

Consecuentemente, las sanciones previstas en las disposiciones legales invocadas (la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, en su caso, la cancelación del registro) no caben ser aplicadas de forma automática o categórica en todos los casos, sino, por un lado, es necesario, desde la dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este.

No debe pasar desapercibo que este Instituto no solo tiene la obligación el velar porque sus sanciones sean proporcionales en razón de los sujetos incoados, sino que tiene a su vez como una de sus atribuciones principales la de garantizar y legitimar el ejercicio efectivo del derecho humano de la ciudadanía al sufragio pasivo de conformidad con los artículos 1.º y 35, fracción II de la Constitución, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, razonables y, por lo tanto, proporcionales.

Al respecto, conforme al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas³⁷ cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos a votar y ser elegido, consagrados, de entre otros en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberá basarse en criterios objetivos y razonables.

En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho al voto adquiere una especial relevancia en las sociedades democráticas; pues los presupuestos de un Estado democrático se fundamentan en la participación inclusiva y universal de los ciudadanos; es por ello, que estos deben tomarse en consideración en la interpretación y aplicación del derecho³⁸.

Marco normativo del derecho al sufragio

Como premisa normativa inicial es necesario señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior considerar que el derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su correlativo artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho humano fundamental de carácter político-electoral de base constitucional y configuración legal; lo que implica que puede ser válidamente regulado por la

³⁷ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57.º período de sesiones, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1996, párrafos. 2 a 5.

³⁷ *Ibid.*, párr. 15.

³⁸ CEDH, Case of Hirst v. The United Kingdom (No. 2), Application no. 74025/01, párrafos. 58 -62.

legislatura ordinaria, siempre que se respete su contenido esencial y, por tanto, no se impongan condiciones que hagan nugatorio su contenido, o bien sean irrazonables, carentes de una base objetiva o desproporcionadas.

En esa línea, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las restricciones a los derechos de participación política deben ser interpretadas limitativamente, y en caso de encontrarse ante una diversidad de sentidos sobre el significado de una norma restrictiva, debe preferirse aquella que restrinja en menor medida el ejercicio del derecho a ser votado³⁹.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido el mismo criterio, adicionando que para su aplicación, se debe cumplir con el principio de legalidad; es decir, dichas restricciones y/o limitaciones deben estar expresamente previstas en una ley y cumplir el requisito de proporcionalidad⁴⁰; esto es, el derecho al voto debe apreciarse desde la dimensión de la protección hasta su ejercicio efectivo.

Así pues, el derecho humano a la participación política previsto en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no protege una forma de organización política en particular, sino los diversos mecanismos a partir de los cuales la voluntad general puede trascender en las decisiones públicas; ello, atendiendo a que es a través del derecho al voto, que las sociedades adquieren la posibilidad de participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos, se involucra a la voluntad popular en la libre determinación de las decisiones políticas y potencializa la constitución de formas de gobierno democráticas, consecuentemente cualquier restricción que se imponga a su ejercicio deberá basarse en criterios objetivos, claros y razonables⁴¹.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en una sociedad democrática, el reconocimiento de los derechos y libertades inherentes de la persona, su garantía y el respeto al Estado de derecho constituyen una triada indispensable; asimismo que de entre las condiciones necesarias para alcanzar una sociedad democrática, se encuentra: i) el derecho de acceso al cargo y su ejercicio de conformidad con la ley; ii) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas

³⁹ Pleno de la SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 74/2008 y sus acumulados, Sentencia de 12 de enero de 2010, pág. 91.

⁴⁰ Tesis LXVI/2016 de rubro **SEPARACIÓN DEL CARGO. NO RESULTA EXIGIBLE A DIPUTADOS FEDERALES PARA POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL**. Consultable en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 133 y 134.

⁴¹ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57. ° periodo de sesiones, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1996, párrs. 2 a 5.

y basadas en el sufragio universal y secreto; la existencia de un régimen plural de participación; y, iii) la separación e independencia de los poderes públicos⁴².

Establecido lo anterior, es importante señalar que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso a), b), d), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines de este Instituto, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; **asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales** y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; **llevar a cabo la promoción del voto informado**, entre otros.

Así pues, este Consejo General no puede obviar que el 6 de junio de la presente anualidad se celebra la Jornada Electoral, y que es imperativo para este Instituto velar por la integridad del proceso electoral y garantizar el ejercicio libre, certero e informado del derecho por las y los ciudadanos a votar, por lo que las determinaciones que éste emita, deberán generar condiciones que permitan responder a dichas obligaciones.

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una interpretación —literal o de algún otro tipo de interpretación que arroje un producto similar— de las disposiciones legales en estudio que den como resultado una lectura desproporcionada y, en su lugar, preferir **una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo** frente a las obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de los partidos y de los precandidatos de rendir cuentas.

Cabe señalar que estas obligaciones derivan del mandato constitucional de vigilar el origen y el destino de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos.

Por tanto, en el caso concreto, la sanción prevista en la **fracción III** del citado precepto legal, consistente en retirarle al C. Rachid Hassad González Parra, **no es la idónea**, toda vez al restringir su derecho a ser votada se violentaría la integridad de la contienda electoral, ya que no solo se afecta el derecho de la ciudadana si no que se afecta el derecho de quien vota al lesionar la certeza de los electores, en virtud, del calendario electoral al que se está sujeto.

⁴² Corte IDH, Caso Yatama vs., Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, No. 127, párrs. 191 a 194.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Señalado lo anterior, es dable establecer que la prevista en la fracción I, consistente en una amonestación pública sería una sanción que no se corresponde con el grado de afectación de los bienes jurídicos tutelados, pues ésta implica hacer un llamado o advertencia a la ciudadana infractora, a fin de que enmiende su conducta.

Señalado lo anterior, lo procedente ahora es analizar si en el caso en concreto, resulta viable imponer a **Rachid Hassad González Parra** la sanción prevista en la **fracción II** del citado precepto legal, para tal efecto se debe considerar que, presentó informe en ceros ante el partido Morena si que este lo haya hecho llegar a la autoridad fiscalizadora.

Ahora bien, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el **inciso h)** del presente apartado, **denominado “La capacidad económica del sujeto infractor”**, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el ciudadano cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción II** del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **multa** de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **1,250 (mil doscientas cincuenta) Unidades de Medida y Actualización**, cantidad que asciende a **\$108,600.00 (cinto ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al ciudadano **Rachid Hassad González Parra**, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **1,250 (mil**

doscientas cincuenta) Unidades de Medida y Actualización equivalente a **\$108,600.00 (cinto ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

B. Por lo que hace a la individualización e imposición de la sanción al partido político.

Visto lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, derivado del escrito de queja presentado en contra del partido político Morena, advirtió la probable omisión de dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de gastos de precampaña de su precandidato Rachid Hassad González Parra, ordenando dar inicio al procedimiento sancionador que se resuelve, emplazándole para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, así salvaguardar el debido proceso que rige el actuar de este Instituto ante probables infracciones a la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos.

Por lo tanto, de la integración del procedimiento de mérito esta autoridad electoral, con base en los argumento esgrimidos en el considerando apartados A, B y C de la presente Resolución, se tuvo por acreditada la omisión de presentación de informes de ingresos y gastos de precampaña, y toda vez que la autoridad fiscalizadora les ha garantizado a los sujetos obligados el debido proceso, al emplazarlos y darles la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera y, toda vez que la falta de informe impide que la autoridad fiscalizadora cuente con elementos para determinar la existencia de algún error o inconsistencia.

En consecuencia, la responsabilidad del partido político se analizará en el presente apartado siguiente para los efectos conducentes. Al respecto, se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una omisión de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El partido político omitió presentar un informe del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el periodo de precampaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Michoacán de Ocampo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado

violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos⁴³.

Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevara cabo sus actividades fiscalizadoras.

⁴³ Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir cuentas ante la autoridad de manera transparente, inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son de manera solidaria todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de

legalidad en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en materia de fiscalización radica en buena medida en el diseño de las mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el partido político, al ser omiso en presentar el Informe de Precampaña, del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, vulnera y obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas.

En consecuencia, al no tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por las conductas señaladas.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas materia de estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL⁴⁴.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

⁴⁴ De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-623/2021 Y ACUMULADOS, en el cual estableció lo siguiente:

“Ante estas precisiones, cuando un partido no registra un precandidato, pero éste realiza actos de precampaña y ambos omiten presentar el informe correspondiente, el grado de culpabilidad es distinto en la medida en que:

1) El precandidato omitió hacer la acción exigida e incumplió con un deber en su actuar (presentar el informe/omisión simple); y.

2) El partido político no evitó, a través de un deber de vigilancia, esa omisión (comisión por omisión, culpa in vigilando).

En el caso en concreto, esta Sala Superior considera que la calificación de la falta como culpable que le impuso el Consejo General del INE a MORENA y la respectiva reducción de ministraciones, no es incongruente en comparación con la que calificó a la del precandidato y su respectiva sanción, esto es, dolosa y con la pérdida del derecho a ser registrado.”

agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁴⁵

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 2 denominado “La capacidad económica del sujeto infractor” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar los informes de precampaña respectivos.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, del presente considerando en el cual se expuso

⁴⁵ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
- Que hay culpa en el actuar del sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁴⁶

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

⁴⁶ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al **Partido Morena** debe ser en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar un informe de precampaña**, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **100% (cien por ciento)** respecto del **30% (treinta por ciento)** sobre el tope máximo de gastos de precampaña establecido por la autoridad para los procesos de selección de precandidatos en el caso de Ayuntamientos, con la finalidad de contener en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán, lo cual asciende a un total de **\$30,659.45 (treinta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 45/100 M.N.)**.

Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes:

Nombre	Cargo	Entidad/ Municipio	Tope de Gastos de Precampaña	SANCIÓN ⁴⁷ 30% sobre el Tope de Gasto de Precampaña	Partido con Financiamiento Público Ordinario 2021 más alto MORENA	Porcentaje de sanción ³⁴
Rachid Hassad González Parra	Presidente Municipal	Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo	\$102,198.17	\$30,659.45	\$49,608,767.81	100%

Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para el **Partido Morena** se fundamenta en lo aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el que definen los criterios de proporcionalidad con los que se sancionara a cada instituto político derivado del financiamiento ordinario que perciben.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$30,659.45 (treinta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 45/100 M.N.)**.

⁴⁷ Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió en el estado de Michoacán, por concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el partido sancionado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

11. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, **privilegiar las notificaciones electrónicas, sobre las personales**, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

4. Esta autoridad cuenta con la carta de cada sujeto obligado manifestó su consentimiento para ser notificados vía correo electrónico.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la integridad física de las personas que intervienen en las actividades y comunicaciones ambas instancias.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido del Trabajo y la C. Tania Yunuen Reyes en términos del Considerando **5** de la presente Resolución

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento en el marco del Informe Anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2021 del Partido del Trabajo de conformidad con el **Considerando 6** de la presente Resolución.

TERCERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **Partido Político Morena** y el C. Rachid Hassad González Parra por lo desarrollado en los Considerandos **9 y 10** de la presente Resolución.

CUARTO. Se impone al partido político **MORENA**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$14,244.36 (catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)**, de conformidad con lo señalado en el **Considerando 9**.

QUINTO. Se sanciona al ciudadano **Rachid Hassad González Parra** con una multa equivalente a **1,250 (mil doscientas cincuenta) Unidades de Medida y Actualización** para el ejercicio dos mil veinte, misma que asciende a la cantidad de **\$108,600.00 (ciento ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 10 apartado A** de la presente Resolución.

SEXTO. Se impone al partido político **MORENA**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de **\$30,659.45 (treinta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 45/100 M.N.)**, de conformidad con lo señalado en el **Considerando 10 apartado B**.

SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución **al partido Morena** a través del Sistema Integral de Fiscalización.

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. Rachid Hassad González Parra y la C. Lorena Elizabeth Gaona Matus.

NOVENO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral de Michoacán, para los efectos siguientes:

- a.** Que proceda al cobro de las sanciones impuestas al Partido Morena y al C. Rachid Hassad González Parra, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación dela

entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del díasiguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 14 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración y a las medidas cautelares, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2021/MICH

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.

Se aprobó en lo particular los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**